



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

ACTA DE LA REUNIÓN DEL PLENO DE LA SALA DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA CELEBRADA EL DÍA 25 DE abril DE 2023.

EXCMO. SR. PRESIDENTE: DON LORENZO DEL RÍO FERNÁNDEZ; ILMOS. SRES. VOCALES: D. MANUEL MARTÍN HERNANDEZ-CARRILLO, D. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ VIÑAS, D. MANUEL LÓPEZ AGULLÓ, Dª MARÍA BEGOÑA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Dª MARÍA LUISA ALEJANDRE DURÁN, D. MANUEL ESTRELLA RUIZ, D. LUIS MIGUEL COLUMNA HERRERA, D. ANTONIO GERMÁN PONTÓN PRÁXEDES, D. FRANCISCO DE PAULA SÁNCHEZ ZAMORANO, D. JOSÉ LUIS LÓPEZ FUENTES, Dª LOURDES GARCÍA ORTÍZ, D. RAFAEL MORALES ORTEGA, D. JOSÉ MARÍA PÁEZ MARTÍNEZ-VIREL, D. ESTEBAN BRITO LÓPEZ, Dª MARÍA JOSÉ RIVAS VELASCO, Dª MARÍA LUISA ZAMORA SEGOVIA, Dª FRANCISCA MARTÍNEZ MOLINA D. MIGUEL ANGEL PAREJA VALLEJO, D. ALBERTO MANUEL DEL AGUILA ALARCON, D. JUAN JOSÉ PARRA CALDERÓN, Dª ROCÍO MARINA COLL, D. JESÚS MANUEL MADROÑAL NAVARRO, D. MIGUEL FRANCISCO SÁNCHEZ GASCA Y D. ANTONIO PASTOR SANCHEZ ; ILMTO. SR. SECRETARIO DE LA SALA DE GOBIERNO: D. PEDRO JESÚS CAMPOY LÓPEZ.

En Granada, en el día de la fecha, siendo las 10 horas y 30 minutos, se reúnen los miembros del Pleno que con anterioridad se relacionan, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. DON LORENZO DEL RIO FERNANDEZ. No comparece por enfermedad el Ilmo. Sr. Juez Decano D. FRANCISCO JOSÉ GUERRERO SUÁREZ. No comparecen ni justifican su inasistencia los Ilmtos. Sres. miembros electos D. JOAQUÍN YUST ESCOBAR, D. ÁLVARO MARCOS MARTÍN GÓMEZ y Dª LARA INMACULADA BLANCO CORONIL; se inicia la sesión procediéndose a la exposición, estudio, deliberación y decisión de los diversos asuntos pendientes, que fueron resueltos en la forma que a continuación queda reflejada:

1.- ÁREA DISCIPLINARIA

1.1- RECURSO DE ALZADA NÚM. 00000002/2023 interpuesto por D. al no estar de acuerdo con la imposición de la Multa de 200 euros dictada en los autos P. Abreviado 103/20 en la Pieza impos.multa coercitivas 103.01/20 por el JUZGADO DE LO PENAL Nº de , habiendo sido nombrado Ponente D. Jesús Manuel Madroñal Navarro (Magistrado de la Sección 7ª de la A. Provincial de Cádiz), y la Sala de Gobierno, por unanimidad, adopta el siguiente :

ACUERDO

En la Ciudad de Granada a 25 de Abril de 2023.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 24 de Noviembre de 2022 el Juzgado de lo Penal nº de dictó resolución en el Procedimiento Abreviado número 103/2020 por el que acordó imponer al testigo D. la multa de 200 euros por su incomparecencia como testigo al acto de



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

juicio oral, lo que provocó la suspensión del mismo, con el consiguiente perjuicio para las partes y la administración de justicia, constando que estaba debidamente citado en tiempo y forma.

SEGUNDO.- Se interpone recurso de Alzada por el propio Sr. , alegando el recurrente que envió al Juzgado previamente correo electrónico en el que comunicaba la imposibilidad de asistir a dicho juicio, remitiendo documentos con los que pretendía acreditar que se encontraba trabajando fuera del país. Adjunta a su recurso copia de los documentos que afirma fueron enviados telemáticamente.

La resolución que acuerda imponer la sanción se fundamenta en que el mencionado testigo no acudió al Juzgado pese a estar debidamente citado, sin justificar su ausencia; provocando la suspensión de la vista. Asimismo razona que dicho testigo no ha alegado causa alguna que justificara su falta de comparecencia.

TERCERO.- En la resolución y tramitación de este Recurso de Alzada se han observado todas las prevenciones legales.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNICO.- Ante el presente Recurso de Alzada, debemos señalar que el testigo recurrente había sido correctamente citado para comparecer a la vista, tal como mantiene Letrado de la Administración de Justicia en su escueto informe, y sin que ello haya sido negado por el propio recurrente, por lo que se entiende que había sido requerido y apercibido de sanción en caso de incomparecencia, con todas las advertencias y las prevenciones legales.

Llegado el día de la celebración del juicio, no compareció y ello provocó la suspensión del juicio pues la Acusación particular, que lo había propuesto, mantuvo que el testimonio era necesario para acreditar las posiciones de su escrito de acusación. Por todo ello, la Magistrada, con esta primera incomparecencia estimó procedente la imposición de la multa de 200 euros.

Es cierto y ha quedado acreditado que el testigo no asistió a la vista, pero con la documental aportada sí entendemos acreditado que advirtió al Juzgado la imposibilidad de asistir justificándolo en que iba a estar fuera del país como consecuencia de un contrato de trabajo, pudiéndose comprobar por este órgano que habiendo sido citado el 10 de Agosto de 2021, tal como afirma la juzgadora en su Auto, él remitió el 27 de Septiembre de 2021 a las 13:17 horas, al correo electrónico del Juzgado, . un email que titulaba con letras mayúsculas "NO ASISTENCIA JUICIO", ajuntando un documento en francés sin traducción en el que parece referirse a una contratación laboral.

Será debatible si la causa de inasistencia podía estar o no justificada, si el documento remitido debería haber tenido la traducción correspondiente, o si lo envió o no en plazo, pero la cuestión es que el testigo sí quiso comunicar unas circunstancias al Juzgado y no consta que recibiera respuesta alguna al efecto, por lo que no es admisible que, ante una primera incomparecencia, a pesar del intento de justificación de la ausencia, se haya impuesto la sanción de la multa, aún cuando haya sido en la cuantía mínima.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

Por ello, debe estimarse íntegramente el recurso de alzada planteado conforme a los artículos 556 y 557 de la LOPJ, revocando la resolución recurrida.

PARTE DISPOSITIVA

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, reunida en Pleno, acuerda ESTIMAR ÍNTEGRAMENTE el Recurso de Alzada interpuesto por D.

, frente a la resolución de 24 de Noviembre de 2022, dictada por la Magistrada titular de Juzgado de lo Penal nº de , acordando su revocación.

Particípese el presente Acuerdo al órgano citado para su ejecución, notifíquese al interesado a través del Decano correspondiente, para su conocimiento y efectos procedentes, haciendo saber que el presente Acuerdo cierra la vía administrativa y contra el mismo cabe recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación.

1.2- RECURSO DE ALZADA NÚM. 00000011/2023 interpuesto por por no estar de acuerdo con la resolución dictada por el Juzgado de lo Social nº de los de en el procedimiento Multa Coercitiva 2/2023, habiéndose nombrado Ponente a la Iltrma. Magistrada D^a María José Rivas Velasco, y la Sala de Gobierno, por unanimidad, adopta el siguiente:

ACUERDO

En la Ciudad de Granada a veinticinco de abril de dos mil veintitrés.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el seno de la pieza de sanción por mala fe procesal 2/2023 derivada del Procedimiento ETJ EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000046 /2019, seguido ante el Juzgado de lo Social número de de , se dictó auto de fecha veintitrés de enero de 2023, acordando lo siguiente: : Imponer al Graduado Social, D. , por temeridad, abuso de derecho, mala fe procesal y falta de respeto a las partes y autoridad judicial: Una multa de cuatrocientos euros por haber incurrido en responsabilidad disciplinaria en su actuación ante este tribunal, según lo anteriormente razonado que habrá de satisfacer en el plazo de cinco días desde la firmeza de esta resolución, siguiéndose en su caso la vía de apremio.

SEGUNDO.- Los hechos recogidos en el mismo son los siguientes: : En esta ejecución, que tiene nada menos que 247 acontecimientos, el profesional ha sido requerido de que cesara en su comportamiento irregular en el auto de 1 de septiembre de 2022 se desestimó el recurso de revisión interpuesto por la parte ejecutante contra el Decreto de la Letrada de la Administración de Justicia de 11-2-22 que inadmitía el recurso de reposición interpuesto contra la diligencia de ordenación de 19 de noviembre de 2021 por la que se le informaba que no cabía recurso alguno contra la providencia de 23 de julio de 2021, circunstancia que además se hacía constar en la mencionada providencia, y por ello se le inadmitía el escrito presentado, y en el Decreto que se recurre en revisión, se manifiesta



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

que no estamos ante el instrumento adecuado para que la parte ejecutante ventile sus quejas contra la LAJ.

TERCERO.- Contra dicho Auto el Sr. de conformidad con lo dispuesto en el art. 556 LOPJ, interpuso directamente en tiempo y forma recurso de alzada ante la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia al que fue remitido con testimonio de la documentación oportuna y el preceptivo informe del Juez emitido con fecha 24 de febrero de 2023 tras requerimiento previo.

CUARTO.- La Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia adoptó acuerdo de designar ponente y llevar el mismo al conocimiento del Pleno de 25 de abril de 2023.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Reitera el recurrente los motivos por los que solicitó la audiencia en justicia prevista en el artículo 75. 4 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, solicitando la revocación de la sanción impuesta. Fundamentalmente y en síntesis, mantiene que considera que está siendo objeto de una persecución por parte del juez con la colaboración de la la al haber sido abiertas 21 piezas con un montante total de 8400 € en multas. Considera que las dilaciones indebidas en los procedimientos alcanzan años habiendo hecho el juez caso omiso a lo que se exponía en su recurso en la ejecución de título judicial 46/2019. Entra a valorar lo que denomina ilegalidad de la providencia al inadmitir recurso de reposición pese a concurrir los requisitos legales, y en lo que respecta al presente, aparte de las afirmaciones contenidas en su escrito que contienen valoraciones personales sobre las intenciones que atribuye al recurrente al juez y que resultan inanes a los efectos del presente, el contenido del recurso ha de reconducirse a que indica fundamentalmente que se han tenido en consideración otros procedimientos que no son objeto de la presente de ejecución.

En tanto que los autos que contienen tanto la imposición de la sanción como el dictado tras el trámite de audiencia al recurrente se encuentran debidamente fundamentados exponiendo los motivos por los que el Magistrado entiende conculcada la buena fe procesal a los que ha de remitirse la presente resolución, desde una perspectiva jurídica lo que discute el recurrente es el contenido de las mismas en relación con la acreditación de la conducta que le fue imputada y que generó la sanción.

SEGUNDO.- Centrados en esos términos el objeto del recurso hay que tener en cuenta los efectos de la resolución del presente también los parámetros que recuerda el Tribunal Supremo en sentencia de 24 de mayo de 2017 respecto de la prueba indiciaria que destruye la presunción de inocencia al afirmar “ ..La aptitud de la prueba de indicios para contrarrestar la mencionada presunción, a la vista de la necesidad de evitar la impunidad de múltiples delitos, particularmente los cometidos con especial astucia, y la advertencia de que habría de observarse singular cuidado a fin de evitar que cualquier simple sospecha pudiera ser considerada como verdadera prueba de cargo. A partir de tal fecha con frecuencia se ha venido aplicando y estudiando por los Tribunales de Justicia esta clase de



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

prueba que ha adquirido singular importancia en nuestro Derecho Procesal, porque, como es obvio, son muchos los casos en que no hay prueba directa sobre un determinado hecho, y ello obliga a acudir a la indirecta, circunstancial, o de inferencias, para a través de los hechos plenamente acreditados (indicios), llegar al conocimiento de la realidad de aquel necesitado de justificación, por medio de un juicio de inducción lógica conforme a las reglas que ofrece la experiencia sobre la base de la forma en que ordinariamente se desarrollan los acontecimientos (SSTC. 229/88, 107/89, 384/93, 206/94, 45/97 y 13.7.98). Del mismo modo esta Sala de casación del Tribunal Supremo ha generado una amplia jurisprudencia al respecto, según la cual la realidad del hecho y la participación en el mismo del acusado puede ser establecida por la fórmula de indicios (SSTS. 17.11 y 11.12.2000 , 21.1 y 29.10.2001 , 29.1.2003 , 16.3.2004) siempre que concurren una serie de requisitos: a) Pluralidad de los hechos-base o indicios...b) Precisión de que tales hechos-base estén acreditados por prueba de carácter directo y ello para evitar los riesgos inherentes que resultarían de admitirse una concatenación de indicios, con la suma de deducciones resultantes que aumentaría los riesgos en la valoración. c) Necesidad de que sean periféricos respecto al dato fáctico a probar. d) Interrelación. Derivadamente, esta misma naturaleza periférica exige que los datos estén no solo relacionados con el hecho nuclear precisado de prueba, sino también interrelacionados; es decir, como notas de un mismo sistema en el que cada una de ellas represente sobre las restantes en tanto en cuanto formen parte de él. La fuerza de convicción de esta prueba dimana no sólo de la adición o suma, sino también de esta imbricación. e) Racionalidad de la inferencia. Esta mal llamada prueba de presunciones no es un medio de prueba, sino una forma de valoración de los hechos indirectos plenamente acreditados. Por ello, entre éstos y el dato precisado de acreditar ha de existir, conforme a lo requerido por el art. 1253 Cc. "un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano", enlace que consiste en que los hechos-base o indicios no permitan otras inferencias contrarias igualmente válidas epistemológicamente. f) Expresión en la motivación del cómo se llegó a la inferencia en la instancia. Pues solo cuando se contienen en la motivación de la sentencia exigida por el art. 120.3 CE. ... (SSTS. 24.5 y 23.9.96 y 16.2.99)".

Valorando con tales parámetros tanto lo acaecido en el procedimiento que dio origen a la sanción, como lo resuelto por el Magistrado que dictó la resolución, pese a la afirmada prueba insuficiente para poder imputar responsabilidad que finalmente dio lugar a la sanción, se entiende la existencia de datos suficientes de naturaleza indiciaria para imputar al recurrente la actuación infractora del deber de buena fe, derivado del contenido de dichas resoluciones así como de los escritos y recursos interpuestos por el Sr. , y como hemos indicado en otros recursos interpuestos por el mismo recurrente al haber sido sancionado por conductas parecidas en otros procesos, que sin perjuicio de que el mismo tenga derecho a articular los recursos que la Ley brinda frente a las resoluciones que se dictan en los procedimientos, sin embargo, estamos a juicio de esta Sala ante un uso de esa facultad que excede ese derecho. Y ello puesto que el uso de los recursos frente a las resoluciones no puede subvertir el principio de buena fe ya que, como se indica en el auto recurrido, cuenta con 247 acontecimientos el proceso del que deriva la presente pieza, ejecución 46/2019, indicando que fue requerido para cesar en dicho comportamiento en el auto desestimatorio del



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

recurso de revisión interpuesto contra el decreto de la letrada de la administración de justicia de fecha 11 de febrero de 2022 por el que se admitía el recurso de reposición interpuesto contra la diligencia de ordenación de fecha 19 de noviembre de 2021 en la que se le informaba que no cabía recurso contra la providencia de 23 de julio de 2021 en la que se le inadmitía escrito presentado.

Así en el Pleno de fecha 19 de diciembre de 2022, indicamos lo siguiente: A juicio de esta Sala, alegar un supuesto retraso en la tramitación de los escritos como motivo del recurso excedía del contenido de lo resuelto por la referida diligencia de ordenación. Entiende la Sala, que la interposición de un posterior recurso de revisión contra el citado Decreto, contra la diligencia de ordenación que acordaba dar cuenta al Magistrado Juez del recurso interpuesto, contra el decreto resolutorio del mismo... son actuaciones del Graduado Social recurrente totalmente innecesarias, carentes de justificación y causantes de un indebido retraso en el funcionamiento ordinario del Juzgado, y por más que por el recurrente se pretenda hacer ver que las disfunciones y dilaciones del procedimiento se deben a las confusiones y errores sufridos en el procedimiento judicial imputables a LAJ y Magistrado Juez, lo cierto es que su actuación en el procedimiento de ejecución de título judicial citado, lejos de corresponderse con una actuación acomodada a la buena fe procesal exigible, ha venido siendo de entorpecimiento en la tramitación del expediente, de falta de colaboración y lealtad procesal hacia el Órgano Jurisdiccional.

TERCERO.- Dicho lo cual, entendiendo acorde a derecho la tipificación disciplinaria que ahora nos ocupa, en aplicación del principio de proporcionalidad de la sanción que debe de regir en cualquier régimen jurídico sancionador, estimamos correcto el importe impuesto y se propone al Pleno de esta Sala de Gobierno TSJA mantener el importe de la sanción impuesta en cuantía de 400 €.

En atención a lo expuesto

PARTE DISPOSITIVA

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, reunida en Pleno, acuerda Desestimar el recurso de alzada interpuesto por frente al auto de fecha 23 enero 2023, a salvo del mejor criterio y parecer de esa Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Particípese el presente Acuerdo al órgano citado para su ejecución, notifíquese al interesado a través del Decano correspondiente, para su conocimiento y efectos procedentes, haciendo saber que el presente Acuerdo cierra la vía administrativa y contra el mismo cabe recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación.

1.3- RECURSO DE ALZADA NÚM. 00000010/2023, interpuesto por
por no estar de acuerdo con la Imposición de Multa Coercitiva por cuantía de 400 Euros



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

*impuesta en la Pieza Imp.Multa 1/2023 dictado por el Juzgado de lo Social nº de los de ,
habiéndose nombrado ponente al Magistrado D. Juan José Parra Calderón, y la Sala de Gobierno,
por unanimidad, adopta el siguiente:*

ACUERDO

En la Ciudad de Granada, a 25 de Abril de 2.023.

ANTECEDENTES DE HECHOS

PRIMERO. - Que por el Sr. Juez del Juzgado de lo Social Número de se dictó Auto 8/2023 de fecha 23-1-2023 imponiendo la multa de 400 euros a D. por temeridad, abuso del derecho, mala fe procesal y falta de respeto a las partes y a la autoridad judicial al haber incurrido en responsabilidad disciplinaria en su actuación ante ese Tribunal.

En fecha 4-2-2023 se presentó recurso de audiencia en justicia contra el Auto al anterior por el Graduado Social antes citado.

En fecha 6-2-2023 se dictó Auto por el Juzgado de lo Social Número de desestimatorio del recurso de audiencia.

En fecha se presentó recurso de alzada por el Sr. por no estar de acuerdo con la imposición de la multa coercitiva de 400 euros, realizando alegaciones similares al recurso de audiencia en justicia, tales que tiene acumulado un montante de 8-40000 euros en multas al ser el Graduado Social de con más trabajo, siendo objeto de persecución por el Juzgador con la ayuda de la LAL, habla de cinco juras de cuentas solicitadas y aún no tramitadas, que revela un auténtico abuso de autoridad del Juzgador y de la LAJ, ocultando deliberadamente resoluciones inadecuadas, dictando Providencias y Autos ilegales, que revelan auténticas faltas de respeto y acusaciones infundadas hacia su persona, con tremenda mala fe y temeridad por el Juzgador, alega que resulta repugnante e inadmisibles las manifestaciones del Juzgador sobre su actuación procesal.

SEGUNDO. - Que consta informe a los efectos del artículo 556 de la LOPJ realizado por el Magistrado Don .

TERCERO. - Recibidas las actuaciones, por Acuerdo del Excmo. Sr. Presidente de fecha 31-3-2023, se formó el oportuno expediente (recurso de alzada 10/2023).

CUARTO. - Dada cuenta a la Sala de Gobierno reunida en Comisión, en la misma se acordó pasar el asunto al conocimiento del próximo Pleno, designando Ponente al que suscribe.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - La impugnación tiene su origen en la Ejecución 63/2017 de dicho Juzgado de lo Social Número de , donde dicho recurrente ha sido requerido en distintas ocasiones para que cesara en su actitud, a saber:

1.- En el Auto de fecha 1-9-2022 que denegaba la aclaración de fecha 20-5-2022 de la Providencia de fecha 16-5-2022 que inadmitía el recurso de revisión al no ser esta la vía para verter y resolver quejas sobre dilaciones indebidas, recurso de revisión que carecía de sentido alguno ya que la presente Ejecución está finiquitada al haberse declarado mediante Decreto de 7-2-2022 su firmeza, acordándose por Diligencia de Ordenación de fecha 28-4-2022 el pago del principal, intereses y costas.

2.- En la Providencia de fecha 1-9-2022 que inadmitía el recurso de reposición de fecha 29-7-2021 presentado por el ejecutante contra la Providencia de fecha 22-7-2021, contra la que no cabía recurso alguno, estando igualmente resuelta la cuestión de los mandamientos de pago por auto que resuelve la revisión contra el Decreto de fecha 13-8-2021, alegando quejas por las dilaciones indebidas, y acusaciones y provocaciones sobre las actuaciones de la LAJ y del Juzgador.

SEGUNDO. – Las actuaciones realizadas por este Graduado Social pueden considerarse irregulares e improcedentes, siendo el mismo modus operandi: recurrir resoluciones contra las que expresamente no cabe recurso alguno para intentar conseguir una resolución ajustada a sus intereses, pedir aclaraciones de las aclaraciones para conseguir una resolución ajustada a sus intereses, recursos innecesarios como las de mero traslado al Juzgador para resolver, faltas de respeto a la LAJ y al Juzgador, etc. Lo anterior ocasiona un auténtico desorden y provoca multitud de dilaciones en claro fraude de ley, beneficiándose claramente de sus propios actos fraudulentos, lo que denota evidente mala fe procesal, abuso del derecho y temeridad procesal.

Las alegaciones realizadas en el recurso de audiencia en justicia son ininteligibles, y ni siquiera ataca la resolución recurrida, hablando de omisiones y de ocultaciones de resoluciones, para terminar, diciendo que lleva un total de 8.400,00 euros en multas impuestas, imputando a la Secretaria de Gobierno del TSJ la autoría de su imposición, hablando de la mala fe del Juzgador ante tan insostenibles acusaciones. Lo mismo reitera en el recurso de alzada.

La realidad es que se ha impuesto la multa de 400,00 euros de conformidad con los artículos 553, 546.3 de la LOPJ este último en relación con el artículo 75.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, siguiendo el Juzgador a quo con el criterio uniforme establecido por esta Sala de Gobierno en Acuerdos anteriores, tales como el 26-4.-2022 desestimatorio del recurso de alzada confirmando el Auto de fecha 20-5-2021 donde se le imponen 400,00 euros de multa por hechos similares, y Acuerdo de fecha 19-12-2022, o el de la Pieza Separada 572022 por mala fe procesal 997/2016.....



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

En atención a lo expuesto,

PARTE DISPOSITIVA

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, ACUERDA DESESTIMAR EL RECURSO DE ALZADA interpuesto por el Graduado Social Don , confirmando íntegramente la sanción impuesta de MULTA DE 400,00 euros en el Expediente aludido.

Particípese el presente Acuerdo al órgano citado y notifíquese al interesado, a través del Decanato de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Alcalá de Guadaira, para su conocimiento y efectos procedentes.

1.4- RECURSO DE ALZADA NÚM. 00000038/2022 Interpuesto por D.

por no estar de acuerdo con la Imposición de la Multa de 400 Euros dictada por medio de Auto de fecha 19 de Septiembre de 2022 en la Pieza de Imposición de Multa Coercitiva 4/2022 por el Juzgado de lo Social nº de los de , habiéndose nombrado Ponente a la Iltna. Sra. Magistrada Lara Inmaculada Blanco Coronil, y la Sala de Gobierno, por unanimidad, adopta el siguiente:

ACUERDO

En la Ciudad de Granada, a 25 de Abril de 2.023.

ANTECEDENTE

PRIMERO: El presente Recurso de Alzada se interpone por el Graduado Social , frente a la resolución de 19 de septiembre de 2022. Esta resolución impone sanción al Graduado Social interviniente en el procedimiento referido.

El Auto de 19 de septiembre de 2022 le impone la sanción antes referida, por temeridad y abuso del derecho, mala fe procesal y falta de respeto a partes, testigos y autoridad judicial. Esta resolución fue recurrida en audiencia , y desestimado por auto de 30 de septiembre de 2022, interponiendo frente al mismo recurso de alzada a resolver por esta Sala.

SEGUNDO.- La sanción impuesta por el Ilmo. Juez Sr. en auto de 19 de Septiembre de 2022, se fundamenta en el art. 247 de la LEC., y art 75 LRJS .

La sanción impuesta se basa en entender que el mencionado Graduado Social incurrió en una conducta contraria a la buena fe procesal, basada en su comportamiento en el procedimiento PO 197/20.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

El Juez en su resolución afirma que la actuación del sancionado los días 14 y 20 de julio de 2022 se refieren y en concreto al primero de los días, que en la celebración del acto de la vista el Graduado Social entró en discusión constante con el juzgador sin aceptar en ningún momento las decisiones adoptadas pese a la posibilidad de recurso, no respetar los derechos de sus compañeros de profesión a los que interrumpía constantemente, no respetar las declaraciones del demandado ni de los testigos en sus interrogatorios y por hablar con su cliente en pleno acto para decirle que saliera de Sala a espiar al demandado, que estaba en el cuarto de baño para que no se comunicara con nadie, afirmando en trámite de conclusiones que el juzgador no quería conocer la verdad material.

Que el 20 de julio de 2022 el mismo Graduado Social procedió a presentar vía Lexnet unos documentos, pese a estar los autos vistos para sentencia, prueba que fue inadmitida en dos ocasiones anteriormente en el acto de la vista, en fase de proposición de pruebas, y nuevamente cuando quiso aportarlo como diligencia final.

El recurrente alega como motivos del recurso, en primer lugar la inadecuada apertura de pieza de multas coercitivas. En segundo lugar y respecto a los hechos ocurridos el 14 de julio de 2022, que el juez en su resolución no concreta las frases emitidas causándole indefensión; ni las referidas a la parte, ni testigos ni compañeros profesionales. Del mismo modo, entiende que el juez no ha concretado las faltas de respeto de las que se le acusa. Afirma que el juez reconoció a los compañeros presentes, “que se había pasado con él (en referencia al recurrente)”.

En relación a los hechos del 20 de julio de 2022, el Graduado Social alega como motivos que el juez le profesa inquina, que tras darle traslado un día después del juicio de determinada documentación, es por lo que procedió a aportar documentos, pero que los mismos ya constaban en autos.

Niega el recurrente la existencia de temeridad, mala fe procesal o abuso del derecho, y falta de respeto en su proceder.

Finalmente pide que se deje sin efecto la sanción impuesta.

TERCERO: En la resolución y tramitación de este Recurso de Alzada se han observado todas las prevenciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO: La sanción impuesta por el Ilmo. Juez Sr. se basa en el ar. 247 de la LEC que establece que “Respeto a las reglas de la buena fe procesal. Multas por su incumplimiento.

1. Los intervinientes en todo tipo de procesos deberán ajustarse en sus actuaciones a las reglas de la



buena fe.

2. Los tribunales rechazarán fundadamente las peticiones e incidentes que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal.

3. Si los Tribunales estimaren que alguna de las partes ha actuado conculcando las reglas de la buena fe procesal, podrán imponerle, en pieza separada, mediante acuerdo motivado, y respetando el principio de proporcionalidad, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la tercera parte de la cuantía del litigio.

Para determinar la cuantía de la multa el Tribunal deberá tener en cuenta las circunstancias del hecho de que se trate, así como los perjuicios que al procedimiento o a la otra parte se hubieren podido causar.

En todo caso, por el Secretario judicial se hará constar el hecho que motive la actuación correctora, las alegaciones del implicado y el acuerdo que se adopte por el Juez o la Sala.

4. Si los tribunales entendieren que la actuación contraria a las reglas de la buena fe podría ser imputable a alguno de los profesionales intervinientes en el proceso, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, darán traslado de tal circunstancia a los Colegios profesionales respectivos por si pudiera proceder la imposición de algún tipo de sanción disciplinaria.

5. Las sanciones impuestas al amparo de este artículo se someten al régimen de recursos previstos en el Título V del Libro VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial.”

Y artículo 75 LRJS:

“1. Los órganos judiciales rechazarán de oficio en resolución fundada las peticiones, incidentes y excepciones formuladas con finalidad dilatoria o que entrañen abuso de derecho. Asimismo, corregirán los actos que, al amparo del texto de una norma, persigan un resultado contrario al previsto en la Constitución y en las leyes para el equilibrio procesal, la tutela judicial y la efectividad de las resoluciones.

2. Quienes no sean parte en el proceso deben cumplir las obligaciones que les impongan los jueces y tribunales ordenadas a garantizar los derechos que pudieran corresponder a las partes y a asegurar la efectividad de las resoluciones judiciales.

3. Si se produjera un daño evaluable económicamente, el perjudicado podrá reclamar la oportuna indemnización ante el juzgado o tribunal que estuviere conociendo o hubiere conocido el asunto principal.

4. Todos deberán ajustarse en sus actuaciones en el proceso a las reglas de la buena fe. De vulnerarse éstas, así como en caso de formulación de pretensiones temerarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, el juez o tribunal podrá imponer mediante auto, en pieza separada, de forma motivada y respetando el principio de proporcionalidad, ponderando las circunstancias del hecho, la capacidad económica y los perjuicios causados al proceso y a otros intervinientes o a terceros, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

pueda superar la cuantía de la tercera parte del litigio.

Aquel al que se hubiere impuesto la multa prevista en el párrafo anterior podrá ser oído en justicia. La audiencia en justicia se pedirá en el plazo de los tres días siguientes al de la notificación de la multa, mediante escrito presentado ante el juez o tribunal que la haya impuesto. La audiencia será resuelta mediante auto contra el que cabrá recurso de alzada en cinco días ante la Sala de Gobierno correspondiente, que lo resolverá previo informe del juez o Sala que impuso la multa.

De apreciarse temeridad o mala fe en la sentencia o en la resolución de los recursos de suplicación o casación, se estará a lo dispuesto en sus reglas respectivas.

5. El incumplimiento de las obligaciones de colaboración con el proceso y de cumplir las resoluciones de los jueces y tribunales y de los secretarios judiciales en su función de ordenación del procedimiento y demás competencias atribuidas por el artículo 456 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin perjuicio de lo previsto en los apartados 3 y 4 anteriores, darán lugar, respectivamente, a la aplicación de los apremios pecuniarios a las partes y de las multas coercitivas a los demás intervinientes o terceros, en los términos establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 241, pudiendo ser oídos en justicia en la forma prevista en el apartado anterior”.

SEGUNDO.- Para resolver la alzada planteada resulta necesario indicar que se han cumplido las formalidades procesales, tales como apertura de pieza separada , trámite de alegaciones al graduado social recurrente, etc.

Si se lee atentamente el auto de 19 de septiembre de 2022, el fundamento de la sanción impuesta en el procedimiento consiste en que el recurrente D. _____ fue apercibido por el Juez de apertura de expediente disciplinario (hasta en 2 ocasiones (haciendo constar el minuto de la grabación: 2:27:43-2:28:20 y 2:33:55-2:34:50), tras haber sido ya amonestado verbalmente (2:26:00-2:27:30 de la grabación), por efectuar una continua discusión con el juzgador sin aceptar en ningún momento las decisiones adoptadas, pese a la posibilidad de recurso, (v. entre otros, 24:00-26:00; 35:00-41:15; 1:45:25-1:46:15; 1:52:45- 1:53:40 de la grabación), por no respetar los derechos de sus compañeros de profesión, a los que cortaba continuamente (v. entre otros, 2:12:00-2:13:00 de la grabación), por no respetar las declaraciones del demandado, D. _____ (59:00-1:00:22 de la grabación), ni las declaraciones de los testigos, D^a _____ (59:00-1:00:22 de la grabación), D^a _____ (2:09:30-2:11:45 de la grabación), y _____ (2:22:25-2:24:30 de la grabación), a los cuales quería imponer sus propias declaraciones sin aceptar lo que declaraban, y por hablar con su clienta en el acto del juicio para decirle que saliera de la Sala a espiar a D. _____, el cual estaba en el cuarto de baño, para que no se comunicara con nadie (2:00:00-2:01:30 de la grabación), llegando incluso a manifestar en fase de conclusiones que el juzgador no quiere saber la verdad material (2:33:55-2:34:50 de la grabación), faltando gravemente de esta manera el respeto a las partes demandadas y sus representantes, a los testigos y al juzgador.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

Contrariamente a lo que afirma el recurrente, el juez sí concreta los actos objeto de sanción - efectuar una continua discusión con el juzgador sin aceptar en ningún momento las decisiones adoptadas, pese a la posibilidad de recurso, por no respetar los derechos de sus compañeros de profesión, a los que cortaba continuamente , no aceptar las manifestaciones de la parte contraria y los testigos, a los cuales quería imponer sus propias declaraciones sin aceptar lo que declaraban, y por hablar con su clienta en el acto del juicio para decirle que saliera de la Sala a espiar a D. , el cual estaba en el cuarto de baño, para que no se comunicara con nadie, afirmando la falta de interés del juzgador en conocer la verdad material-.

Respecto a los hechos ocurridos el 20 de julio de 2022, del mismo modo, procedió a aportar via Lexnet elementos probatorios, documental, previamente inadmitida hasta en dos ocasiones. Las actuaciones se habían suspendido por prejudicialidad penal, quedando suspendido el plazo para dictar sentencia.

Puede observarse analizando lo afirmado por el juez sancionador así como visionada la grabación de la vista, , que el Graduado Social actuó de forma temeraria, al no respetar las decisiones judiciales en el acto del juicio entrando reiteradamente en contradicción, la interrupción reiterada a los compañeros profesionales en el acto del juicio oral cuando no tenía la palabra, conducta improcedente de no querer aceptar ni admitir las declaraciones de la parte contraria y de los testigos que eran contrarios al parecer a los intereses de su clienta, e incluso tomar la palabra y requerir a su clienta para que abandonara la Sala para espiar al demandado que había sido ir al baño, así como poner en duda la profesionalidad del juzgador afirmando su falta de interés e conocer la verdad material de los hechos.

Pues bien, efectuado este examen, parece lógico y razonable entender que la actuación del Graduado Social exceden abiertamente del ejercicio del derecho de defensa y de lo objetivamente abarcable, apreciándose mala fe en su actuación , temeridad , y falta de respeto a las partes, testigos, al juzgador en sus afirmaciones innecesarias y desobedeciendo las órdenes emitidas siendo previamente amonestado verbalmente.

Cuestión distinta son los hechos acaecidos el 20 de julio de 2022, que a juicio de esta ponente no se estiman lo suficientemente relevantes como para ser merecedora de sanción disciplinaria, puede entenderse discutible la aportación de documentos denegados como pruebas en dos ocasiones anteriores pero se soluciona con la simple inadmisión de los mismos.

Todo ello, prueba la temeridad y mala fe procesal de recurrente llevando a cabo actuaciones en el acto del juicio que exceden de la buena fe procesal.

POR LO EXPUESTO

PARTE DISPOSITIVA



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, ACUERDA DESESTIMAR EL RECURSO DE ALZADA interpuesto por el Recurrente Sr.

(Graduado Social), contra Auto del Juzgado de lo Social Num. de , de fecha 30 de septiembre de 2022, resolutorio del Recurso de Audiencia en Justicia interpuesto contra el Auto de 19 de septiembre de 2022.

Particípese el presente Acuerdo al órgano citado para su ejecución, notifíquese al interesado a través del Decano correspondiente, para su conocimiento y efectos procedentes, haciendo saber que el presente Acuerdo cierra la vía administrativa y contra el mismo cabe recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación.

2.- MEDIDAS DE APOYO Y SEGUIMIENTO

2.1- VISITA DE INSPECCIÓN Nº 00000001/2023 realizada al JUZGADO DE LO PENAL NÚMERO 5 DE ALGECIRAS por el Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla el día 30 de noviembre y 21 de diciembre de 2022, sirviendo el órgano judicial la Magistrada Juez Doña María José Tejuca Sanz, y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, y por unanimidad, acuerda APROBAR LA VISITA DE INSPECCIÓN GIRADA.

El Juzgado ha sido objeto de visita de inspección por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial en el año 2017.

La plantilla está integrada por la Magistrada titular, Doña María José Tejuca Sanz, que tomó de posesión el 25/09/2020 como Jueza y el 01/12/2020 como Magistrada, 1 Letrada de la Administración de Justicia titular, Doña Blanca Arrazola Ramírez, 2 Gestores (actualmente uno de baja y sin cubrir, ambos titulares), Don (titular) y Doña (titular), titular (actualmente de baja desde el 26/10/2022 y plaza se encuentra sin cubrir). 4 Tramitadores (todos titulares) Doña (titular), Doña (titular), Don (titular), Doña (titular), y 2 Auxilios judiciales, Doña (titular) y Doña (interina).

La letrada de la administración de justicia se incorporó al órgano el 17 de febrero año 2021 y ha realizado una correcta labor, reorganizando la carga de trabajo en cada uno de los negociados con la intención de que el trabajo fuera constante y uniforme, conseguir regularizar la llevanza de los distintos procedimientos y controlar a través de distintas libros, tablas y listados, la carga de trabajo de este órgano judicial. Debe tenerse en cuenta que desde su toma de posesión ha podido apreciar la pendencia alta existente en la sección de ejecutorias del órgano judicial, si bien debemos tener en cuenta que todos los procedimientos y reparto durante el año 2020 se atribuía exclusivamente a este Juzgado de lo Penal, contribuyendo a que el numero de procedimientos y ejecutorias aumentara vertiginosamente en un breve periodo de tiempo.

El ambiente laboral, tanto entre los funcionarios como con el equipo rector, LAJ y Magistrados, es bueno y se puede considerar, según afirma la Letrada de la Administración de Justicia, que la actividad desplegada es constante y en fase de mejora. La actitud de los funcionarios es positiva,



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

reduciéndose de forma considerable el número de suspensiones de juicio, de asuntos pendientes de firmeza, elevaciones de recurso a la Audiencia, así como en la provisión de escritos.

Todos los integrantes de la Oficina realizan las mismas funciones en cuanto a la tramitación y ejecución de procedimientos. La asignación se realiza por orden ascendente de uno a seis (que son los negociados existentes en la Oficina). Los funcionarios de Auxilio judicial realizan tareas de registro y realización de exhortos, registro de piezas de convicción, organización y gestión de archivo de los procedimientos, atención al público, grabación de las vistas (entre otras). En la actualidad, han aumentado exponencialmente las peticiones de videoconferencias y webex para asistir a juicios, lo que conlleva que el trabajo de auxilio judicial ha aumentado considerablemente.

El control en la presentación de los escritos no lo realiza personalmente la letrada a diario, únicamente los descarga y reparte, indicándosele que debe hacer de forma personal, no delegada, ese control y filtro de escritos. Sí realiza la LAJ una labor de control del impulso procesal, a través de varios listados y libros manuales. Para mejorar la eficiencia en su organización, se recomienda control a través de tablas excell que tienen implantadas algunos letrados de esta clase de órganos, con los ítems y observaciones que son adecuadas para un control más efectivo de las ejecutorias penales.

La plantilla se considera ajustada para el volumen de ingreso, pero es necesario que se cubran con rapidez las bajas de los funcionarios. Otra problemática es que, en la mayoría de las ocasiones, nombran a personal sin experiencia en la materia, lo que retarda la mejora del negociado al que accede, sin una mejora a corto plazo en el mismo. Se le recomienda a la LAJ que reflexione sobre una organización mas eficiente de su personal, a través de la experiencia positiva de otros compañeros de esta clase de órganos, en la que se dedican dos funcionarios de tramitación especializados para los señalamientos y el resto, 6 divididos en dos equipos de un gestor con dos tramitadores, llevando los números pares e impares respectivamente, sistema que mejora de forma probada la gestión de la ejecución penal y equilibra el ritmo de trabajo y deficiencias que pueden existir en un sistema actual organizativo, centrado actualmente en 6 negociados separados.

El edificio se encuentra en malas condiciones. Sería necesario un mantenimiento mínimo, no sólo para una buena imagen de la justicia, sino, principalmente, para garantizar el cumplimiento de la Ley de Riesgos Laborales para el personal que desempeña sus funciones en la sede.

No hay ningún espacio para la atención al público. Se tiene que hacer en el pasillo. Se dispone de un único baño para todo el personal del Juzgado 2 y del Juzgado 5 (y la mayoría del personal son mujeres). No hay zonas de espera. Hay un arco de seguridad, pero no funciona. Se dispone de una sala de vistas exclusiva pero es muy pequeña. En muchas ocasiones es necesario consultar con el resto de Magistradas para poder disponer de otras salas los días de juicios donde hay más partes. Son múltiples las incidencias que ocurren en la sala de vistas en relación con el funcionamiento del sistema de grabación, que obliga a la Letrada a dedicarse los días de juicio exclusivamente a la redacción de las actas, sin poder desempeñar el resto de funciones. También han sido innumerables las incidencias abiertas en el CAU para poder solucionar este problema de manera definitiva, sin que, hasta la fecha, se haya solucionado.

A nivel de archivos, el órgano no tiene necesidades de liberación de espacios, si bien es completamente inoperativa la ubicación del personal del órgano judicial y el equipo directivo ya que



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

se encuentran distribuidos en dos plantas, lo que es absolutamente inadecuado para poder establecer un sistema de gestión adecuado en el flujo de trabajo de cualquier sistema organizativo.

La utilización de la aplicación de gestión procesal por los integrantes de la plantilla es correcta, si bien el grado de actualización de las fases y estados no siempre es satisfactorio. Hay bastantes procedimientos que como fase señala “acabado” y posteriormente en la aplicación (por estadísticas) aparece como “en trámite”. El sistema genera listados de pendencia y se efectúan comprobaciones periódicas de las fases y estados de modo que sea útil para la confección de estadísticas y alardes. En cuanto a la utilización de texto libre en la tramitación o modelos que ofrece el sistema de gestión, se utilizan los modelos que ofrece el programa y solo cuando no se dispone del modelo deseado, se recurre al de texto libre, cambiando siempre el título para facilitar una rápida localización de las resoluciones.

El LAJ tiene firma digital. No entra en sala, pero los viernes visiona las grabaciones de arconte. Siempre se deja constancia en autos con el hito correspondiente en Adriano. Todos los funcionarios disponen de claves de acceso para el Punto Neutro Judicial, se utiliza con normalidad y no existe alguna incidencia al respecto.

En cuanto al sistema de intercambio electrónico de exhortos existente en el Punto Neutro Judicial (Circular 1/12, de 30 de septiembre), este órgano sí recibe los exhortos por este sistema pero la devolución se realiza por correo certificado o se entrega en mano. Los exhortos se mandan por NAUTIUS desde este Juzgado y viceversa y también en papel.

Se da cumplimiento del Reglamento de Homogeneización del CGPJ 2/2010, fundamentalmente en cuanto a la transferencia y registro de procedimientos. La aplicación de gestión procesal permite registrar todos los datos definidos como obligatorios por el Reglamento 2/2010, de 25 de febrero, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, sobre criterios generales de homogeneización de las actuaciones de los Servicios Comunes Procesales

El Servicio Común con funciones de Registro y Reparto registra todos los datos definidos como obligatorios por el Reglamento 2/2010, de 25 de febrero, sobre criterios generales de homogeneización de las actuaciones de los Servicios Comunes Procesales. La aplicación de gestión procesal hace posible obtener directamente de las aplicaciones de gestión los “hitos” definidos en el Test de Compatibilidad.

En cuanto a los sistemas de grabación: El sistema de grabación es ARCONTE y como complemento se usa CIRCUIT y CISCO WEBEX.

La letrada vela por la tramitación digital de todos los procedimientos y sigue las pautas establecidas al efecto en el entorno digital con cumplimiento de las instrucciones dictadas por el Secretario General de la Administración de justicia y este Secretario de gobierno, pero no podemos ignorar que este órgano recibe procedimientos de otros órganos al tratarse, de órgano de enjuiciamiento penal, lo que le sirve, por un lado para poder corregir en determinados supuestos deficiencias procedentes de esos expedientes, pero desgraciadamente, en el ámbito jurisdiccional penal todos los asuntos llegan en formato papel. Tiene esta cuestión su explicación en que aunque los órganos unipersonales itineran informáticamente todos los asuntos por Nautius, y el contenido de las resoluciones judiciales dictadas pueden comprobarse a través del modo consulta en la propia aplicación de gestión procesal Adriano,



hay que afirmar que en esta jurisdicción penal no se reciben los expedientes judiciales de forma digital ni en formato de expediente judicial electrónico y ello por los siguientes motivos, al contrario se remiten los procedimientos en papel, especialmente motivado por la exigencia del Ministerio Fiscal al respecto, lo que motiva que los órganos unipersonales penales, pese a que la gran mayoría de ellos tramitan de manera digital el procedimiento, reproducen en papel todo el expediente para poderlo tramitar con la Fiscalía. A ello se añade que la fiscalía no forma parte de LEXNET, pese a estar legalmente previsto al objeto de recibir notificaciones y práctica de diligencias por vía telemática, lo que dificulta el tránsito en estos órganos judiciales al expediente digital. Se hace necesario recordar a los órganos judiciales penales la obligación de la tramitación digital íntegra de los expedientes y la colaboración en este sentido por parte de la Fiscalía.

Por lo demás, en el trabajo de los funcionarios se cuida el cumplimiento de las necesidades de anotaciones telemáticas de todo tipo que son exigibles, debido a la carga de trabajo que soportan por volumen de procedimientos en esta fase, la Letrada se ocupa de que se efectúan por los funcionarios todas la anotaciones y actualizaciones en el Registro de Medidas Cautelares y Registro de Penados de las medidas de requisitorias, de violencia de género, así como de la anotación y registro de todas las sentencias dictadas por este órgano.

Debe insistirse especialmente en la actualización de fases y estados, y en el registro de cuantos acontecimientos procesales se producen y la identificación suficiente de los mismos, extremos éstos en los que la atención y dedicación ha de ser especialmente minuciosa para el futuro funcionamiento adecuado del expediente digital.

Se utilizan tanto los libros informáticos como manuales.

La cuenta de depósitos y consignaciones es la cuenta con numero 5428, la cual tiene muy poco tiempo de antigüedad, posee un saldo muy normalizado de 224.740 €, indicar que en solo dos asientos existe la cantidad de 72.400 €, por lo que no hay que destacar el aspecto de un volumen desproporcionado, sino todo lo contrario. Posee 244 ingresos en el último mes, lo que significa que tiene ingresos de media alta para el tipo de juzgado y tiempo que lleva actuando el mismo.

Se aprecia que no existen expedientes operativos de antigüedad, además de ser pocos los mismos, lo que hace pensar que la cuenta está bien controlada. Tampoco en cuanto a las cuentas, expedientes abiertas, se aprecia un retraso alguno, al ser todas ellas correspondientes al actual año 2022, lo que también hace pensar que la cuenta está bien trabajada.

En cuanto a las operaciones pendientes de cobro hay 47 y destacar que no existe ninguna antigua, siendo todas ellas, con mandamientos expedidos dentro de este año 2022.

Se constata una sola operación de subasta judicial electrónica en estado de puja, concluida y pendiente de finalización con fecha 10 de octubre de 2022.

En conclusión, se detecta que el trabajo que se realiza sobre la cuenta de depósitos y consignaciones es muy constante, por lo que ha sido felicitada la letrada, observado ante dicha realidad demostrativa en varias ejecutorias en las que el ingreso y devolución de indemnizaciones, así como la transferencia al tesoro público de cantidades, es muy ágil y constante.

Los boletines estadísticos y los datos recogidos en el Acta de la Inspección arrojan una pendencia de 174 procedimientos abreviados. En la tramitación de ejecutorias se detecta una pendencia alta, en



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

concreto 647 ejecutorias penales. Hay que tener en cuenta que este órgano por reparto asumió en el año 2020 y parte del 2021 todas las ejecutorias que se recibían a los Juzgados de lo Penal de Algeciras de forma exclusiva, esta circunstancia ha lastrado un buen funcionamiento del órgano de inicio, lo que una vez equilibrado en su nivel de entrada de asuntos, al igual que los órganos de su clase en Algeciras, debe servir para la normalización del trámite y mejora de los números de pendencia.

De todo lo anterior se puede concluir:

1. El Juzgado inspeccionado soporta, en términos generales, una carga de trabajo elevada, si bien no supera el criterio orientativo de 400 procedimientos abreviados por órgano y año como carga de trabajo referencial.
2. Del estudio detallado de los anteriores datos de la presente inspección puede concluirse que la situación del órgano jurisdiccional inspeccionado puede considerarse satisfactoria, conscientes de sus características y problemática de plantilla, por lo que debemos reconocer el esfuerzo y trabajo que se viene impulsando.
3. La actual titular dedica dos días de la semana para celebración de vistas o juicios, sumándose otro día al mes para juicios rápidos. Por lo general, se oscila entre 7 a 9 señalamientos por sesión, por lo que se estima que el nivel de señalamiento del órgano es razonable a la vista del volumen de ingreso.

Se observa un calendario correcto, el último referido al mes de marzo de 2023, si bien se revelan disfunciones y un porcentaje elevado -y reiterado- de suspensiones en procedimientos (cinco o seis suspensiones en idéntico asunto), aspecto que debe mejorar para que sea más eficiente la labor que se está realizando.

4. Desde un punto de vista cualitativo, se observa en general un buen trabajo y control por parte de los órganos rectores de la oficina judicial. No obstante, se han detectado problemas y disfunciones en algunos negociados, por ejemplo con los asuntos terminados en 2, 5 y 6. Así, se observa en conjunto una tramitación adecuada, pero descompasada en determinados procedimientos coincidentes con el negociado 1, en el cual se debe mejorar el control del impulso y sobre todas las paralizaciones que se detectan en algunas ejecuciones y en menor cuantía, también se detectan en el negociado 5, sobre lo que el equipo directivo deberá establecer un plan de actuación para la mejora y el impulso mas cercano de dichos procedimientos.

Por ello, la titular del órgano judicial, conjuntamente con la Letrada de la Administración de Justicia, dentro de sus competencias, seguirán actuando lo necesario para mayor seguimiento, impulso y revisión periódica de los procedimientos.

5. Se detectan relaciones correctas entre los integrantes de la oficina. Se aprecia una buena dirección y control. La oficina judicial funciona bien a pesar de la carga de trabajo existente, mérito imputable a todos los que forman parte de la misma y a quienes constituyen el equipo rector.
6. El número de ejecutorias es elevado y refleja una situación delicada de pendencia y dilaciones en este negociado. Por ello, es imprescindible que el esfuerzo realizado en el enjuiciamiento tenga su complemento en la tramitación de la ejecución penal, cuestión en la que está involucrada la LAJ y debe ser animada para continuar en su labor de mejora en esta materia. Además, esta organización



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

necesita la aplicación de criterios homogéneos y pautas, alguna de las cuales en materia de ejecución le han sido recomendadas en otro apartado de este informe.

7. Debe mantenerse el esfuerzo en el tratamiento informático de los procedimientos para la correcta implantación del expediente digital, así como la plena anotación e identificación de los acontecimientos de cada asunto en el sistema de gestión procesal.

Visto el inconveniente de que muchos órganos judiciales no confeccionan correctamente el expediente digital, ni vienen bien identificados los acontecimientos ni indexado correctamente el procedimiento, sin olvidar que los Juzgados instructores todavía remiten en papel los procedimientos, es imprescindible que por el Secretario de Gobierno y los respectivos Secretarios Coordinadores se impartan las oportunas instrucciones, circulares y, en su caso, apertura de seguimientos, recordando a los Letrados/as de la Administración de Justicia de los órganos unipersonales la necesidad de que impartan las instrucciones necesarias a los funcionarios a fin de que se cuide la indexación y ordenación telemática de los procedimientos remitidos, así como vigilen su cumplimiento.

Es imprescindible que la Fiscalía se integre en LEXNET, lo que está legalmente previsto, al objeto de recibir notificaciones y práctica de diligencias por vía telemática, única forma de completar el tránsito de los órganos judiciales al expediente digital.

Particípese el presente acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario Coordinador Provincial y al órgano afectado, para su conocimiento y efectos procedentes.

2.2-VISITA DE INSPECCIÓN Nº 00000002/2023 realizada al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 2 DE FUENGIROLA por el Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla el día 20/12/2022, sirviendo el órgano judicial el Sr. Juez Don Alberto Carlos Lloreda Salguero, y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, y por unanimidad, acuerda APROBAR LA VISITA DE INSPECCIÓN GIRADA.

La última visita de inspección fue realizada por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial en el año 2017.

La plantilla está compuesta por un Juez que tomó posesión el 10 de octubre de 2022, una Letrada de la Administración de Justicia, que se incorporó el 16 de Mayo año 2019, dos funcionarios de Gestión Procesal, cinco funcionarios de Tramitación Procesal y una funcionaria de auxilio procesal.

El ambiente laboral, tanto entre los funcionarios como con el equipo rector, LAJ y Magistrados, es bueno y se puede considerar, según afirma la Letrada de la Administración de Justicia, que la actividad desplegada es constante y en fase de mejora. La actitud de los funcionarios es positiva, reduciéndose el número de suspensiones de juicio, de asuntos pendientes de firmeza, elevaciones de recurso a la Audiencia, así como en la provisión de escritos.

En cuanto a necesidades de personal, no se hace necesario ampliar la plantilla, pero se necesita principalmente que se cubran con rapidez las bajas de los funcionarios. La problemática principal en cubrir las bajas es que, en la mayoría de las ocasiones, nombran a personal sin experiencia en la materia, lo que retarda la mejora del negociado al que accede, sin una mejora a



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

corto plazo en el mismo.

En relación a los criterios de sustitución en caso de vacantes o bajas, según informa la letrada se espera al nombramiento de interino por parte de la administración competente, salvo para solventar cuestiones que el LAJ determina como urgentes en cuyo caso encomienda su tramitación al funcionario que, en cada supuesto, cuenta con mayor disponibilidad; y para la incoación de demandas. Las que entran se reparten entre los funcionarios que efectivamente están en su puesto de trabajo (no se reparten, pues, al ausente).

Tanto los Gestores como los Tramitadores están encargados de todo tipo de procedimientos, sin que existan negociados específicos por razón de la materia. El trabajo se ha dividido por números atendiendo a las terminaciones numéricas de los procedimientos. La única diferencia entre Gestores y Tramitadores es que los primeros tienen asignado un número más dentro de esta distribución.

Las instrucciones de trabajo son predominantemente verbales, en el caso de que sean escritas suele tratarse, más que de instrucciones, de explicaciones para facilitar la comprensión de criterios procesales concretos ante determinadas situaciones procesales planteadas, pero siempre con carácter general. Solo en un caso hubo de dictar la Instrucción 1/2021, dictada por la Letrada, en estos tres años esta es la única Instrucción que tuvo que dictarse ante la problemática que se planteó acerca del reparto de las copias de las demandas presentadas por los demandantes al inicio del procedimiento. Desde el dictado de dicha Instrucción, no se ha suscitado mayor problema al respecto. El trabajo en esta Oficina Judicial está distribuido de manera uniforme y proporcional entre todos los funcionarios destinados en el mismo

El control de este sistema se realiza directamente por el LAJ desde el reparto de asuntos, que realizó directamente adjudicando a cada funcionario las demandas que a diario se reciben, de forma que se cumpla el objetivo de proporcionalidad entre todos ellos tanto en el número general como en cada clase de procedimientos.

La letrada posee una lista para repartir equitativamente por igual número a todos los funcionarios el mismo número de expedientes, lo cual realiza conforme se van recibiendo las distintas demandas.

El control diario del trabajo realizado se efectúa a través de la firma y de la consulta de los escritos (recibidos, proveídos y pendientes de proveer) y de los expedientes a través del sistema LexNet, del de Gestión Procesal Adriano, y de la Aplicación del Expediente Digital.

Por otro lado el control en la presentación de los escritos lo realiza la letrada a diario, indicándosele debe hacer personal ese control y filtro de escritos de forma completa. Realiza la LAJ, una labor de control del impulso procesal a través de varios listados y libros manuales.

No existen órdenes escritas, siendo suficientes las instrucciones verbales que en lo relativo a delimitación de responsabilidades, asignación de tareas, cumplimiento de objetivos y criterios de sustitución acatan los funcionarios sin problema alguno, dado el grado de profesionalidad que los caracterizan. Existe, por parte de los funcionarios, plena colaboración para admitir las delegaciones para realizar consultas o anotaciones en las bases de datos y registros públicos.

El juzgado está situado en un local, antiguo supermercado, en la calle Miguel Bueno, nº 26 de Fuengirola, cercano a la sede principal donde se encuentran la mayoría de los otros juzgados, así



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

como las instalaciones del Colegio de Procuradores y de la asistencia gratuita del Colegio de Abogados, el Médico Forense también se encuentra en la otra sede, así como el Registro Civil. Hay una tercera sede más alejada con el Juzgado de Primera Instancia nº 5 y el de Violencia sobre la mujer. La sede es compartida por los Juzgados de Primera Instancia nº 2 y 4 y por el SCAC de Fuengirola. El espacio ocupado por la oficina judicial resulta escaso para el número de funcionarios que integra la plantilla, además no disponen de ventanas, apenas entra luz natural y se ha cambiado el sistema de aire acondicionado y calefacción, que se comparte con el SCAC, con los problemas que ello conlleva. El estado de conservación y mantenimiento del edificio deja mucho que desear. El estado de limpieza es insuficiente, al haberse quedado sin limpiadora, siendo sustituida por la del otro edificio, que se ve desbordada. No existe plena accesibilidad para personas con movilidad reducida en la entrada principal, debiendo entrar por la puerta trasera habilitada para el acceso de funcionarios y personal autorizado.

La sala de vistas es compartida con el Juzgado de Primera Instancia nº 4, lo que dificulta mucho la práctica de las videoconferencias solicitadas por exhorto. No existen zonas de espera adecuadas. Hay un grave problema con las dependencias habilitadas para el archivo de los expedientes.

Hay un equipo informático para cada mesa, con doble pantalla. Tres impresoras compartidas entre toda la plantilla. Juez y Letrada disponen de impresora propia. Hay una máquina multifunción con fax, escáner y fotocopidora. Los teléfonos tienen muchos problemas de mantenimiento.

Se usan todos los programas que la administración competente ha puesto a disposición de todos los Juzgados y Tribunales para el correcto desempeño de sus funciones, lo que se hace de manera efectiva y diaria en este órgano. (Expediente Digital, Portafirmas, LexNet, Arconte, Nautius, Subastas electrónicas...).

En lo que se refiere al uso de las distintas aplicaciones telemáticas del Punto Neutro Judicial, son utilizadas, con sus propias claves de acceso, por los Gestores y Tramitadores Procesales integrantes de la plantilla, teniéndose acceso a aquellas aplicaciones que son necesarias para la tramitación de los expedientes judiciales. Se observa que el nivel de inserción es adecuado a la normativa e instrucciones vigentes en materia de adecuación tecnológica.

En relación al cumplimiento de las Instrucciones del Secretario General de la Administración de Justicia números 4/2009 y 5/2010, se ha implantado el uso obligatorio de todas las aplicaciones informáticas y que con carácter generalizado se viene practicando. La utilización del sistema de gestión procesal y aplicaciones informáticas es generalizada, limitándose la utilización de textos libres a los casos de falta de modelos en el acervo documental. Se lleva a cabo por la Oficina la actualización de fases y estados. La aplicación de Gestión Procesal es de uso habitual tanto por parte de los funcionarios como el Juez y del L.A.J.

Las contraseñas se custodian por cada usuario sin que sean usadas o conocidas por los restantes. No se han impartido cursos a los funcionarios para la adecuada protección de datos de naturaleza personal.

En relación al programa de gestión procesal Adriano, se hace constar que los funcionarios de la Oficina hacen uso constante de los programas y aplicaciones de gestión procesal, tratando de



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

sacar el mayor partido a sus funcionalidades, dentro de las limitaciones que el propio sistema de gestión ofrece. Se procura, en la medida de lo posible, registrar todos los datos de los intervinientes en los procesos, en algunas ocasiones resulta difícil dado el elevado número de asuntos que se registran, aunque el grado de inserción es correcto.

En cuanto a la actualización de las fases y estados de los procedimientos, es mayoritario, salvo error u omisión involuntario. Se procura llevar al día por los funcionarios y el propio Letrado de la AJ, siendo revisados por este normalmente cada trimestre al momento de elaborar la estadística judicial.

Se evita el uso de "texto libre", y es loable la denominación escrupulosa que se realiza de todas las resoluciones que se pasan a la firma, aunque por la letrada se reconoce que sigue haciéndose uso de este tipo de resoluciones dada la enorme variedad de supuestos que se presentan en el orden jurisdiccional civil y su difícil encaje en muchos casos en los modelos ofrecidos, a pesar de esto por esa oficina judicial se está tratando de utilizar los modelos que el programa Adriano ofrece, aunque en este punto es conveniente recalcar la necesidad de actualizar tales modelos y crear otros que se adecuen a las normas procesales. Todos los asuntos principales, de título no judicial, e hipotecarias, tienen un número de NIG propio, excepto las ejecuciones de título judicial, que se exige al Servicio Común, que el número de identificación sea el mismo que el de la demanda principal. Las medidas previas, cautelares y demás que se deducen con carácter previo a la interposición de la demanda, tienen asignado NIG propio. Los exhortos también tienen asignados su correspondiente NIG. Existe Servicio Común para llevar a cabo todo lo relativo respecto al Cumplimiento del Reglamento de Homogeneización del CGPJ 2/2010, fundamentalmente en cuanto a la transferencia y registro de procedimientos.

Se utiliza la cuenta de correo institucional para que ella comunicaciones que requieren ese sistema y el uso de LEXNET se realiza con total normalidad.

Se hace la oportuna advertencia a las partes, testigos y peritos, en relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación con cualquier medio procedimiento, debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la administración de justicia, ya que está incluida dicha advertencia en los modelos del sistema de gestión Adriano.

El total de asuntos registrados en la aplicación informática Adriano es hasta el 17 de noviembre de 2022 de 66.462, 38.983 civiles y 27.479 penales. El número de asuntos registrados en la citada aplicación desde comienzos del año 2022 hasta el 17 de noviembre de 2022 es de 1.992 asuntos. Respecto a los acontecimientos o trámites realizados por los usuarios a través de la aplicación informática (descartando los generados por la aplicación de forma automática, los relativos a la recepción de escritos o informes, o de soporte a la funcionalidad de firma digital) el total se eleva a 943.794 acontecimientos, 787.750 civiles y 156.044 penales, de los cuales 55.925 corresponden a los acontecimientos registrados desde el inicio del año 2022 hasta la fecha de referencia. En relación con la elaboración de las resoluciones de fin integradas en la aplicación informática de gestión procesal, en ella figuran registradas un total de 22.847 resoluciones, 20.561 civiles, de las cuales 5.847 son sentencias, 8.630 son autos definitivos y 6.084 son decretos definitivos. Respecto al



volumen de resoluciones registradas desde comienzos de 2022 hasta la fecha de referencia, figuran un total de 304 sentencias, 608 autos definitivos civiles y 810 decretos definitivos. No constan datos de resoluciones penales. El reflejo de la situación de los procedimientos de forma que se encuentre constantemente utilizada (no se contabilizan las actuaciones automáticas del sistema) es hasta la fecha de 48.822 actualizaciones manuales de fases y estados, 39.152 civiles, de las cuales 1.734 corresponden al año en curso, y 9.670 penales de las que no existen datos para el año en curso. A partir de los datos grabados en la aplicación informática Adriano el detalle de procedimientos pendientes y de procedimientos inactivos a la fecha de elaboración del informe es de 18.290 procedimientos pendientes, 3.623 civiles y 14.667 penales y 15.886 procedimientos inactivos, 1.219 civiles y 14.667 penales.

Todos los libros son informáticos, con excepción del Libro de tomas de posesiones y ceses, así como del libro con los boletines estadísticos trimestrales.

La cuenta de depósitos y consignaciones es la cuenta con numero 2918. Su saldo a DIA de la inspección es de 1.550.592,57 euros. Saldo muy elevado. Se observa que este órgano tiene una carga de ingresos mensuales alto. Igualmente se observa que se maneja a diario de la cuenta, pues se realizan mandamientos de devolución, transferencias y traspasos en un porcentaje alto y constante. Existen 126 mandamientos pendientes de cobro, por un total de 147,974,04 euros, lo que hace pensar que en este apartado no se está demasiado pendiente de su entrega, se podría mejorar ésta, a través de realizar mandamientos de pago mediante transferencia a cuentas corrientes, por lo que se le hace la recomendación oportuna, comunicándole igualmente al Sr. Secretario Coordinador Provincial contacte con el Colegio de Procuradores de Málaga para que facilite, como acontece en otras provincias andaluzas, listado con números de cuentas corrientes de los procuradores de la provincia que voluntariamente se ofrezcan a ello.

Examinadas las cuentas activas se aprecia que son muy elevadas las operativas, si bien al mismo tiempo hay que decir que no existen muchas antiguas, prácticamente todas están dentro del margen de los últimos 5 años, con pocas excepciones si bien hay que destacar una cuenta de 23,350 euros, sin tocar desde el 27 de mayo del año 2014, es la 2918 0000 05 1035 13, y que esta en fase de notificación de tasación de costas, por lo que su depuración esta cercana, y se producirá una vez firme la misma. En cuanto a las cuentas abiertas se aprecia igualmente que son muy elevadas y tampoco hay muchas antiguas, si existe gran número de depósitos para recurrir, y cantidades de cuantía residual, que deberán de ser revisados para, en su caso, darles el destino legal oportuno.

En el apartado de embargos, son muchos los practicados, observándose gran actividad en esta aplicación. Lo mismo ocurre con las subastas, encontrándose un número muy elevado de ellas finalizadas.

En conclusión, se trata de una cuenta con un volumen elevado, que estuvo sin mucha actividad hace algunos años atrás y que desde que tomo posesión esta letrada, se detecta que el trabajo que se realiza sobre la cuenta de depósitos y consignaciones es fluido, resultado por ser muy constante, por lo que ha sido animada la letrada por esta actividad, manifestando al inspector que continuara en su labor depurativa, observado ante dicha realidad demostrativa en varios ejecutoria en las que el ingreso y devolución de indemnizaciones, así como la transferencia al tesoro público de



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

cantidades es muy ágil y constante.

Los boletines estadísticos y los datos recogidos en el Acta de la Inspección arrojan una pendencia de 844 procedimientos en fase de tramitación y 1.284 procedimientos en fase de ejecución.

1. El Juzgado inspeccionado soporta, en términos generales, una carga de trabajo elevada, que supera el módulo referencial de entrada de asuntos para los Juzgados de Primera Instancia, que se sitúa en 1.200 asuntos.

2. Del estudio detallado de las anteriores cifras de la presente inspección resulta que la situación del órgano jurisdiccional inspeccionado, aunque no esté plenamente normalizada, se puede considerar, en líneas generales, correcta para un órgano de sus características y con la carga competencial que soporta, valorando el nivel de ingreso y número de asuntos pendientes de resolver, así como el tiempo que transcurre entre el registro de entrada y la fecha de señalamiento de vista y dictado de la correspondiente resolución, por lo que debemos reconocer el esfuerzo realizado.

3. Se dedican, como regla general, dos días de cada semana para los señalamientos, con unos criterios de 8 a 10 procedimientos por sesión, a lo que se añaden otros dos viernes al mes para asuntos suspendidos o más urgentes. El último señalamiento está previsto para finales del año 2023, si bien con huecos en agenda en septiembre y a partir de noviembre.

Se recomienda una mejor gestión de la agenda de señalamientos, singularmente en relación con las suspensiones para recolocar en huecos temporales más cercanos, así como discriminar asuntos delicados y urgentes. Asimismo, es conveniente unificar los señalamientos en que es parte presencial el Ministerio Fiscal.

4. Desde un punto de vista cualitativo, se detectan retrasos y paralizaciones, lo que obliga al equipo rector a insistir en la línea de seguimiento y revisión periódica de los asuntos, aparte de la responsabilidad propia de cada funcionario en la revisión de los procedimientos asignados, máxime los asuntos de mayor antigüedad o de mayor sensibilidad (por ejemplo, procesos de familia o incapacidad), recordando las diligencias pendientes en cada procedimiento con mayor cercanía temporal.

Se observa en conjunto una tramitación adecuada, solo descompasada en determinados procedimientos coincidentes, singularmente, con el negociado con números finalizados en 2 y 7, sobre lo que el equipo directivo deberá establecer un plan de actuación para la mejora y el impulso más cercano de dichos procedimientos.

5. Se detectan relaciones correctas entre los integrantes de la oficina. Buen control a la hora de localizar los procedimientos que se requieren para su examen.

De forma global, la oficina judicial funciona con eficacia a pesar de la carga de trabajo existente, mérito imputable a todos los que forman parte de la misma y a quienes constituyen el equipo rector, siendo positiva la labor en materia de impulso y especialmente en ejecución civil, siendo mejorables los tiempos de señalamiento, por lo que es conveniente gestionar la agenda de forma algo más eficiente y fijar pautas más estrictas en los supuestos de suspensión y nuevo señalamiento, lo que redundará en un beneficio para la optimización y mejora de la eficiencia del trabajo que se realiza.



No ha de dejarse de poner de manifiesto que, en buena medida, los niveles de pendencia y las suspensiones de actos procesales tiene su origen en la dificultad para la realización de los actos de comunicación, cuando éstos se han de realizar de forma personal, al no estar las partes personadas bajo la representación de Procurador o bien, cuando la ley exige realizarlo directamente al interesado. En este sentido y, según se ha observado en los procedimientos analizados, este tipo de actos de comunicación se practican por los funcionarios de auxilio judicial del servicio común de notificaciones y embargos de Fuengirola cuya actividad es sensiblemente mejorable.

En otro orden de consideraciones, se detecta que la respuesta dada a la provisión de escritos es breve, entre 2 y 5 días, y a la incoación de demandas, entre 10 y 25 días, lo que revela una buena gestión que se realiza por la oficina en este particular. Se ha podido apreciar, celeridad e inmediatez en la práctica de las tasaciones de costas por el Sr. Letrado de la AJ.

Es de destacar, en este sentido, la relativa pendencia de procedimientos que son casi exclusivamente dependientes de la actividad del Secretario Judicial, como son los procedimientos monitorios, que representan un 70% de la incoación civil del órgano judicial, presentando a fecha de la inspección, una pendencia de 239 asuntos, debiendo tenerse en cuenta que un porcentaje de ellos se encuentran pendientes de localización de domicilios y facilitación de los mismos por la parte actora.

6. Debe mantenerse el esfuerzo en el tratamiento informático de los procedimientos, siendo imprescindible la plena anotación e identificación de los acontecimientos de cada asunto en el sistema de gestión procesal.

Se deberá velar para que se proceda a la grabación de las marcas en las grabaciones de vistas y juicios, dando las instrucciones precisas al funcionario de Auxilio Judicial.

Particípese el presente acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario Coordinador Provincial y al órgano afectado, para su conocimiento y efectos procedentes.

2.3-VISITA DE INSPECCIÓN Nº 00000003/2023 realizada al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 2 DE AYAMONTE por el Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de HUELVA el día 28/10/2022, sirviendo el órgano judicial el Sr. Juez, D. José Alberto Barbosa González, y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, y por unanimidad, acuerda APROBAR LA VISITA DE INSPECCIÓN GIRADA. La última inspección del órgano judicial fue realizada en noviembre de 2016 por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial. El órgano inspeccionado se encuentra sujeto a seguimiento por parte del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (Seguimiento 1884/2019), como consecuencia de inspección virtual del 2º semestre de 2018 por el control de las demandas pendientes de incoar y de los escritos pendientes de proveer, debiendo remitir informes dentro de los 10 primeros días siguientes al vencimiento del trimestre, coincidiendo con la elaboración del boletín estadístico.

El partido judicial consta de cinco Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, servidos por Jueces y un Servicio Común de Notificaciones y Embargos, con funciones de registro y reparto de asuntos civiles, realización de actos de comunicación y ejecución, apoderamientos apud acta, exhortos de videoconferencias sin necesidad de presencia judicial y de apoyo al Juez Decano.



Exceptuado el equipo rector, todos los integrantes de la oficina son interinos. El órgano cuenta, por tanto, con tres funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal, ya que, al tener funciones de Registro Civil, uno de los Gestores se dedica exclusivamente al mismo, cuatro funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y un funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial. Desde enero de 2020 el órgano tiene asignado un funcionario del Cuerpo de Tramitación de refuerzo, para ayudar en el Registro Civil, si bien, dada la sobrecarga de asuntos en materia penal, se le dedica también a funciones en las secciones civil y penal.

Igualmente ha disfrutado del plan de reactivación de la actividad judicial tras la pandemia, implantado por la Consejería, tanto en 2021 como de septiembre a noviembre del año en curso. La Letrada de la Administración de Justicia solicitó la prolongación de jornada, que no fue aprobada por el Ministerio de Justicia.

En los últimos años no se ha incoado ningún expediente disciplinario. No se dan tampoco problemas de absentismo ni incidencias en el cumplimiento del horario. Las situaciones de baja por enfermedad y las vacantes tardan mucho en cubrirse y se solicita una mayor rapidez en su cobertura.

La Sra. Letrada piensa que el reparto del trabajo es injusto y está pensando en cambiarlo. Además, al repartir los procedimientos por números, se cubren mejor las ausencias, ya que todos saben hacer de todo. La plantilla del órgano, dada la elevada entrada de asuntos, es escasa. Pero, por encima de lo exiguo, lo que más disfunción produce es la inestabilidad de los funcionarios. Igualmente, es imprescindible la elevación a categoría de Magistrado-Juez de las plazas de Ayamonte, lo que conllevaría una estabilidad de los equipos rectores y, por ende, de los funcionarios.

El grado de digitalización del órgano va bien, a juicio de la Letrada, pero no han empezado a trabajar con el expediente digital ya que los funcionarios aún no están preparados y podría suponer un retraso mayor. Los funcionarios manejan el sistema de gestión procesal Adriano, incorporan los escritos recibidos vía LexNET así como las resoluciones dictadas por el Sr. Juez. Las que la Letrada dicta, las incorpora personalmente. Todos los funcionarios están autorizados, a modo consulta, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales, en Punto Neutro Judicial y en SIRAJ. Los señalamientos se realizan a través de una agenda que está en la carpeta de “común” del órgano. La confecciona la Letrada con los días de señalamientos que el Juez le facilita, tanto para civil, declaraciones penales y Delitos Leves.

El edificio que alberga cuatro de los cinco Juzgados de Ayamonte está sito en la Avenida Alcalde Narciso Martín Navarro, 28 del referido municipio. Se trata de un edificio antiguo, construido en los años 80 del pasado siglo y siendo, a todas luces, insuficiente para albergar cuatro Juzgados y un Servicio Común. El estado de conservación del inmueble es muy deficiente. Mención especial merece la falta de espacio físico, tanto en las dependencias de los funcionarios, como en las zonas comunes del inmueble. El órgano inspeccionado se encuentra en la planta baja, a mano izquierda del edificio según se accede. Las dependencias están situadas a lo largo de un pasillo. Todas las dependencias están bien iluminadas al disponer de ventanas al exterior, aunque su tamaño es un poco pequeño. El mobiliario es bastante antiguo, salvo el despacho de la Sra. Letrada que ha sido remodelado en mayo de 2022. Comparten sala de vistas con el número 1 y esto limita indudablemente las oportunidades de señalamiento y, con ello, de impulso a los procedimientos. El



edificio dispone de un espacio para la práctica de videoconferencias que, por lo menos, palía ese problema, si bien es interior. Todo ello no contribuye a crear un ambiente idóneo de trabajo. En la sede hay una dependencia del SAVA (servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía), así como una sala Gesell para la práctica de pruebas pre-constituidas y de aquellas diligencias que, dado su carácter, lo requieran. Hay una dependencia del Colegio de Procuradores. El Servicio de Orientación Jurídica no está en la sede de los Juzgados, pero sí en unas dependencias muy próximas. No hay casa de acogida. Hay un punto de encuentro familiar en la localidad de Lepe.

Todos disponen de ordenador con doble pantalla y dotado de las aplicaciones necesarias para el trabajo diario. Hay dos máquinas multifunción una en cada una de las secciones y los despachos del Sr. Juez y de la Sra. Letrada tienen impresora. Ambos disponen de ordenador portátil con conexión ISL en remoto.

Los funcionarios tienen acceso al Sistema de Gestión Procesal Adriano y a todas las aplicaciones judiciales necesarias para la tramitación de los procedimientos (LexNET, Punto Neutro Judicial, Agenda de Señalamientos, SIRAJ, correo corporativo de la Junta de Andalucía, autorización, a modo consulta, para la aplicación de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales). El Auxilio tiene, además, acceso a Webex, Nautius y ArconteÁurea. Los funcionarios acceden a la aplicación del Punto Neutro Judicial para realizar las averiguaciones patrimoniales, laborales y domiciliarias, previamente acordadas por resolución. Se realizan las consultas sobre antecedentes penales, a través de SIRAJ.

Cumplen la Instrucción 2/2003 del CGPJ, de 26 de febrero, relativa al Código de Conducta para Usuarios de equipos y sistemas informáticos, las Instrucciones 4/2009 y 5/2010 del Secretario General de la Administración de Justicia. También se cumple con la normativa sobre presentación telemática de escritos y su integración al sistema de gestión procesal y con la normativa sobre comunicaciones vía LexNET a profesionales. No hay en la sede asistencia presencial de técnicos informáticos, atendiéndose las incidencias por teléfono, correo electrónico y por la gestión telemática de incidencias. El Juez y la Letrada de la Administración de Justicia firman a través del portafirmas.

El grado de implantación del expediente digital es poco elevado, debido a la falta de tiempo para dedicarse a esa tarea y a la poca receptividad de algunos funcionarios al mismo. El grado de actualización de fases y estados es aceptable.

Se llevan en formato papel los siguientes libros: Libro Registro de Piezas de convicción, Libro Registro de Presos preventivos, Libro Registro de Tomas de Posesión y Ceses. El resto de libros se llevan informáticamente. Se llevan legajos de Sentencias, Autos y Decretos.

La Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales del órgano inspeccionado está abierta en la entidad Banco de Santander, con el número 1906. El saldo a 30 de septiembre de 2022 era de 1.097.428,55 €. En el día de la visita el saldo era de 1.009.198, 11 €. La Letrada ha realizado la revisión de las cuentas con saldo y sin movimiento en los últimos cinco años, interesada por el Ministerio de Justicia. Dispone de un listado y se actualiza cada vez que se expide una transferencia o mandamiento de devolución. Hay 51 cuentas expedientes con depósito constituido para recurrir. En 9 de ellos, se realizó el abono, pero, al no presentarse al cobro, caducó el mandamiento. Normalmente se realizan transferencias a las cuentas corrientes facilitadas, siendo este sistema más



rápido y no da lugar a caducidades. En el Juzgado se dicta resolución por cada pago que se realiza. La Letrada ha eliminado la mayor parte de los pagos periódicos que realizaba el órgano. Prefiere hacerlos por transferencia, cada mes. Así lleva un mayor control. A la fecha de cierre de datos había 24 mandamientos de pago caducados y 911 cuentas expedientes con saldo. Hay gran número de cuentas expedientes con saldos de pequeñas cantidades que se quedan “olvidados” a la espera de retener una suma mayor. Se debe hacer un repaso de esos asientos, lo que despejaría mucho el número de cuentas expedientes abiertas. El saldo de la misma, aún siendo elevado, está controlado. La Sra. Letrada realiza una buena gestión de la Cuenta.

En materia civil no hay ningún asunto pendiente de registrar. Hay retraso en la incoación de asuntos civiles. El órgano tenía 161 asuntos de jurisdicción contenciosa pendientes de incoar. Igualmente, a la fecha de cierre de datos, había en el Juzgado 142 ejecuciones pendientes de incoar, de las que 17 eran de materia de familia.

El retraso es altamente preocupante en el proveído de escritos, siendo inasumible que haya 2.795 en ese estado, siendo la mayor parte en ejecución y de un periodo superior a dos meses (1.780). La entrada de Procedimientos Monitorios es muy elevada (supone un 57,22 % del total), sin embargo hay pendientes 250 lo que demuestra el control sobre los mismos. También en Monitorios Europeos, en los que no había ninguno pendiente a la fecha del cierre de datos.

Es deficitario el impulso de los procedimientos civiles. Mientras el asunto sigue su itinerario normal, la respuesta, aunque lenta, se produce. Pero si el devenir del expediente se suspende por cualquier motivo (solicitud de justicia gratuita, falta de cumplimiento de exhorto, emplazamiento o citación negativo etc), se paraliza el procedimiento. En estos supuestos, aunque la parte pida la reactivación del expediente, dado el retraso en la tramitación de escritos, la respuesta llega demasiado tarde.

Preocupante situación genera tener 124 asuntos penales pendientes de registrar, máxime cuando 35 de ellos son de hace más de dos meses. Lo mismo ocurre con los 578 asuntos penales pendientes de incoar, de los que 553 son de hace más de 60 días. Elevada pendencia de asuntos penales, en materia de Diligencias Previas (652) y Delitos Leves (381). En los que no solo preocupa su número, sino también su antigüedad.

En conclusión se considera que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Ayamonte presenta un retraso muy importante tanto en materia civil como penal. En el ámbito civil es preocupante el retraso en incoación de demandas y ejecuciones así como en el proveído de escritos. Igualmente es muy elevado el número de Ejecuciones vivas, debido a la falta de trámite de los escritos pendientes. La situación de los asuntos penales es altamente preocupante. Por el número y antigüedad de los asuntos pendientes de registrar (124) y pendientes de incoar (578), así como por la elevada pendencia en materia de Diligencias Previas y Delitos Leves, y que se encuentren en esta situación asuntos de los años 2017 (23 Diligencias Previas y 2 Delitos Leves) y 2018 (47 Diligencias Previas y 4 Delitos Leves).

Por todo ello, se acuerda un SEGUIMIENTO al órgano inspeccionado, sobre los siguientes parámetros, en materia civil:

- 1.- Demandas pendientes de incoar, reduciendo su número y, sobre todo, iniciando las más



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

antiguas, con el fin de conseguir que las demandas sean incoadas en el plazo máximo de cuatro meses desde su entrada en el órgano.

2.- Escritos pendientes de proveer, reduciendo el número y antigüedad de los mismos, sobre todo en ejecución.

Igualmente, en materia penal, se acuerda un seguimiento sobre:

- 1.- Asuntos penales pendientes de registrar.
- 2.- Asuntos penales pendientes de incoar.
- 3.- Diligencias Previas pendientes de los años 2017, 2018 y 2019.
- 4.- Delitos Leves pendientes de los años 2017, 2018 y 2019.

Particípese el presente acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario Coordinador Provincial y al órgano afectado, para su conocimiento y efectos procedentes. Incórese el correspondiente expediente de SEGUIMIENTO.

2.4-VISITA DE INSPECCIÓN Nº 00000004/2023 realizada al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 1 DE MOGUER por el Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de HUELVA el día 11/11/2022, sirviendo el órgano judicial el Juez titular Don Marcos Carrero Morera, y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, y por unanimidad, acuerda APROBAR LA VISITA DE INSPECCIÓN GIRADA.

La última inspección del Órgano Judicial fue realizada en el año 2019, también por delegación.

Las instalaciones de la sede judicial fueron inauguradas el 24 de julio de 1992, si bien presentan deficiencias que han de ser corregidas, tienen filtraciones y humedades, interrupción del suministro eléctrico por sobrecarga, así como falta de espacio en los archivos y ausencia de una sala donde esperen las víctimas mientras se tramitan las diligencias. El pasado 11 de octubre hubo una tormenta en Moguer y provocó que el patio del edificio se inundara, al no estar limpios los desagües. También entró agua en las secciones, pero, aunque ocurrió por la tarde, la plantilla estaba trabajando por hacer los auto refuerzos y, con su ayuda y la del personal de limpieza, se consiguió que no afectara a los procedimientos. Las instalaciones son muy reducidas y, debido a la cantidad de expedientes que hay, aún produce mayor sensación de agobio. En la Sección Civil no queda espacio para más estanterías ni armarios. El edificio es un inmueble amplio, pero mal aprovechado, hay poco espacio útil. Carece de sala de espera para víctimas en materia de violencia de género por lo que los funcionarios las acomodan en las dependencias vacías o bajo el hueco de las escaleras. Esta situación es, de todo punto, inasumible. Es también imprescindible un espacio mayor para archivos.

De los funcionarios integrantes de la plantilla solo hay un titular pero existe bastante estabilidad en la misma. Respecto al equipo rector, la Letrada de la Administración de Justicia es sustituta, habiendo tomado posesión en el órgano tras el cese, por concurso de traslado, de la anterior Letrada titular Doña Manuela Armenteros Lojo que estuvo en el cargo desde agosto de 2016 a febrero de 2022.

El Juzgado tiene competencia exclusiva en materia de violencia sobre la mujer, sin que, por



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

esa causa, goce de exención de reparto civil ni penal. En la Sección Civil, trabajan tres Tramitadoras. No hay Gestor en el negociado civil y las tres Tramitadoras tienen un reparto igualitario en número y tipo de procedimiento. Todas llevan de todo, sin distinción de clase, salvo los asuntos que se llevan en la sección penal. En el negociado Penal, prestan sus servicios dos funcionarios del Cuerpo de Gestión y un Tramitador. El Auxilio Judicial realiza las tareas propias de su puesto, tales como archivo, guardar sala, grabaciones de vistas y realización de videoconferencias, correo, recepción y remisión de expedientes por el sistema Nautius. Desde julio del año en curso, el órgano tiene concedido por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía un Tramitador de refuerzo al que se le ha asignado, en exclusiva, la tramitación de todos los Procedimientos Monitorios detrayéndolos de la sección penal.

Manifiesta la Letrada de la Administración de Justicia la necesidad de un funcionario más para la Sección Civil toda vez que se rozan los 1.000 asuntos y con solo tres funcionarios no es posible tramitarlos con la rapidez necesaria, máxime cuando cada dos semanas se entra de guardia y esto trastorna el ritmo ordinario de trabajo en civil, con el agravante de su competencia en materia de violencia sobre la mujer que hace que el órgano se encuentre, de facto, permanentemente de guardia. Todos los funcionarios de la plantilla hacen guardia, una semana sí y otra no. Van rotando las secciones. Prácticamente todos los días se incoan diligencias en materia de violencia que tienen una tramitación más compleja, requiriendo la intervención de más profesionales y la anotación y comunicación inmediata de las órdenes de protección.

La plantilla es escasa, pero lo que más distorsiona, es el periodo tan prolongado desde que se produce una baja o vacante hasta que se cubre, mediante nombramiento de sustituto, por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía. Hay que esperar cuarenta y cinco días y eso, en cualquier órgano, es un tiempo excesivo, más en órganos poco ágiles. No ha habido ningún expediente disciplinario en los dos últimos años. No hay problemas de absentismo ni de cumplimiento del horario. Los funcionarios fichan a través de la aplicación Hermes.

El Juez y la Letrada de la Administración de Justicia disponen en sus despachos de ordenador con doble pantalla y la correspondiente impresora. Hay también ordenador en las dos Salas de Audiencias, dotados de sistema de grabación del sonido y de la imagen, integrado en el sistema Áurea. El mismo sirve también para la realización de videoconferencias. Hay un ordenador por cada puesto de trabajo, con doble pantalla instalada recientemente. Hay dos máquinas multifunción, una en cada sección y en el despacho del Auxilio Judicial hay otra impresora.

En cuanto a Justicia Digital, el órgano judicial no está avanzado aún en esta materia. En civil prácticamente todo se firma digitalmente, salvo la Tramitadora Marie Carmen Gómez que, en ocasiones, pasa la firma manual. En penal, las resoluciones sí se firman digitalmente, pero las declaraciones y comparecencias, se firman manual. La Letrada quiere avanzar este año en el uso del expediente digital. Los funcionarios utilizan los modelos del sistema de gestión procesal Adriano y, cuando acuden al texto libre, tienen que describir el contenido de lo acordado. Las notificaciones a Procuradores se realizan a través de LexNET, sin que genere ninguna problemática su aplicación. Los Gestores y Tramitadores manejan las aplicaciones informáticas de Punto Neutro Judicial,



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

consulta de bienes e información laboral a través del mismo y Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales a modo consulta y SIRAJ. El funcionario de Auxilio trabaja con la aplicación del P.N.J., grabación de vistas (Áurea), videoconferencias y Nautius. Existe buena colaboración por parte de los funcionarios para manejar aplicaciones informáticas y obtener averiguaciones domiciliarias, patrimoniales etc. Los funcionarios componentes de la plantilla han recibido cursos de gestión informática (Adriano, Nautius, LexNET, recepción telemática de exhortos, firma digital, grabación de vistas), pero no hay personal especializado en la sede judicial que sirva de apoyo, por lo que las dudas se resuelven telefónicamente.

Todos los funcionarios tienen clave y acceso a las distintas aplicaciones del PNJ y cumplen estrictamente las normas del código de conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al Servicio de la Administración de Justicia (Instrucción 2/2003 del C.G.P.J.) así como las Instrucciones del Secretario General de la Administración de Justicia números 4/2009 y 5/2010.

Se llevan los libros de la Secretaría en papel y también tienen libros informáticos, que no se imprimen, quedando a disposición de la oficina en sistema de gestión Adriano.

La Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales tenía, a 30-09-2022, un saldo de 953.718,04 €. A la fecha de la vista, se extrae del aplicativo el saldo y asciende a 736.239,92 €. En la Cuenta hay 610 expedientes con saldo. Los mandamientos de devolución que caducan los expide la Letrada a petición de la parte, sin que sea necesario la aportación de escrito, basta con hacer entrega del mandamiento caducado. Revisa la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales todos los días. En la semana, paga dos o tres veces. En el órgano, se dicta resolución (Diligencia de Ordenación) por cada pago que se realiza. Los depósitos constituidos para recurrir, tanto en reposición como en apelación, los tienen controlados por la aplicación. Unen al expediente físico el resguardo del ingreso. Abren la aplicación Nautius todos los días y, si observa que han recibido algún asunto de la Audiencia Provincial, ve el contenido de la resolución de apelación y, por tanto, el destino del depósito. El órgano practicó la revisión de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales interesada por el Ministerio de Justicia respecto a las cuentas expedientes con saldo e inactivas durante los últimos cinco años. La labor la hizo la anterior Letrada, Doña Manuela Armenteros Lojo. Realizan los pagos mediante transferencia, por lo general, a la cuenta facilitada por el Procurador, ya que así es más rápido y se evitan caducidades. Solo en los supuestos de ausencia de profesional y que el particular no haya facilitado cuenta corriente, realizan el abono a través de mandamiento de devolución.

Los boletines estadísticos y los datos recogidos en el Acta de la Inspección arrojan una pendencia en el orden jurisdiccional civil de es de 1.214 asuntos, debido al número de Procedimientos Monitorios, que es de 20 en los Monitorios Europeos y de 985 en los restantes. En materia de ejecuciones, la pendencia es baja, 312, pero hay que recordar la deficiente tramitación de los Procedimientos Monitorios, que da lugar a que estos no llegan a la fase de ejecución.

Retraso muy preocupante en la incoación de Procedimientos Monitorios. A la fecha de cierre de datos había 246 en ese estado, desde febrero del año en curso. Esa situación es de todo punto inasumible ya que, en el resto de materias civiles, aún con retraso, todo fluye, pero los Procedimientos Monitorios no se han incoado desde hace siete meses. Retraso en el proveído de



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

escritos. Igualmente, la pendencia en escritos es, mayoritariamente, en Procedimientos Monitorios. De los 904 escritos sin tramitar, 485, es decir, el 53,65%, son de Procedimientos Monitorios.

En materia de familia, el órgano registra más asuntos que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Moguer, debido a su competencia en violencia de género y a que, hasta el año 2015 inclusive, toda la materia de Familia fue competencia exclusiva del Juzgado inspeccionado y aún arrastran muchos más asuntos como consecuencia de las modificaciones de medidas que se plantean derivadas de demandas de separación, divorcio y guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales.

En materia penal la tramitación también presenta retrasos y deficiencias, estando pendientes 309 Diligencias Previas, de las que hay 8 del año 2018 y 6 del 2019. En Procedimientos Abreviados, la pendencia total es de 82, estando sin elevar 1 del año 2019 y 2 del año 2020. En estos procedimientos, la última resolución dictada había sido en el año 2021, sin repasar desde entonces.

El hecho de que el Juzgado tenga la competencia exclusiva en materia de violencia hace que el órgano sea poco ágil en la tramitación penal. Es una guardia permanente, con la complejidad y alarma social que generan esos asuntos. Con la carga diaria del órgano, en el que prácticamente todos los días se incoan Diligencias Urgentes por violencia sobre la mujer, no les es posible darle el tratamiento que necesitan.

Las ejecutorias necesitan un repaso a fondo. Hay muchas que no han sido repasadas desde el año 2021. Los procedimientos por Delitos Leves pendientes son 50, de los que 26 están para incoar.

En conclusión se considera que el Juzgado presenta retraso en la tramitación, tanto civil como penal, debido a varios factores:

- La asunción en exclusiva de la competencia en materia de violencia de género, sin que, en compensación goce de exenciones en el reparto de otros asuntos.

- Incremento de trabajo en ambos Juzgados del partido judicial.

Dado que el órgano tiene un problema importantísimo en Procedimientos Monitorios, tanto en su incoación, como en el proveído de escritos derivados de esos expedientes, la Sala de Gobierno, por unanimidad, acuerda la adopción de la siguiente medida:

- Incoación de un expediente de SEGUIMIENTO a fin de que todos los Procedimientos Monitorios estén incoados en el plazo máximo de cuatro meses desde su recepción. Proveído de los escritos en el plazo máximo de dos meses desde su presentación y reducción el nivel de pendencia de Procedimientos Monitorios que, a fecha de cierre de datos, era de 1.005 asuntos (entre Monitorios Europeos y Restantes).

Particípese el presente acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario Coordinador Provincial y al órgano afectado, para su conocimiento y efectos procedentes. Incócese el correspondiente expediente de SEGUIMIENTO.

2.5- VISITA DE INSPECCIÓN Nº 00000005/2023 realizada a la SECCIÓN Nº 1 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA por el Excmo. Sr. Presidente del TSJ de Andalucía, Ceuta



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

y Melilla el día 17/02/2023, sirviendo el órgano judicial el Ilmo. Sr. Presidente de la Sección Primera Don Jesús Flores Domínguez, y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, y por unanimidad, acuerda APROBAR LA VISITA DE INSPECCIÓN GIRADA.

La última visita de Inspección fue realizada por el Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla el 16 de febrero de 2017, sirviendo el órgano judicial como Presidente el Ilmo. Sr. Don Jesús Flores Domínguez, asistido por la Sr. Secretaria de la Sala Doña María José de la Higuera Espín.

La plantilla está compuesta por cinco Magistrados, un Letrado de la Administración de Justicia, dos Gestores Procesales y Administrativos, cinco Tramitadores y dos de Auxilio Judicial.

Magistrados: Don Jesús Flores Domínguez (Presidente), Doña María Maravillas Barrales León, Don Francisco Javier Zurita Millán, Don Mario Alonso Alonso y Don Jesús Lucena González.

Letrada de la Administración de Justicia: Doña María José de la Higuera Espín.

La plantilla, compuesta por funcionarios titulares e interinos, se considera muy ajustada para el nivel de ingreso de asuntos, por lo que debería ampliarse o reforzarse con otro tramitador procesal, máxime ante el aumento de procedimientos para enjuiciamiento con un número elevado de acusados y compleja tramitación procesal en la doble fase de enjuiciamiento y ejecución.

La letrada de la administración de justicia se incorporó el 16 de diciembre de 2015 y realiza una correcta labor, reorganizando la carga existente en cada uno de los negociados, con la intención de que el trabajo en la oficina fuera constante y uniforme, conseguir regularizar la llevanza de los distintos procedimientos y controlar la carga de trabajo de este órgano judicial.

La letrada realiza una labor eficiente, controla la entrada de todos los escritos a diario y minuta todo el reparto, dándole su correspondiente número y repartiendo al magistrado correspondiente, analizando los efectos de forma y lo necesario para su proveído, de forma que los asuntos son estudiados de entrada para la subsanación que corresponda antes de que el magistrado correspondiente asuma la ponencia y el estudio del asunto.

Los funcionarios que tramitan los señalamientos son seis, para procurar que la agenda de señalamientos se mantenga en ese estado y también, cuestión muy importante, se minimicen las suspensiones.

El ambiente laboral, tanto entre los funcionarios como con el equipo rector, LAJ y Magistrados, es bueno y se puede considerar, según afirma la Letrada de la Administración de Justicia, que la actividad desplegada es constante y en fase de mejora continua. La actitud de los funcionarios, según indica la señora letrada es positiva en general, como puede apreciarse en la evolución de la estadística.

Según afirma la letrada, se está esforzando en que la distribución del trabajo sea lo más equitativa e igualitaria posible a través de un sistema establecido por ella misma, sin ser necesaria cobertura de baja ya que han existido de una manera testimonial, la organización del trabajo permite que cuando exista una baja el compañero del negociado pueda atender los asuntos pendientes.

En cuanto a las medidas implementadas por la letrada para la mejora de la ejecución penal, en la que se detecta cierta cadencia que podría mejorarse con el apoyo de un funcionario más dedicado a determinados trámites más especializados, dejando a las dos gestoras procesales la



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

tramitación de los procedimientos de ejecución en general.

Las dependencias de esta Sección se encuentran situadas en la primera planta del edificio histórico de la Real Chancillería, encontrándose la Sala de Vistas, en la planta baja. Los procedimientos en archivo están distribuidos en tres localizaciones diferentes, en la propia sede de la sección, en el archivo del Tribunal Superior y en la sede de las Secciones Civiles que se encuentran en un edificio independiente de éste.

A nivel de archivos, el órgano no tiene necesidades de liberación de espacios, si bien se observa que existe una gran cantidad de cajas de procedimientos en los pasillos, pendientes de ser trasladados al archivo general.

Respecto al mobiliario, es necesario una renovación de parte del mismo y sobre todo de los armarios para los procedimientos, dado que por su antigüedad no todos están en buen estado así como de los sillones de los despachos.

La Sección dispone de una sala de vistas propia que está preparada para la celebración de los procedimientos de la Ley del Jurado, por lo que para la celebración de las vistas de estos es compartida con la Sección Segunda de esta Audiencia. Dispone de sistema de grabación audiovisual (Arconte-Áurea), y de línea para videoconferencias. Para esta Sala es muy necesaria la renovación de los sillones.

La Sección está informatizada, disponiendo cada Magistrado, Letrado de la Administración de Justicia y resto de funcionarios de ordenador con el sistema de gestión procesal "Adriano". La Sala de vistas dispone del sistema de grabación audiovisual "Arconte-Áurea", de línea para videoconferencias.

La utilización y acceso por las distintas aplicaciones telemáticas a los servicios ofertados desde el Punto Neutro-Judicial es habitual, accediendo los funcionarios de Auxilio Judicial, los tramitadores y los Gestores Procesales a todas ellas, al estar autorizados como usuarios de las mismas y estos últimos también a la aplicación de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de la Sección. Igualmente los Gestores y Tramitadores disponen de acceso al SIRAJ 2.

Respecto al cumplimiento y observancia por parte del personal del Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia, es total. Igualmente el cumplimiento de las Instrucciones del Secretario General de la Administración de Justicia nº 4/2009 y 5/10 emitidas con motivo de la entrada en funcionamiento del SIRAJ. Así mismo se da cumplimiento al reglamento de Homogeneización del CGPJ 2/2010.

El total de asuntos registrados en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada por la Aplicación informática Adriano es hasta finales de 2022 de 45.917. El número de asuntos registrados en la citada Aplicación desde comienzos del año 2023 hasta la fecha es de 2.005 asuntos.

Respecto a los acontecimientos o trámites realizados a través de la Aplicación informática el total se eleva a 484.254 acontecimientos, de los cuales 33.057 corresponden a acontecimientos registrados desde el inicio del año 2023 hasta la fecha.

En relación con la elaboración de las resoluciones judiciales integradas en la Aplicación informática de gestión procesal, figuran registradas un total de 29.951 resoluciones judiciales, de las



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

cuales 14.269 son sentencias, 15.538 son autos definitivos y 110 son decretos definitivos penales y 34 autos definitivos civiles. Respecto al volumen de resoluciones judiciales registradas desde comienzos de 2022 hasta la fecha, figuran un total de 560 sentencias, 888 autos definitivos y 9 decretos definitivos.

El reflejo de la situación de los procedimientos de forma que se encuentre constantemente actualizada es de 35.656 actualizaciones manuales de fases y estados de las que 270 corresponden al año en curso. Hay 1.954 procedimientos pendientes y 1.149 procedimientos inactivos en los que no se ha realizado ningún acontecimiento o trámite en Adriano en los seis meses anteriores a la fecha de la consulta.

La letrada vela eficazmente por la tramitación digital de todos los procedimientos y sigue las pautas establecidas al efecto en el entorno digital con cumplimiento de las instrucciones dictadas por el Secretario General de la Administración de justicia y este Secretario de gobierno, pero no podemos ignorar que este órgano recibe procedimientos de otros órganos al tratarse, de órgano de enjuiciamiento penal, lo que le sirve, por un lado para poder corregir en determinados supuestos deficiencias procedentes de esos expedientes, pero desgraciadamente, en el ámbito jurisdiccional penal todos los asuntos llegan en formato papel.

Tiene esta cuestión su explicación en que aunque los órganos unipersonales itineran informáticamente los asuntos por Nautius, y el contenido de las resoluciones judiciales dictadas pueden comprobarse a través del modo consulta en la propia aplicación de gestión procesal Adriano, hay que afirmar que en esta jurisdicción de ámbito penal, no se reciben los expedientes judiciales de forma digital ni en formato de expediente judicial electrónico y ello por los siguientes motivos:

En el ámbito jurisdiccional penal, en el ámbito de la comunidad autónoma andaluza se remiten los procedimientos en papel, especialmente motivado por la exigencia del Ministerio Fiscal de que se les remitan los expedientes en papel, lo que motiva que los órganos unipersonales penales, pese a que la gran mayoría de ellos tramitan de manera digital el procedimiento, reproducen en papel todo el expediente para poderlo tramitar con la fiscalía; haciéndose necesario recordar a los órganos judiciales penales la obligación de la tramitación digital íntegra de los expedientes, y la colaboración en este sentido por parte de la Fiscalía . A ello se añade que la fiscalía no forma parte de LEXNET, pese a estar legalmente previsto al objeto de recibir notificaciones y práctica de diligencias por vía telemática, lo que dificulta el tránsito en estos órganos judiciales al expediente digital.

Por lo demás, en el trabajo de los funcionarios, se informa la ayuda que realiza en su labor por la Letrada de la Administración de Justicia, de que se cuida el cumplimiento de las necesidades de anotaciones telemáticas de todo tipo que son exigibles, debido a la carga de trabajo que soportan por volumen de procedimientos en esta fase , la Letrada se ocupa de efectuar todas la anotaciones y actualizaciones en el Registro de Medidas Cautelares y Registro de Penados de las medidas de requisitorias , de violencia de género, así como de la anotación y registro de todas las Sentencias dictada por este órgano. La señora letrada comenta la situación que se encontró el negociado número tres en el ámbito de los señalamientos y que están realizando tanto la letrada como la juez, una labor de apoyo a ese negociado para ir corrigiendo las disfunciones observadas en el mismo.

Debe insistirse especialmente en la actualización de fases y estados, y en el registro de



cuantos acontecimientos procesales se producen y la identificación suficiente de los mismos, extremos éstos en los que la atención y dedicación ha de ser especialmente minuciosa para el futuro funcionamiento adecuado del expediente digital.

Se llevan libros MANUALES: Señalamientos, Piezas de Convicción, Conocimientos, Presos Preventivos, Autos, Decretos, Exhortos, Expedientes gubernativos -incluidos en él los indultos- como complemento a los informáticos). Y también libros INFORMÁTICOS: Cuenta de Consignaciones, Ejecutorias, Sentencias, Apelaciones de procedimientos abreviados, Apelaciones de juicios de faltas, Apelaciones de autos, Recursos de queja, Abstenciones, recusaciones, cuestiones de competencia, Rollos de sala: a) Sumarios y b) Procedimientos Abreviados, Jurados, Apelaciones de menores, Apelaciones de vigilancia penitenciaria, Expedientes gubernativos (incluidos en él indultos).

La Cuenta de Depósitos y Consignaciones tiene un saldo de 1.911.459,52 € se trata de una cuenta con no muchos ingresos mensuales del orden 87 aproximadamente, se encuentra bien actualizada y existe constancia de control en la misma por parte de la letrada teniendo un saldo medio excesivo a la naturaleza y entidad del órgano que gestiona, y ello debido a que en una sola cuenta existe una cantidad de 800.000 € y en varias también cantidades grandes, por tanto, se observa que mantiene operativa 91 cuentas, abiertas 112 y total activas 205 habiendo cancelado 2104 y concluidas 193, la cuenta se encuentra bien conservada y trabajaba constantemente, existe una equidistancia muy proporcional de mandamientos y transferencias con carácter mensual detectándose por el nivel de actividad que hay una dedicación y trabajo que se podría mejorar sensiblemente en el mantenimiento de la cuenta, no presenta disfunciones destacables, se observa una labor de gestión al existir sólo dos mandamientos pendientes de entrega o de cobro lo que indica que existe un control evidente sobre los mandamientos expedidos y sus finalidades dentro de la ejecución penal, sin tomar inequívoco de que existe un buen control de la ejecutoria penal y los ingreso de cantidades en ellas depositada, también se controla el pago de las multas a través de la visibilidad de movimientos en la cuenta de consignaciones y se transfieren la misma al tesoro. Se practican embargos y se cancelan debidamente, igualmente se detecta la existencia de subastas y su finalización, por lo que se puede finalmente concluir que existe un control adecuado a la cuenta de consignaciones aunque se podría mejorar ostensiblemente el control en las distintas ejecutorias al objeto de poder extraer cantidades tanto hacia el tesoro público como en mandamientos de devolución correspondientes, lo cual ha sido transmitido a la letrada manifestando que es consciente de ello y procurará realizar esa labor de mejora al objeto de conseguir la excelencia.

Los boletines estadísticos y los datos recogidos en el Acta de la Inspección arrojan una pendencia de 91 procesos en primera instancia, 356 recursos, 211 ejecutorias y 10 exhortos por cumplimentar.

De todo lo anterior cabe concluir:

1. La Sección Primera la Audiencia Provincial de Granada soporta, en términos generales, una carga de trabajo elevada y supera ligeramente el criterio técnico, orientativo e indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial, de 300 asuntos por Magistrado y año para las Secciones Penales de Audiencias Provinciales.

2. Del estudio detallado de las anteriores cifras de la presente inspección resulta que la



situación del órgano jurisdiccional inspeccionado se puede considerar correcta para un órgano de sus características y con la carga competencial que soporta, a la vista del número de asuntos pendientes de celebrar juicio o deliberación, el tiempo transcurrido entre el registro de entrada y la fecha de celebración del plenario, deliberación o fallo, así como en resolver los distintos recursos de apelación o incidentes interlocutorios.

3. Se detecta una buena labor resolutive consistente en el dictado general de siete ponencias semanales por Magistrado relativas a recursos, sin computar por lo general las ponencias correspondientes a juicios orales de dicha semana, salvo asuntos complejos por el número de afectados y partes, así como los recursos urgentes.

En segunda instancia, se está prácticamente al día en materia de recursos. Así, los procedimientos que no necesitan vista o juicio oral están en fechas de resolución razonables y cercanas en el tiempo al registro en la Sección (dos o tres meses), salvo retrasos por la dificultad en visualizar el expediente digital, o necesidad de subsanar defectos procesales.

Se dedican, como regla general, tres o cuatro días de agenda de la semana para celebración de juicios (martes, miércoles y jueves), con posible extensión y añadido en otro día de esa misma semana. Los señalamientos de juicios orales se fijan aproximadamente en torno a seis/ocho meses desde su entrada, salvo algunas disfunciones o retrasos, singularmente en asuntos más complejos por el número de afectados e interesados.

El último señalamiento está fijado para diciembre de 2023, si bien quedan huecos intermedios para señalamientos urgentes o de alguna causa compleja pendiente de dicho trámite. El número de suspensiones se encuentra en un porcentaje del 30%, cuestión que debe siempre ser objeto de especial atención para aliviar la carga de trabajo y que sea eficiente la labor que está realizando todo el equipo.

Las resoluciones dictadas por los Magistrados están correctamente fundamentadas y, en general, dentro del plazo. En la actualidad, no existen asuntos enjuiciados pendientes del dictado de la oportuna resolución.

4. Desde un punto de vista cualitativo, se observa en general un correcto trabajo y control por parte de los órganos rectores de la oficina judicial. Por ello, el Presidente de la Sección, conjuntamente con la Letrada de la Administración de Justicia, dentro de sus competencias, seguirán actuando lo necesario para seguimiento, impulso y revisión periódica de los asuntos, en especial los de mayor antigüedad.

Deben actualizarse los procedimientos pendientes de señalamiento para evitar dilaciones. Asimismo, destacar que, a veces, se suspende el día señalado para la deliberación por problemas procesales o subsanaciones imprescindibles (defectuoso testimonio de particulares, déficits informáticos, designación de profesionales de oficio, etc.) y se debe estar pendiente para no retrasar en exceso la posible resolución de fondo.

Se recomienda agilizar la tramitación procesal de la fase intermedia de los sumarios, cuyo examen revela que se alarga temporalmente, por lo que se aconseja valorar la conveniencia de que sea común para todas las partes el trámite para darse por instruidas del procedimiento, así el traslado para calificación provisional, que debe unificarse para las partes acusadoras y luego también para las



partes acusadas, en vez de hacerlo de forma sucesiva.

Las causas con preso se señalan dentro de plazos razonables desde la fecha de entrada en Secretaría. Buen control sobre procedimientos en los que se han dictado órdenes de busca y captura o existen presos preventivos. Los partes de adelanto de los sumarios deben recordarse a los Juzgados de Instrucción correspondientes con periodicidad.

5. La plantilla, compuesta por funcionarios titulares e interinos, se considera muy ajustada para el nivel de ingreso de asuntos, por lo que podría ampliarse o reforzarse con otro tramitador procesal. De otro lado, no es muy estable y es necesario que la Consejería de Justicia cubra con prontitud las bajas y vacantes.

La cualificación y rendimiento de gran parte de los funcionarios resultan adecuados, al tiempo que el clima laboral, cumplimiento de horario y predisposición al trabajo parecen correctos. Se detectan relaciones correctas entre sus integrantes y la distribución de cometidos entre el personal destinado en el órgano parece adecuada. La oficina judicial funciona en general con eficiencia, mérito imputable a todos los que forman parte de la misma y a quienes constituyen el equipo rector.

6. Debe mantenerse el esfuerzo en el tratamiento informático de los procedimientos para la plena implantación del expediente digital, así como la plena anotación e identificación de los acontecimientos de cada asunto en el sistema de gestión procesal.

Asimismo, al amparo de lo establecido en el artículo 18 del ROCSJ, aprobado por RD 1608/2005, es conveniente que el Secretario de Gobierno imparta las instrucciones oportunas para que los Juzgados, antes de remitir los asuntos a la Sección de la Audiencia Provincial, comprueben que las actuaciones están completas, así como el envío de las grabaciones audiovisuales, en su caso, junto a la necesidad de que los funcionarios cuiden la indexación y ordenación telemática de los procedimientos remitidos, vigilando por su cumplimiento los Letrados/as de cada Juzgado de origen.

En efecto, visto el inconveniente de que la mayoría de los órganos judiciales no confeccionan correctamente el expediente digital, ni vienen bien identificados los acontecimientos ni bien indexado el procedimiento, sin olvidar que los Juzgados instructores todavía remiten en papel los procedimientos, es imprescindible que por el Secretario de Gobierno y los respectivos Secretarios Coordinadores se impartan las oportunas instrucciones, circulares y, en su caso, apertura de seguimientos, recordando a los Letrados/as de la Administración de Justicia de los órganos unipersonales la necesidad de que impartan las instrucciones necesarias a los funcionarios a fin de que se cuide la indexación y ordenación telemática de los procedimientos remitidos, así como vigilen su cumplimiento.

Es imprescindible que la Fiscalía se integre en LEXNET, lo que está legalmente previsto, al objeto de recibir notificaciones y práctica de diligencias por vía telemática, única forma de completar el tránsito de los órganos judiciales al expediente digital.

7. El control y gestión de las cuentas-expedientes de consignaciones es correcto, si bien se pueden realizar pequeñas mejoras.

Particípese el presente acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario Coordinador Provincial y al órgano afectado, para su conocimiento y efectos procedentes.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

2.6- VISITA DE INSPECCIÓN Nº 00000006/2023 realizada a la SECCIÓN Nº 6 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE CÁDIZ CON SEDE EN CEUTA por el Excmo. Sr. Presidente del TSJ de Andalucía, Ceuta y Melilla el día 23/02/2023, sirviendo el órgano judicial el Ilmo. Sr. Presidente de la Sección Sexta Don Fernando Tesón Martín, y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, y por unanimidad, acuerda APROBAR LA VISITA DE INSPECCIÓN GIRADA.

La última visita de Inspección fue realizada por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial en el año 2015.

Tres Magistrados conforman el Tribunal: D. Fernando Tesón Martín (Presidente), Doña Rosa M^a De Castro Martín y D. Emilio José Martín Salinas. Una Letrada de la Administración de Justicia, Doña Eva Zurita Ruiz. Dos gestoras, Doña

y Doña

. Dos tramitadoras, Doña

y Doña

La plantilla se considera algo ajustada para el nivel de asuntos, por lo que podría ampliarse o reforzarse con otro tramitador procesal, máxime ante el aumento de procedimientos para enjuiciamiento de cierta complejidad. De otro lado, es necesario cubrir con prontitud las posibles bajas y vacantes.

La plantilla se divide en dos grupos, con la siguiente organización y distribución: El grupo uno está compuesto por dos gestoras que son las encargadas de la completa tramitación hasta el dictado de sentencia firme y el correspondiente dictado de auto despachando de ejecución de los Procedimientos Sumarios, Ordinarios, Abreviados, Tribunal del Jurado, repartiéndose los números según sean pares o impares.

El grupo dos, compuesto por dos tramitadoras que se encargan de la tramitación de todos los recursos civiles y penales (delitos leves), ejecutorias, exhortos, cuestiones de competencia y demás incidencias, con el mismo criterio de reparto de números que el grupo primero.

Los criterios de esta distribución van dirigidos a lograr una mayor eficiencia en la tramitación de las causas, sin perjuicio de modificarlos para adaptarlos a las nuevas necesidades de la Secretaría. Respecto a las sustituciones, se exige que de cada grupo puedan coincidir en el tiempo un funcionario, teniendo así cubiertas las incidencias que pudieran surgir.

Las instalaciones están en buenas condiciones, si bien el edificio que las alberga adolece de conocidas deficiencias. La Sala es de uso exclusivo de la Sección y cubre perfectamente todas las necesidades de la misma.

Los medios informáticos que dispone la Sección son el sistema de notificaciones LEXNET, la aplicación informática Minerva, Cuenta de Depósitos y Consignaciones, Siraj, Punto Neutro Judicial, Sistema de Grabación de Vistas E-Fidelius, Ainoa, Escritorio Integrado, Visor, Horus, Outlook y Portafirmas.

En cuanto a la utilización y acceso a través de las distintas aplicaciones a los servicios ofertados por el PNJ, es asidua su utilización sobre todo para consultas domiciliarias.

Salvo algún error, el personal de esta Sección cumple con la observancia y cumplimiento del Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al Servicio de la Administración de Justicia (Instrucción 2/2003 del C.G.P.J, de 26 de febrero de 2003).



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

Los libros se llevan informáticamente.

Todos los bienes intervenidos en los procedimientos penales por las unidades judiciales de Ceuta quedan en depósito del Servicio Común Procesal General de Ceuta, quien se encarga de su guarda y custodia, así como de la gestión de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de los procedimientos de ejecución de la Upad de la Audiencia Provincial de Ceuta.

Dicha Cuenta, conforme al informe del Secretario de Gobierno, se presenta actualizada, sin que se observe disfunción alguna. La cuenta depósitos y consignaciones en el día de la inspección arroja un saldo de 1.106.807,39 euros. Sólo hay un mandamiento de devolución pendiente de ser cargado en cuenta. No consta ningún mandamiento de devolución que haya sido cancelado por no haberse presentado al cobro.

Se puede decir que desde que la actual Letrada del SCEJ Penal se hiciera cargo de dicho Servicio, por parte de la misma se ha realizado un gran esfuerzo por corregir las distintas disfunciones existentes tanto en la tramitación de los procedimientos de ejecución como en la gestión de la cuenta de consignaciones, contando siempre con la ayuda de la Gestora Procesal de la Jefa de Equipo del SCEJ Penal y de todo el personal funcionario del SCEJ Penal.

Dicho lo anterior y revisadas la Cuenta de Consignaciones de la Upad de la Audiencia Provincial de Ceuta, en cuanto a las consignaciones en los procedimientos de ejecución, epígrafe 78; se aprecia que existen 10 procedimientos activos, con dinero en 9 de ellos, y procediéndose al control o supervisión de los procedimientos a que corresponde el dinero depositado en la cuenta, se observa que en todas ellas está perfectamente controlado y explicada la razón de existencia del dinero en la cuenta de consignaciones, así por ejemplo: a) En la Ejecutoria 13/2021, que existe un depósito de 5.068,31 euros, se está a la espera de que el perjudicado facilite número de cuenta para transferencia del dinero, b) En la Ejecutoria 29/2020, que existe en la cuenta la cantidad de 9.750,00 euros, se ha procedido a ordenar la transferencia de dicha cantidad al Tesoro Público, c) En la Ejecutoria 44/2015, que existe la cantidad de 68.190 euros, consta Diligencia de Ordenación de fecha 11/11/2022 de la Letrada AJ dando explicación de los conceptos que engloba dicha cantidad que corresponde a distintas cantidades depositadas en concepto de fianza y el destino que debe darse a dichas cantidades.

En definitiva, podemos decir claramente que la cuenta de consignaciones de los procedimientos de ejecución de la Upad de la Audiencia Provincial no presentan ninguna disfunción que la misma es controlada y llevada correctamente por la Letrada del SCEJ Penal.

Los boletines estadísticos y los datos recogidos en el Acta de la Inspección arrojan una pendencia de 61 recursos civiles. En el orden jurisdiccional penal existen 50 procesos de primera instancia, 87 recursos, 2 exhortos y 110 ejecutorias.

De todo lo anterior se puede concluir:

1. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, soporta, en términos generales, una carga de trabajo elevada, si bien por debajo del criterio técnico, orientativo e indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial, de 260 asuntos por Magistrado y año para las Secciones mixtas de Audiencias Provinciales.

2. Del estudio detallado de las anteriores cifras de la presente inspección resulta que la



situación del órgano jurisdiccional inspeccionado no se puede considerar normalizada, a la vista del número de asuntos pendientes de celebrar juicio o deliberación, el tiempo transcurrido entre el registro de entrada y la fecha de celebración del plenario, deliberación o fallo, en algunos procedimientos, así como de resolución de distintos recursos de apelación.

Todo ello, sin perjuicio de reconocer el esfuerzo y trabajo que se viene realizando, así como la existencia de ciertas causas de especial complejidad o la dificultad actual en visualizar correctamente y trabajar con agilidad en el expediente judicial electrónico.

3. Se parte de una labor prevista consistente en el dictado de seis ponencias semanales por Magistrado (cuatro recursos penales y dos recursos civiles), sin computar por lo general las ponencias correspondientes a juicios orales de dicha semana, salvo asuntos complejos por el número de afectados y partes, así como los asuntos urgentes.

Se dedican, como regla general, dos días de agenda de la semana para celebración de vistas o juicios. Como norma, se señala un procedimiento por día, salvo que se añada un segundo asunto por escasa entidad o duración y, por supuesto, señalamientos complejos que exigen varias sesiones.

Los señalamientos de juicios orales se fijan aproximadamente en torno a seis/ocho meses desde su entrada, salvo algunas disfunciones o retrasos, singularmente en asuntos más complejos por el número de afectados e interesados. El último señalamiento de juicio oral está fijado para finales del mes de junio de 2023, si bien quedan huecos intermedios para señalamientos urgentes.

Llama la atención que hay procedimientos todavía pendientes de señalamiento, alguno desde hace dos años, lo que no es razonable ni justificable, pese a su posible complejidad. En este sentido, llama la atención por su demora en señalar los procedimientos abreviados nºs. 15/2021, 11/2022 y 18/2022.

En segunda instancia penal, se trabaja con mayor agilidad en materia de recursos y no es necesario esperar muchos meses para su resolución. Así, los procedimientos que no necesitan vista o señalamiento están en fechas de resolución razonables y cercanas al registro (dos o tres meses), salvo retrasos en algunos procedimientos, algunos justificados por la dificultad en visualizar el expediente digital o necesidad de subsanar defectos procesales. Se observa, además, que existe duplicidad de fechas para deliberación de idéntico procedimiento y ponente.

En segunda instancia civil, existen deficiencias y contrastes. Tras su registro y asignación de ponente, se dicta resolución acordando su señalamiento para día concreto, lo que acaece en torno a los cuatro/seis meses siguientes, con distinta temporalidad según el ponente, de forma que es superado en algunos procedimientos examinados. Se observa, asimismo, que existe doble señalamiento y duplicidad sucesiva de distintas fechas para deliberación de idéntico procedimiento y ponente.

El señalamiento para deliberación y fallo de los recursos sufre demora en los asuntos asignados a algunos ponentes. El tiempo empleado en dictar resolución no siempre se ajusta los plazos legales en los asuntos turnados a algunos magistrados, que, en ocasiones, pueden obedecer a la complejidad del mismo.

Las resoluciones dictadas por los Magistrados están bien fundamentadas, si bien, como se acaba de comentar, existen asuntos enjuiciados o deliberados pendientes en exceso del dictado de la



oportuna resolución.

Por ello, como reflexión general, se considera conveniente una mejor gestión de la agenda de señalamientos de juicios y deliberaciones, para caminar hacia el mejor rendimiento y eficacia de la Sección inspeccionada en el doble ámbito jurisdiccional. En este sentido, es necesario mejor control por el Presidente de la Sección y seguimiento temporal de los recursos pendientes de resolver, de forma que se eviten contrastes de funcionamiento según el ponente y se asegure un mayor control sobre la efectiva deliberación y firma de cada asunto señalado en el momento correspondiente.

Igualmente se recomienda no dilatar tanto tiempo para el señalamiento de las sesiones de las denominadas macrocausas, y ello con independencia de las vicisitudes por complejidad o posibles conformidades, que no pueden justificar tanto tiempo de pendencia para fijar el inicio del juicio oral. En este sentido, se aconseja incrementar la convocatoria de vistas en fecha cercana a la recepción del procedimiento a los fines exclusivos de depurar el procedimiento en materia de pruebas y cuestiones previas y, en su caso, posibilitar una conformidad. Por lo mismo, se recomienda aprovechar dicha convocatoria para citar al oportuno señalamiento a los acusados y letrados en aquellos casos en los que no se hubiera alcanzado un acuerdo.

4. Desde un punto de vista cualitativo, a salvo de las puntualizaciones antes comentadas, se observa en general un correcto trabajo y control por parte de los órganos rectores de la oficina judicial. Por ello, el Presidente de la Sección, conjuntamente con la Letrada de la Administración de Justicia, dentro de sus competencias, seguirán actuando lo necesario para seguimiento, impulso y revisión periódica de los asuntos, en especial en los de mayor antigüedad.

Deben actualizarse los procedimientos pendientes de señalamiento o deliberación para evitar dilaciones antes comentadas. Asimismo, destacar que, a veces, se suspende el día señalado para la deliberación por problemas procesales o subsanaciones imprescindibles (defectuoso testimonio de particulares, déficits informáticos, etc.) y se debe estar pendiente para no retrasar en exceso la posible resolución de fondo.

Se recomienda al Presidente de la Sección asegurar el cumplimiento de los criterios generales para el señalamiento de la deliberación, votación y fallo de los asuntos, en aras a lograr una uniformidad en el ritmo de señalamientos, así como acortar los tiempos en que se vienen señalando los asuntos turnados a algunos magistrados, atendidas las diferencias temporales advertidas en función del ponente del asunto.

Se recomienda que, a la mayor brevedad, se dicten las resoluciones pendientes, tanto de recursos con fecha de deliberación ya transcurrida en exceso, como de juicios vistos para sentencia.

Las causas con preso se señalan dentro de plazos razonables desde la fecha de entrada en Secretaría. Buen control sobre procedimientos en los que se han dictado órdenes de busca y captura o existen presos preventivos. Los partes de adelanto de los sumarios deben recordarse a los Juzgados de Instrucción correspondientes con periodicidad.

5. La plantilla, compuesta por funcionarios titulares e interinos, se considera algo ajustada para el nivel de asuntos, por lo que podría ampliarse o reforzarse con otro tramitador procesal. De otro lado, no es muy estable y es necesario que se cubran con prontitud las bajas y vacantes.

La cualificación y rendimiento de gran parte de los funcionarios resultan adecuados, al tiempo



que el clima laboral, cumplimiento de horario y predisposición al trabajo parecen correctos. Se detectan relaciones correctas entre sus integrantes y la distribución de cometidos entre el personal destinado en el órgano parece adecuada. Se aprecia una buena dirección y control.

6. Debe mantenerse el esfuerzo en el tratamiento informático de los procedimientos para la plena implantación del expediente digital, así como la plena anotación e identificación de los acontecimientos de cada asunto en el sistema de gestión procesal.

Asimismo, al amparo de lo establecido en el artículo 18 del ROCSJ, aprobado por RD 1608/2005, es conveniente que el Secretario de Gobierno imparta las instrucciones oportunas para que los Juzgados, antes de remitir los asuntos a la Sección de la Audiencia Provincial, comprueben que las actuaciones están completas, así como el envío de las grabaciones audiovisuales, en su caso, junto a la necesidad de que los funcionarios cuiden la indexación y ordenación telemática de los procedimientos remitidos, vigilando por su cumplimiento los Letrados/as de cada Upad.

7. El control y gestión de las cuentas-expedientes de consignaciones es correcto.

Particípese el presente acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario Coordinador Provincial y al órgano afectado, para su conocimiento y efectos procedentes.

2.7- VISITA DE INSPECCIÓN Nº 00000007/2023 realizada al SECCIÓN Nº 2 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA por el Excmo. Sr. Presidente del TSJ de Andalucía, Ceuta y Melilla el día 03/03/2023, sirviendo el órgano judicial la Ilma. Sra. Presidenta de la Sección Segunda Doña María Aurora González Niño, y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, y por unanimidad, acuerda APROBAR LA VISITA DE INSPECCIÓN GIRADA.

La última visita de Inspección fue realizada por el Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla el 17 de febrero de 2017, sirviendo el órgano judicial como Presidente el Ilmo. Sr. Don José Requena Paredes.

La plantilla la integran cinco Magistrados, una Letrada de la Administración de Justicia, dos gestoras procesales, cinco tramitadores procesales y dos funcionarios de auxilio judicial.

Magistrados: Doña María Aurora González Niño, toma de posesión en fecha 5 de abril 2005, toma posesión como Presidenta de la Sección en el mes de octubre de 2019. Don José María Sánchez Jiménez, toma de posesión en fecha 10 de julio de 2012. Don Juan Carlos Cuenca Sánchez, toma de posesión en fecha 27 de diciembre de 2007. Doña María Aurora Fernández García, toma de posesión en fecha 14 de abril de 2015. Don Francisco Ontiveros Rodríguez, toma posesión el 8 de febrero de 2023.

Don Arturo Valdés Trapote, en comisión de servicio desde el 31 de enero de 2022 hasta el 28 de febrero de 2023. Don Pedro Ramos Almenara, Magistrado suplente desde el 13 de febrero de 2023.

Letrada de la Administración de Justicia: Doña Encarnación Pérez Izquierdo, toma de posesión de fecha 19 de septiembre de 2022.

La plantilla, compuesta por funcionarios titulares e interinos, se considera muy ajustada para el nivel de ingreso de asuntos, por lo que debería ampliarse o reforzarse con otro tramitador procesal,



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

máxime ante el aumento de procedimientos para enjuiciamiento con un número elevado de acusados y compleja tramitación procesal en la doble fase de enjuiciamiento y ejecución.

La letrada de la administración de justicia se incorporó al órgano el 19 de septiembre de 2022 y ha realizado una correcta labor, especialmente, valorando la carga de trabajo existente en cada uno de los negociados, con la intención de que la labor que se realizara en la oficina fuera constante y uniforme. Expone la LAJ, que cuando tomó posesión y analizó el sistema de trabajo establecido, su primera intención fue evitar que las bajas de funcionarios pudieran afectar a la marcha de determinados asuntos, que por su importancia, no podían dejarse paralizados y estableció un sistema de sustituciones del personal en la llevanza de los asuntos más delicados, en especial, la macro-causas penales, indicando que funcionario de los que estuvieran en activo, se encargarían de su llevanza provisional, hasta la cobertura por un funcionario interino, que descargara a estos de dicha labor.

Indica la LAJ que tiene un libro para controlar, de forma correcta, la estadística judicial y el reparto de los asuntos a los magistrados, al tiempo que está implementando sistemas de control a través del propio sistema de gestión procesal para prescindir de libros físicos para este menester, aun así, entiende que el control de todo tipo de listados, se debe realizar con el sistema de gestión procesal Adriano y sólo en algunos supuestos y de forma excepcional, de forma manual.

La letrada realiza su labor de control del órgano comprobando a diario la entrada de todos los escritos y minuta todo el reparto que entra en el órgano, dándole su correspondiente número y repartiendo al magistrado correspondiente, analizando los defectos de forma y lo necesario para su proveído, por tanto, los asuntos son estudiados por la letrada, de entrada, para la subsanación que corresponda, antes de que el magistrado correspondiente asuma la ponencia y el estudio del asunto.

Los funcionarios que tramitan los señalamientos, que en la actualidad son seis, es conveniente que continúen ejerciendo esa labor, para procurar que la agenda de señalamientos se mantenga en ese buen estado y también, cuestión muy importante, se minimicen las suspensiones.

El ambiente laboral, tanto entre los funcionarios como con el equipo rector, LAJ y Magistrados, es bueno y se puede considerar, según afirma la Letrada de la Administración de Justicia, que la actividad desplegada es constante y en fase de mejora continua. La actitud de los funcionarios, según indica la señora letrada, es positiva en general, como puede apreciarse en la evolución de estadística.

En cuanto a necesidades de personal, pese a que este órgano tiene el apoyo cada seis meses de un funcionario adscrito a la Presidencia de la Audiencia Provincial de Granada, el cual sirve durante los otros seis meses a la Sección Primera, debe tenerse en cuenta que posee un funcionario de tramitación menos que aquélla, siendo necesario ampliar la plantilla en un tramitador más.

Las distintas dependencias de la Sección Segunda se encuentran en el mismo edificio de la Real Chancillería pero separadas espacialmente unos cien metros y además en plantas distintas. En la planta baja se encuentra la oficina judicial, sala de vistas y un archivo, en una planta intermedia un archivo y un habitáculo para las piezas de convicción y, por último, en la planta primera los despachos de los Magistrados.

Por su carácter histórico el edificio no se encuentra totalmente adaptado a las necesidades de



acceso de los ciudadanos con minusvalías y presenta gran dificultad el transporte y porteo de los expedientes que han de trasladarse desde unas dependencias a otras subiendo y bajando escaleras que no permiten el uso de un carro u otro medio idóneo, realizándose por los funcionarios y magistrados de forma manual.

La oficina judicial esta ubicada en la planta baja (tercer patio), formada por dos salas amplias conectadas por un pasillo, con ventilación exterior y una de ellas también al patio tercero donde se ubica. La luz natural es escasa y prácticamente nula en una de ellas.

Se considera necesario la dotación de armarios nuevos para la oficina que tiene actualmente estanterías sin puertas.

La Sección dispone de una sala de vistas en exclusividad y utiliza la sala de la Sección 1ª para las causas con jurado al estar habilitada para ello. Asimismo, dada la escasez de espacio de la sala de vistas de esta Sección, se intenta utilizar la sala de la Sección 1ª cuando son más de tres los letrados asistentes. Es imprescindible aumentar la zona habilitada para las partes y el entarimado de dicha Sala de vistas para que puedan estar mayor número de letrados, sin necesidad de que se ubiquen en la zona destinada al público.

No dispone de una sala o habitación próxima para testigos o menores que necesiten estar aislados a la espera de su declaración, teniendo que utilizar actualmente los pasillos de la planta primera y el archivo contiguo a la sala si es necesario evitar el contacto visual con las partes. Sería necesario habilitar una sala para testigos.

Dispone la sala de varios archivos dispersos. Una dependencia contigua a la Sala de vistas que se comparte con la Sección 1ª, una pequeña habitación a la que se accede por unas escaleras, un archivo en otro edificio en plaza Luis Rosales que se comparte con las secciones civiles, un archivo sistematizado y documentado en el edificio de los Juzgados de Primera instancia y el archivo histórico de la Chancillería. Dispone asimismo de una habitación para las piezas de convicción que se comparte con la Sección 1ª. Se necesita, por tanto, la creación de un único archivo dotado de personal archivero y un servicio común de piezas de convicción.

La oficina judicial dispone de un ordenador personal para cada uno de los funcionarios, todos ellos tienen instalado el sistema de gestión procesal Adriano y cuantas aplicaciones son necesarias para el desarrollo de su función, Hermes, Lexnet, web mail correo corporativo, Siraj, RCPR, firma digital y acceso al PNJ así como a la Cuenta de Consignaciones Judiciales con el perfil de consulta los funcionarios autorizados. El sistema Nautius de itineraciones lo tiene instalado la letrada y un funcionario de auxilio y un gestor procesal. Dispone de tres fotocopadoras, dos de ella con scanner y fax. Los Magistrados disponen de un ordenador personal cada uno, sistema de gestión procesal Adriano, firma digital y los accesos previstos por el CGPJ así como lector de CD's.

La sala de vistas dispone del sistema de grabación Arconte que funciona con regularidad. Cuenta también la sala de vistas con sistema de videoconferencia, sistema con múltiples fallos técnicos.

Para los juicios con Jurado se utiliza la sala de vistas de la Sección 1º preparada para ello y la sala de deliberaciones de los jurados que cuenta con lo necesario. Esta misma sala de deliberaciones dispone de sistema de videoconferencia por lo que es usada por ambas Secciones para la práctica de



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

las solicitadas por exhorto.

La firma digital funciona con regularidad. Tampoco existen problemas respecto de la recepción y cumplimentación de exhortos telemáticos.

En cuanto a los servicios que ofrece el PNJ son utilizados por la totalidad de los funcionarios titulares, si bien cada uno de ellos ha sido autorizado solo para aquellas aplicaciones que le son necesarias en el desarrollo de su concreta función.

Se observa y se cumple por parte del personal el Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al Servicio de la Administración de Justicia con total regularidad, y en cuanto a la Instrucción del Secretario General de la Administración de Justicia números 4/2009 y 5/2010 emitidas con motivo de la entrada en funcionamiento de SIRAJ se da cumplimiento a las mismas, elaborando cada funcionario la correspondiente nota que es visada o rectificada por la Letrada de la Administración de Justicia. Se da cumplimiento asimismo al Reglamento de Homogeneización del CGPJ 2/2010 fundamentalmente en cuanto a la transferencia y registro de procedimientos.

El acceso a la Cuenta de Consignaciones Judiciales con el perfil de consulta esta autorizado a las dos funcionarias que llevan ejecutorias, realizando éstas también la operativa de embargos telemáticos.

Los asuntos se reciben con los intervinientes y profesionales que los asisten o representan ya registrados por la Oficina de Registro y Reparto, por lo que para proceder a su aceptación utilizan la Aplicación de Itineraciones "Nautius".

El total de asuntos registrados en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada por la Aplicación informática Adriano es de 43.778. El número de asuntos registrados en la citada Aplicación hasta finales del año 2022, y desde comienzos de 2022 hasta fecha de 31 de diciembre de 2022 es de 1.946 asuntos.

Respecto a los acontecimientos o trámites realizados a través de la Aplicación informática el total se eleva a 510.107 acontecimientos, 3.368 civiles y 506.739 penales, de los cuales 38.157 corresponden a acontecimientos registrados desde el inicio del año 2022 hasta el 31 de diciembre, 46 civiles y 38.111 penales.

En relación con la elaboración de las resoluciones judiciales integradas en la Aplicación informática de gestión procesal, figuran registradas un total de 32.252 resoluciones judiciales, de las cuales 14.983 son sentencias, 16.301 son autos definitivos y 716 son decretos definitivos penales, y en civil 2 sentencias, 222 autos definitivos y 28 decretos definitivos. Respecto al volumen de resoluciones judiciales registradas desde comienzos de 2022 hasta 31 de diciembre de 2022, figuran un total de 546 sentencias, 882 autos definitivos y 46 decretos definitivos penales.

El reflejo de la situación de los procedimientos de forma que se encuentre constantemente actualizada es de 24.070 actualizaciones manuales de fases y estados de las que 328 corresponden al año 2022. Hay 2.702 procedimientos pendientes y 2.038 procedimientos inactivos en los que no se ha realizado ningún acontecimiento o trámite en Adriano en los seis meses anteriores a la fecha de la consulta.

La letrada vela eficazmente por la tramitación digital de todos los procedimientos y sigue las



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

pautas establecidas al efecto en el entorno digital, con cumplimiento de las instrucciones dictadas por el Secretario General de la Administración de justicia y el Secretario de gobierno, pero no podemos ignorar que este órgano recibe procedimientos de otros órganos al tratarse, de órgano de enjuiciamiento y a la vez de segunda instancia penal, lo que le sirve, por un lado para poder corregir en determinados supuestos deficiencias procedentes de esos expedientes, pero desgraciadamente, en el ámbito jurisdiccional penal todos los asuntos llegan en formato papel.

Tiene esta cuestión su explicación en que aunque los órganos unipersonales itineran informáticamente todos los asuntos por Nautius, y el contenido de las resoluciones judiciales dictadas pueden comprobarse a través del modo consulta en la propia aplicación de gestión procesal Adriano, hay que afirmar que en esta jurisdicción de ámbito penal, no se reciben los expedientes judiciales de forma digital ni en formato de expediente judicial electrónico y ello por los siguientes motivos:

En el ámbito jurisdiccional penal, en el ámbito de la comunidad autónoma andaluza se remiten los procedimientos en papel, especialmente motivado por la exigencia del Ministerio Fiscal de que se les remitan los expedientes en papel, lo que motiva que los órganos unipersonales penales, pese a que la gran mayoría de ellos tramitan de manera digital el procedimiento, reproducen en papel todo el expediente para poderlo tramitar con la fiscalía, haciéndose necesario recordar a los órganos judiciales penales la obligación de la tramitación digital íntegra de los expedientes, y la colaboración en este sentido por parte de la Fiscalía . A ello se añade que la fiscalía no forma parte de LEXNET, pese a estar legalmente previsto al objeto de recibir notificaciones y práctica de diligencias por vía telemática, lo que dificulta el tránsito en estos órganos judiciales al expediente digital.

Por lo demás, en el trabajo de los funcionarios, se informa la ayuda que realiza en su labor por la Letrada de la Administración de Justicia, de que se cuida el cumplimiento de las necesidades de anotaciones telemáticas de todo tipo que son exigibles, se trata de un órgano en el que todas las resoluciones son denominadas y no existe la posibilidad ni se observa la existencia de textos libres y resoluciones no denominadas correctamente, por lo que se anima a la letrada continuar en esta labor.

Se observa cierta disfunción en la actualización de las fases y estados de los distintos procedimientos por lo que debe insistirse especialmente en esta labor, y en el registro de cuantos acontecimientos procesales se producen y la identificación suficiente de los mismos, extremos éstos en los que la atención y dedicación ha de ser especialmente minuciosa para el futuro funcionamiento adecuado del expediente digital.

Se indican ciertas deficiencias observadas en los procedimientos que llegan de los juzgados de instrucción, como por ejemplo, que cuando se remite en testimonios de los asuntos para resolver las correspondientes apelaciones, se realiza el envío digital de todo el procedimiento, pero sin discriminar ni distinguir, aquellos acontecimientos y documentos que formarían parte del testimonio que se ha enviado, lo cual obliga a realizar una labor inasumible por el órgano de segunda instancia, esta cuestión ha de ser solucionada mediante el envío de ese testimonio escaneando en forma digital y no la remisión completa del expediente.

Igualmente se observa que los expedientes que proceden de juzgado de instrucción, no son debidamente consolidados, lo cual ha de ser corregido, y esto lleva consigo la consecuencia de que cuando se remiten los correspondientes datos electrónicos de la realización de la vista, no se pueda



transferir a través del sistema ARCONTE, al no poderse afectar informáticamente, debidamente, el asunto por el órgano de conocimiento, esta sección inspeccionada, lo cual ha de ser debidamente corregido, esta circunstancia ha derivado en que los magistrados de esta sección prefieran solicitar el acompañamiento de un cd aportando la vista, y no utilizar el sistema del hipervínculo al documento electrónico depositado en la base de datos del sistema ARCONTE.

Por último, las declaraciones que proceden de los juzgados de instrucción, una vez remitidas al órgano de enjuiciamiento, se encuentran sin marcas, ni indexación, lo cual dificulta enormemente la labor de seguimiento y análisis por parte del órgano enjuiciador.

Todas estas cuestiones han de ser debidamente corregidas, para lo que se ha propuesto esta letrada, para que junto con su compañera de la sección primera de esta audiencia Provincial, realizar acompañados de este secretario de gobierno una reunión con los compañeros de los juzgados que remiten causas penales a estos órganos, para realizar una labor de fijación de buenas prácticas para evitar todos estos inconvenientes, y adaptarse a la ventaja y adelanto que tiene el poder desarrollar de una manera digital integrada y completa estos procedimientos penales, y ello con independencia de que no se pudieran itinerar únicamente en forma digital los mismos, debiendo coexistir con el papel, por la circunstancia que hemos comentado de la obligatoriedad del formato físico de papel, para poder tramitar el expediente judicial, con el ministerio fiscal en esta comunidad autónoma.

Los libros de Secretaría son informáticos, por lo que se pueden extraer del SGP ADRIANO en cualquier momento actualizados.

Se exceptúa el Libro de señalamientos y el Libro de Presos que se llevan solo manuales por no resultar operativo el registro del SGP.

Además de los libros informáticos, se mantiene la llevanza manual de algunos libros, sin perjuicio de que se puede extraer la misma información del SGP.

La Cuenta de Depósitos y Consignaciones tiene un saldo de 363.743,99 € a día de la inspección. Se trata de una cuenta con una entrada media ingresos mensuales del orden 100 aproximadamente, que se encuentra bien actualizada y existe constancia de control en la misma por parte de la letrada, teniendo un saldo medio correcto a la naturaleza y entidad del órgano que gestiona, y ello a pesar de que en una sola cuenta existe una cantidades importantes, como dos ingresos de 400.000 € que están en vías de regularización.

Se observa que mantiene operativa 91 cuentas, abiertas 63 y total activas 154 habiendo cancelado 2092 y concluidas 244, lo que nos indica, que la cuenta se encuentra bien conservada y trabajaba de forma constante y uniforme, y es que existe una equidistancia muy proporcional de mandamientos y transferencias con carácter mensual, detectándose por el nivel de actividad, que hay una dedicación y trabajo que es muy correcto en el mantenimiento de la cuenta.

Se observa una labor de gestión eficaz, y esto se aprecia al comprobar el no existir mandamientos pendientes de entrega o de cobro, lo que indica que existe un control evidente sobre los mandamientos expedidos y sus finalidades dentro de la ejecución penal, síntoma inequívoco de que existe un buen control de la ejecutoria penal y los ingresos de cantidades en ellas depositadas.

También se controla bien el pago de las multas por transferencias, a través de la visibilidad de movimientos en la cuenta de consignaciones y se transfieren la misma al tesoro. Se practican



embargos y se cancelan debidamente, e igualmente se detecta la existencia de subastas y su finalización, por lo que se puede finalmente concluir que existe un control adecuado a la cuenta de consignaciones, esta realizando su labor muy bien al estar trabajando de forma constante, posee una buena conservación de la cuenta que, se encuentra muy actualizada, comprobándose efectivamente el control y trabajo realizado, por lo que es felicitada por este inspector, en esta labor concreta.

Los boletines estadísticos y los datos recogidos en el Acta de la Inspección arrojan una pendencia de 90 procesos en primera instancia, 287 recursos, 12 exhortos y 68 ejecutorias.

De todo lo anterior se puede concluir:

1. La Sección Segunda la Audiencia Provincial de Granada soporta, en términos generales, una carga de trabajo elevada y supera ligeramente el criterio técnico, orientativo e indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial, de 300 asuntos por Magistrado y año para las Secciones Penales de Audiencias Provinciales.

2. Del estudio detallado de las anteriores cifras de la presente inspección resulta que la situación del órgano jurisdiccional inspeccionado se puede considerar correcta para un órgano de sus características y con la carga competencial que soporta, salvo algunas puntualizaciones, a la vista del número de asuntos pendientes de celebrar juicio o deliberación, el tiempo transcurrido entre el registro de entrada y la fecha de celebración del plenario, deliberación o fallo, así como en resolver los distintos recursos de apelación o incidentes interlocutorios.

3. Se detecta una buena labor resolutive consistente en el dictado general de siete ponencias semanales por Magistrado relativas a recursos de apelación, sin computar por lo general las ponencias correspondientes a juicios orales de dicha semana, salvo asuntos complejos por el número de afectados y partes, así como los asuntos urgentes.

En segunda instancia, se está prácticamente al día en materia de recursos. Así, los procedimientos que no necesitan vista o juicio oral están en fechas de resolución razonables y cercanas en el tiempo al registro en la Sección (dos o tres meses), salvo retrasos por la dificultad en visualizar el expediente digital, o necesidad de subsanar defectos procesales.

Se dedican, como regla general, tres o cuatro días de agenda de la semana para celebración de juicios (martes, miércoles y jueves), con posible extensión y añadido en otro día de esa misma semana. El último señalamiento está fijado para abril de 2024, si bien quedan bastantes huecos intermedios para señalamientos urgentes, así como de alguna causa compleja pendiente de dicho trámite. El número de suspensiones se encuentra en un porcentaje del 30%, cuestión que debe siempre ser objeto de especial atención para aliviar la carga de trabajo y que sea eficiente la labor que está realizando todo el equipo.

Las resoluciones dictadas por los Magistrados están correctamente fundamentadas y, en general, dentro del plazo. No obstante, en la actualidad, existen tres asuntos enjuiciados pendientes del dictado de la oportuna resolución (procedimientos abreviados números. 12/2021, 17/2021 y 52/2021).

4. Desde un punto de vista cualitativo, se observa en general un correcto trabajo y control por parte de los órganos rectores de la oficina judicial. Por ello, la Presidenta de la Sección, conjuntamente con la Letrada de la Administración de Justicia, dentro de sus competencias, seguirán



actuando lo necesario para seguimiento, impulso y revisión periódica de los asuntos, en especial los de mayor antigüedad.

El tiempo empleado en dictar resolución no siempre se ajusta los plazos legales en algunos asuntos turnados, que, en ocasiones, pueden obedecer a la complejidad del mismo. Se recomienda que, a la mayor brevedad, se dicten las resoluciones pendientes con fecha ya transcurrida en exceso de juicios vistos para sentencia.

Deben actualizarse algunos procedimientos pendientes de señalamiento para evitar dilaciones. Asimismo, destacar que, a veces, se suspende el día señalado para la deliberación por problemas procesales o subsanaciones imprescindibles (defectuoso testimonio de particulares, déficits informáticos, designación de profesionales de oficio, etc.) y se debe estar pendiente para no retrasar en exceso la posible resolución de fondo.

Se recomienda agilizar la tramitación procesal de la fase intermedia de los sumarios, cuyo examen revela que se alarga temporalmente, por lo que se aconseja valorar la conveniencia de que sea común para todas las partes el trámite para darse por instruidas del procedimiento, así el traslado para calificación provisional, que debe unificarse para las partes acusadoras y luego también para las partes acusadas, en vez de hacerlo de forma sucesiva.

Las causas con preso se señalan dentro de plazos razonables desde la fecha de entrada en Secretaría. Buen control sobre procedimientos en los que se han dictado órdenes de busca y captura o existen presos preventivos. Los partes de adelanto de los sumarios deben recordarse a los Juzgados de Instrucción correspondientes con periodicidad.

5. La plantilla, compuesta por funcionarios titulares e interinos, se considera muy ajustada para el nivel de ingreso de asuntos, por lo que debería ampliarse o reforzarse con otro tramitador procesal. De otro lado, no es muy estable y es necesario que la Consejería de Justicia cubra con prontitud las bajas y vacantes.

La cualificación y rendimiento de gran parte de los funcionarios resultan adecuados, al tiempo que el clima laboral, cumplimiento de horario y predisposición al trabajo parecen correctos. Se detectan relaciones correctas entre sus integrantes y la distribución de cometidos entre el personal destinado en el órgano parece adecuada. Se aprecia una buena dirección y control.

6. Debe mantenerse el esfuerzo en el tratamiento informático de los procedimientos para la plena implantación del expediente digital, así como la plena anotación e identificación de los acontecimientos de cada asunto en el sistema de gestión procesal.

Asimismo, al amparo de lo establecido en el artículo 18 del ROCSJ, aprobado por RD 1608/2005, es conveniente que el Secretario de Gobierno imparta las instrucciones oportunas para que los Juzgados, antes de remitir los asuntos a la Sección de la Audiencia Provincial, comprueben que las actuaciones están completas, así como el envío de las grabaciones audiovisuales, en su caso, junto a la necesidad de que los funcionarios cuiden la indexación y ordenación telemática de los procedimientos remitidos, vigilando por su cumplimiento los Letrados/as de cada Upad.

En efecto, visto el inconveniente de que la mayoría de los órganos judiciales no confeccionan correctamente el expediente digital, ni vienen bien identificados los acontecimientos ni bien indexado el procedimiento, sin olvidar que los Juzgados instructores todavía remiten en papel los



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

procedimientos, es imprescindible que por el Secretario de Gobierno y los respectivos Secretarios Coordinadores se impartan las oportunas instrucciones, circulares y, en su caso, apertura de seguimientos, recordando a los Letrados/as de la Administración de Justicia de los órganos unipersonales la necesidad de que impartan las instrucciones necesarias a los funcionarios a fin de que se cuide la indexación y ordenación telemática de los procedimientos remitidos, así como vigilen su cumplimiento.

Es imprescindible que la Fiscalía se integre en LEXNET, lo que está legalmente previsto, al objeto de recibir notificaciones y práctica de diligencias por vía telemática, única forma de completar el tránsito de los órganos judiciales al expediente digital.

Se valora la conveniencia de mejorar la gestión del expediente digital en ambas Secciones penales de la Audiencia Provincial y la fijación de un documento de buenas prácticas procesales al objeto de evitar devoluciones innecesarias de procedimientos a los órganos unipersonales. Por ello, el Secretario de Gobierno llevará a cabo la convocatoria de reunión con letrados de los órganos afectados del ámbito territorial de esta Audiencia Provincial.

7. El control y gestión de las cuentas-expedientes de consignaciones es correcto.

Particípese el presente acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario Coordinador Provincial y al órgano afectado, para su conocimiento y efectos procedentes.

2.8-VISITA DE INSPECCIÓN Nº 00000008/2023 realizada al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 1 DE PEÑARROYA-PUEBLONUEVO por el Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de CÓRDOBA el día 02/03/2023, sirviendo el órgano judicial la Juez titular Doña Mairena Martínez Moreno, y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, y por unanimidad, acuerda APROBAR LA VISITA DE INSPECCIÓN GIRADA.

La última visita de Inspección fue realizada por la Unidad Inspectora correspondiente a la Presidencia de la Audiencia Provincial, el 19 de Junio de 2018.

La plantilla del Juzgado está compuesta por 1 Juez, 1 Letrado de la Administración de Justicia, 1 funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, 2 funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, así como 1 funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial. Asimismo, cuenta con una funcionaria de refuerzo correspondiente al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. El clima de trabajo se califica por la Letrado de la Administración de Justicia como bueno con una plantilla trabajadora que ha asumido el trabajo y la colaboración en la elaboración del alarde y preparación de la inspección. El trabajo en la oficina judicial se estructura en dos secciones, una civil, y otra penal, entre las que distribuye la totalidad del personal del órgano, no siendo posible el reparto de una carga igualitaria del trabajo entre ellos dado el escaso número de funcionarios con que cuenta la plantilla fija de este Juzgado. Para este Juzgado se aprobó un refuerzo por las tardes en el año 2022, desde 14 de septiembre a 11 de Noviembre, se adelantó bastante, pero este periodo de refuerzo fue muy corto.

El Juzgado está ubicado en el edificio donde se halla la sede judicial de la localidad, sito en C/ Romero Robledo, s/n, se trata de un edificio de nueva construcción, con amplias instalaciones. En el mismo están situados los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción nº 1 y 2, Registro Civil,



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

Servicio Común de Notificaciones y Embargos, y Decanato. La Sala de Vistas se encuentra situada en la planta baja del edificio judicial y se utiliza de forma compartida con el Juzgado número dos de la localidad. En general, al ser un edificio moderno, la estructura del mismo se acomoda a las funciones propias que en él se desarrollan, de amplias dimensiones, que cuenta con estancias espaciosas y servicios diversos. El Juzgado objeto de la visita se encuentra en la planta segunda de dicho edificio. Dispone de un archivo propio. Se significa que teniendo este Juzgado atribuida competencia exclusiva en materia de violencia sobre la mujer, dadas las instalaciones del mismo, para preservar los derechos de la víctima y evitar su confrontación con el imputado, la misma es trasladada a la sala de espera del Servicio Común una vez presta declaración, donde continúa hasta que le es notificada la resolución del procedimiento.

Prestan los servicios de seguridad miembros de la Guardia Civil, disponiendo de arco detector.

Por otra parte, el mobiliario también se considera adecuado, aunque serían necesarios unos armarios para la colocación de los expedientes, que ya están solicitados. En el sótano del edificio donde se encuentra el archivo se hallan los expedientes antiguos del, piezas de convicción, etc. En relación a la sala de vistas se encuentra situada en la planta baja del edificio judicial y se utiliza de forma compartida con el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de esta localidad. Durante la semana que permanece de Guardia un Juzgado, el otro celebra los juicios señalados. En una sala anexa se ubica el sistema de videoconferencias a fin de que el Servicio Común practique las videoconferencias que sean de su competencia.

En cuanto al material informático en esta oficina Judicial se considera adecuado. Existen 8 ordenadores que funcionan correctamente y tienen mantenimiento adecuado, hay 4 impresoras que tienen funciones de escanear y envió de fax, que funcionan correctamente. Además, se dispone de un fotocopidora de gran capacidad que funciona de modo adecuado y tiene mantenimiento por servicio externo. En cuanto a la utilización y acceso a las consultas telemáticas del Punto Neutro Judicial (Agencia Estatal Tributaria, Dirección General de Tráfico, DNI) y las de la Tesorería General de la Seguridad Social se informa que la averiguación patrimonial se realiza por los tramitadores y el gestor. Si se trata de embargos de cuentas lo realiza el Letrado de la Administración de Justicia. Si se trata de embargos A.E.A.T se realizan por LAJ. Respecto de la página del S.I.R.A.J, sólo tiene acceso para consulta y anotaciones el Letrado de la administración de Justicia, siendo este quien practica Anotación y cancelación en S.I.R.A.J de todas las órdenes de protección acordadas tanto en procedimientos de violencia doméstica como de género. La utilización de la aplicación informática de gestión procesal ADRIANO, así como de los modelos de tramitación en ella ubicados, es la regla general de comportamiento de todos los integrantes de la plantilla, acudiéndose de forma ocasional y extraordinaria a la utilización de modelos de texto libre, en aquellos casos en que se produce una caída del sistema informático u otras circunstancias excepcionales. Se observa y se cumple por el personal con el Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia.

Existen libros de registro manuales de Detenidos y Presos así como de los Efectos Intervenidos o en depósito. Los libros de registro, se pueden obtener informáticamente pero no se



imprimen, debido al gran gasto de papel que ocasionan. Las consultas se suelen hacer individualmente por procedimiento concreto. Se llevan informáticamente a través de la aplicación Adriano, y existen dos accesos, uno de asuntos civiles y otro de asuntos penales.

La Cuenta de Depósitos y Consignaciones está abierta en Banco Santander con el número 1478. El saldo, a la fecha 1 de marzo de 2023, es de 1.311.504,72 euros. El importe de los mandamientos de devolución/transferencias librados y no cargados en cuenta es de 13.022,43 euros, en un total de 26 mandamientos pendientes. Asimismo se hace constar que al día previo de esta visita, 1 de Marzo, en la posición global existe un total de expedientes activos de 315 con el consiguiente estado: Ejecutadas 1, Operativas 153, Abiertas 161, creadas 370, concluidas 498, canceladas 3100, bloqueadas 0. El control de la misma lo obtiene a través de la aplicación de Santander, en donde puede comprobar fácilmente la situación de cada uno de los asientos vivos que en cada momento se mantienen en dicha cuenta. La gestión de los movimientos se realiza con normalidad y son moderadamente razonables los tiempos de demora entre el ingreso en la cuenta y su entrega a quien corresponda, teniendo en cuenta las vicisitudes de las ejecutorias y otros procedimientos en los que dichos ingresos se producen. Por otra parte, en cuanto a la forma de llevanza, se informa que por el Letrado de la Administración de Justicia se procede de manera regular a la impresión de los nuevos ingresos, se comprueba cada uno de ellos a través de la aplicación y se examina el asunto a través de "Adriano", o viendo el propio asunto. Tras ello, si procede, se dispone de la suma correspondiente, y en otro caso, se mantiene hasta que pueda disponerse. La tramitación de la Diligencia de Ordenación a través de la cual se acuerda el destino del ingreso se realiza por el Letrado de la Administración de Justicia.

Lo primero que se ha de indicar para hacer una valoración del estado de la pendencia que hay en el juzgado y, por ende, de su funcionamiento, es que tanto en materia civil, como en penal soporta un nivel de ingreso de asuntos que se halla sensiblemente a la baja dentro de los módulos referenciales que el Consejo General del Poder Judicial tiene establecidos con carácter orientativo para este tipo de órganos mixtos, que como es sabido se encuentran fijados en los 680 asuntos civiles (incluida ejecución) y los 1000 asuntos penales (excluida ejecución). Y es que el juzgado ha tenido un ingreso de media anual, según última Memoria de Actividades y Funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla de 523 asuntos civiles y 630 penales. La escasez de plantilla, existiendo periodos de tiempo sin cubrir las bajas, con negociados paralizados, alguno hasta seis meses, y la falta de estabilidad de la misma en los últimos años, hace que en general el Juzgado mantenga una pendencia sensiblemente elevada en materia penal, siendo especialmente significativo el número de Diligencias Previas (399) y el de Procedimientos Abreviados (110), si bien resulta razonable, en cambio, el número de Diligencias Urgentes (13), Ejecutorias (71) y el de Delitos Leves (25).

En el ámbito civil el número de procedimientos en ejecución es también llamativo por elevado, computándose 585 asuntos de jurisdicción contenciosa pendientes hasta sentencia, más 589 en ejecución, lo que resultan cifras no acordes con el volumen de entrada de asuntos. En relación con los escritos pendientes de proveer las cifras son también elevadas, de tal manera que hay un total de 662, de los que 349 corresponden a fase declarativa o de instrucción, y 313 a fase de ejecución,



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

siendo el escrito más antiguo pendiente de proveer en civil de 15 de septiembre de 2022 y en Penal de 14 de Enero de 2022.

Por otro lado, se ha de tener en cuenta que el Juzgado tiene asignada en exclusividad la competencia en materia de Violencia sobre la Mujer, competencia que ocasiona los consabidos trastornos en la tramitación de todos los procedimientos del Juzgado incluidos los declarativos civiles y ejecuciones.

Teniendo en cuenta el nivel de ingreso de asuntos al que antes se ha hecho referencia y la tasa de pendencia, puede afirmarse que el Juzgado inspeccionado presenta un funcionamiento defectuoso en el ámbito civil, pero claramente deficiente, con evidentes carencias de impulso procesal, en el penal.

No es necesario por el momento, adoptar ninguna medida especial de seguimiento. Sí debe insistirse en la necesidad de que se mantenga el refuerzo existente del Tramitador o la creación de la correspondiente plaza, y, además, la ampliación de la plantilla en una plaza más de Gestor Procesal para que haya dos negociados debidamente equilibrados, uno para civil y otro para penal. Repárese en que la plantilla teórica del juzgado está compuesta por 1 Gestor, 2 Tramitadores y 1 Auxilio. Lo anterior ya se solicitó en la inspección que se hiciese hace cinco años, petición que cayó en saco roto. E, insistimos de nuevo, la demora en la provisión de bajas y vacantes ha contribuido, asimismo, a la acumulación de asuntos pendientes. Esto, desde luego, no es nada nuevo, sino un mal endémico, sólo responsabilidad de la Administración prestacional en materia de funcionarios.

La dotación de la plantilla de 1 Gestor, dos tramitadores y un auxilio se estima insuficiente para la tramitación de los procedimientos que tiene encomendados en un partido Judicial con la gran cantidad de municipios que lo forman, que unido a la asunción de competencias como Juzgado de Violencia sobre la Mujer explica el grave retraso que sufre sobre todo en la tramitación civil con una ingente número de demandas pendientes de incoar y la pendencia en materia penal.

Todo ello, se ha visto incrementado ante el retraso que se ha producido al cubrirse las vacantes, que ha supuesto una acumulación de asuntos pendientes.

La falta de cobertura de la plaza de la Gestora Procesal, encargada de la tramitación de los declarativos civiles está ocasionando un grave trastorno en la marcha del juzgado.

Sería necesario dotar la plantilla del Juzgado con un Gestor para así poder realizar una organización del trabajo con dos negociados compuestos de Gestor y Tramitador y una mejor distribución de la guardia y la consolidación del refuerzo de tramitación. Todo ello máxime cuando existe Juzgados de Paz del partido Judicial dotados con un gestor y un auxilio, Juzgados de Paz que sólo pueden realizar actos de comunicación. En todo caso, sería deseable una mayor rapidez en la cobertura de las plazas en caso de enfermedad, traslado, comisiones de servicio etc.

Se pone de manifiesto el mal funcionamiento del JUZGADO DE PAZ DE BELMEZ, correspondiente al Partido Judicial, que afecta obviamente a la realización de actos de comunicación a realizar en los distintos procesos que conoce este órgano judicial.

Particípese el presente acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario Coordinador Provincial y al órgano afectado, para su conocimiento y efectos procedentes.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

2.9- VISITA DE INSPECCIÓN Nº 00000009/2023, realizada a la SECCIÓN Nº 7 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA CON SEDE EN MELILLA por el Excmo. Sr. Presidente del TSJ de Andalucía, Ceuta y Melilla el día 23/03/2023, sirviendo el órgano judicial el Ilmo. Sr. Presidente de la Sección Séptima Don Federico Morales González, y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, y por unanimidad, acuerda APROBAR LA VISITA DE INSPECCIÓN GIRADA.

□

La última visita de Inspección fue realizada por el Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla el 16 de febrero de 2016, sirviendo el órgano judicial como Presidente Don Federico Morales González.

La plantilla de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede en Melilla, se compone de 3 Magistrados, 1 Letrada de la Administración de Justicia, 2 Gestores Procesales, 2 Tramitadores Procesales. En este órgano no existe personal interino en este momento. En los últimos tres años no se han producido ceses que generen vacantes descubiertas, dado que aunque el Tramitador Procesal titular D. _____ se encuentra en situación de licencia por enfermedad desde marzo de 2020, no ha cesado como titular de la plaza. Desde su baja por enfermedad hasta el 09/07/2020 que se incorporó _____, la plaza estuvo sin cubrir. Por su parte, D^a _____ cubre una plaza de Gestión Procesal a la que se adscribió una Gestora titular en excedencia por desempeño del puesto de LAJ.

La plantilla de esta Sección 7^a, antes de la entrada en funcionamiento de la Nueva Oficina Judicial, estaba formada por 3 Gestores, 6 Tramitadores y 2 Auxilios Judiciales.

Actualmente están destinados 2 Gestores y 2 Tramitadores, de los cuales un Gestor y un Tramitador proceden de la adscripción realizada con motivo de la reordenación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (R.P.T.) derivada de la no entrada en funcionamiento del SCOP (Servicio Común de Ordenación del Procedimiento).

La dotación actual de personal se considera correcta y adecuada a las necesidades de este órgano.

La tramitación de los juicios orales (rollos de Apelación de Procedimientos Ordinarios, Abreviados y Jurados) y los recursos de apelación ante el TSJA así como los recursos extraordinarios (casación, extraordinario por infracción procesal y revisión) se han asignado a las dos Gestoras Procesales.

Ambas Tramitadoras tienen encomendados los Rollos de Apelación Penales y Civiles. D^a _____ tiene asignadas además las Ejecutorias en los trámites que se realizan por la Upad. Entre ambas llevan los exhortos, los expedientes gubernativos, y la recepción y sellado de entrada de escritos y asuntos.

La complejidad de los juicios y la variedad de actuaciones a practicar en los rollos de P. Abreviado, P. Ordinario y Juicios con Jurado, este es el negociado que se ha asignado a las Gestoras, las cuales lo llevan por números, una los pares y la otra los impares.

Respecto a la plantilla que actualmente se encarga de la tramitación de las ejecutorias de la Sección de la Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla, está atribuida a una Tramitadora y



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

a la Gestora Jefe de la Sección Penal del SCEJ y siendo responsable de la dirección procesal la Letrada de la Administración de Justicia, Jefe de la Sección Penal del SCEJ, Doña Clara Peinado Herreros. La asignación de los trámites de competencia de la Upad en las Ejecutorias a la Tramitadora D^a se debe a la extensa experiencia previa de esta funcionaria en ejecución penal, al ser este el negociado que tenía asignado antes de la nueva Oficina Judicial, así como en su destino anterior. Uno de los grandes problemas que ha tenido la Sección Penal de Ejecución desde su implantación ha sido la falta de estabilidad del personal. Las bajas de los funcionarios son una constante, así como los traslados y nuevas incorporaciones, lo que hace muy difícil la buena marcha de esta sección penal. A principios de diciembre han tomado posesión seis funcionarios nuevos, lo que ha supuesto un cambio muy importante de personal, cesando funcionarios con mucha experiencia y tomando posesión funcionarios que no habían trabajado nunca, con las dificultades que ello conlleva hasta que dichos funcionarios adquieran experiencia. Otro aspecto negativo es la ausencia prolongada y reiterada de algunos de los funcionarios durante 8 días, para prestar servicio en el Juzgado de Guardia, que resulta perjudicial para la buena marcha del Servicio Común de Ejecución, toda vez que algunos de los funcionarios destinados en el Servicio tiene código de guardia. Por todo ello se ha interesado en varias ocasiones del Ministerio de Justicia la necesidad de actualizar las relaciones de puestos de trabajo previstas en la Orden JUS 1740/210.

En cuanto a los recursos, estos se asignan por números a las dos Tramitadoras, a una los pares y a la otra los impares. En caso de vacantes o bajas, mientras se tramita su cobertura, así como también durante las vacaciones o permisos de cualquiera de los funcionarios de esta oficina, los demás asumen los asuntos del negociado afectado, repartiéndose el trabajo entre todos de la manera más equitativa posible. No obstante, los recursos de apelación penales del funcionario ausente preferentemente se asumen por el otro Tramitador, y los rollos de P. Ordinario, P. Abreviado o T. Jurado por la otra Gestora, repartiéndose las ejecutorias entre todos ellos a partes iguales.

En cuanto a las relaciones del Servicio Común de Ejecución y la Sección 7^a de la Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla, están perfectamente regularizadas y el tránsito de las ejecutorias entre la UPAD y el SCEJ fluye con normalidad.

Con ocasión de la entrada en vigor de la L.O. 10/2022, del 6 de septiembre de garantía integral de la libertad sexual, se ha procedido a la revisión hasta el día de la fecha de 6 ejecutorias.

Hay que destacar, como particularidad de las ejecutorias de este Servicio, la frecuencia de órdenes de buscas y capturas, en ocasiones, de ámbito internacional, lo que provoca que el número de reaperturas sea mayor, en ocasiones, que el de archivos. Por parte del Servicio Común de Ejecución se tiene una absoluta voluntad de colaboración constante con las UPADs par conseguir una mayor eficiencia en el trabajo y mayor celeridad en el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

Las instalaciones, medios técnicos y mobiliario son adecuados a las necesidades de esta Sección 7^a, que dispone de una Sala de Vistas de modo exclusivo, situada en la misma planta, aunque ocasionalmente es utilizada por otros órganos o por los Colegios de Abogados, Procuradores o Graduados sociales para algún acto, si coincide en días en que no tengamos señalamientos.

Los medios informáticos de que dispone el órgano judicial son ordenadores HP con dos pantallas Acer en cada puesto de trabajo. Los despachos de los Magistrados y de la Letrada de



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

Justicia cuentan con sendas impresoras láser y el despacho del Presidente además con un escáner.

La oficina judicial dispone, además, de dos impresoras láser, un fax y dos escáneres.

El sistema de grabación o/y reproducción utiliza el programa E-fidelius, que no suele generar incidencias. Las reservas se realizan por el personal de la oficina a través de la Agenda de Señalamientos, las grabaciones son autorizadas por la Letrada de Justicia con su firma digital y en la Sala de Vistas se gestiona la grabación por el Auxilio Judicial dependiente del Servicio Común General.

El sistema de videoconferencia, que es manejado en la Sala de Vistas por el Auxilio Judicial dependiente del Servicio Común General, también funciona correctamente, sin que se tenga conocimiento de incidencias destacables.

El Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al Servicio de la Administración de Justicia (Instrucción 2/2003 del C.G.P.J, de 26 de febrero de 2003) se observa y se cumple escrupulosamente por parte del personal de esta oficina. Así, cualquier consulta que implique tratamiento de datos personales viene fundamentada en una resolución anterior que la ordene.

En la Oficina Judicial de esta Sección 7ª se da cumplimiento a las Instrucciones del Secretario General de la Administración de Justicia números 4/2009, y 5/2010 sobre determinadas cuestiones relativas a la organización y funcionamiento del sistema de registros de apoyo a la Administración de Justicia.

En cuanto a la Instrucción nº 4/2009, relativa al uso integral de las aplicaciones informáticas en las Oficinas Judiciales, cabe señalar que la aplicación Minerva plantea un problema al incoar las piezas separadas de Jura de cuentas (que mantienen, por tanto, el mismo NIG del procedimiento principal) porque dentro de la pieza de autos creada no es posible acceder a ningún modelo ni a tramitación guiada de ninguna clase. Así, en las Juras de Cuenta nos vemos obligados a usar el “Trámite Libre” en todo momento, lo que ralentiza su tramitación, que de por sí debería resultar muy rápida.

En cuanto a la Instrucción nº 5/2010, relativa a la utilización de los servicios de consulta de datos personales y patrimoniales ofrecidos por el Punto Neutro Judicial, debe señalarse que no es habitual tener que realizar averiguaciones patrimoniales ni domiciliarias en esta oficina. En caso de ser precisa, se realiza por las funcionarias de esta UPAD y siempre previa resolución que lo acuerde.

Los registros judiciales integrados en el aplicativo SIRAJ2 se utilizan por todos los funcionarios de la oficina, tanto para anotación como en modo consulta, correspondiendo a la Letrada de la Administración de Justicia verificar la corrección de los datos y así como el volcado de las sentencias firmes causando las correspondientes notas de condena.

En cuanto a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales, no están autorizados a los funcionarios de la oficina, dado que hay pocos movimientos en la cuenta y no tienen carácter urgente, por lo que los realiza directamente la Letrada.

En esta UPAD se observa el cumplimiento a la Instrucción 1/2011, de 31 de marzo, de la OFICINA JUDICIAL General de la Administración de Justicia, sobre el funcionamiento de las unidades procesales de apoyo directo a jueces y magistrados y su actuación coordinada con los servicios comunes procesales. También se observa la aplicación del Reglamento de



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

Homogeneización del CGPJ 2/2010, pudiendo destacarse como aspectos más reseñables en cuanto a la transferencia y registro de procedimientos:

- Que los Sumarios se registran por el Servicio Común General a la vista del parte de incoación que el Juzgado de Instrucción dirige a esta Sala, a fin de que por esta UPAD se pueda incoar el correspondiente Rollo de Procedimiento Ordinario. Como consecuencia de ello, una vez concluidos los autos del procedimiento ordinario, dicho Servicio ha adoptado la solución de registrarlos “como escrito”, a fin de que quede constancia de su elevación a la Sala para enjuiciamiento. Esta forma de proceder es la solución adoptada por la mayoría de Audiencias con Nueva Oficina Judicial implantada, y se ha considerado la más adecuada para evitar un doble registro del mismo asunto.

En cuanto a los Expedientes Gubernativos, a pesar de estar previsto en las pestañas del Sistema de Gestión procesal Minerva, no podemos incoarlos en este mismo órgano, por lo que se ha abierto una incidencia al CAU, sin que se haya resuelto positivamente al haberse alegado imposibilidad. Por tanto, la única forma de que queden integrados en el sistema de Gestión Procesal Minerva es que se registren por el Servicio Común General, para su posterior incoación en esta Upad. Sin embargo, la circunstancia de que computen como Asuntos Repartidos hace que resulte inconveniente proceder de este modo con todos ellos, por lo que prácticamente ha quedado restringido el registro por parte del SCG a los relativos a abstenciones y recusaciones. El resto sólo figura en el Libro (en formato papel) que se lleva en esta Oficina.

Los exhortos, que son muy escasos, desde la entrada en funcionamiento de la NOJ el día 4 de junio de 2014, se aceptan por la Upad de esta Sección, pero en la mayoría de los casos no corresponde cumplimentarlos a esta Sección 7ª, por lo que si se trata de videoconferencias o citaciones se remiten al Servicio Común General y si son relativos a Ejecutorias al Servicio Común de Ejecución, dando cuenta al órgano exhortante.

En relación a los medios informáticos, el Servicio Común de Ejecución dispone de pc con doble pantalla para cada funcionario y una tablet Surface para la LAJ directora del Servicio Común de Ejecución y otra para la LAJ Jefe de la Sección Penal de Ejecución.

Las aplicaciones informáticas Minerva, Atenea, SIRAJ2, Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales, Punto Neutro Judicial, Lexnet, Acceda, se llevan con normalidad, dándose cumplimiento de las Instrucciones y Circulares, tanto del Secretario General para la Innovación y Calidad de la Oficina Judicial y Fiscal, como las Instrucciones, Circulares y Protocolos de la Secretaría de Gobierno de Melilla.

En cuanto a la digitalización, los procedimientos digitales se encuentran bien estructurados. A partir del 1 de enero de 2018 el Legajo de originales se lleva de forma correcta, integrándose sólo y exclusivamente por documentos originales, pero algunos por el trasiego de las UPADs se le incorporan documentos y fotocopias que solamente deben estar digitalizados. Ha sido necesario recordar en varias ocasiones a los LAJs de esta sede judicial, el cumplimiento de la Instrucción número 1/2017 de la Secretaría de Gobierno de Melilla.

Ha de señalarse igualmente en relación con los constantes cambios de personal, los problemas en la adjudicación a los funcionarios de las claves necesarias para desarrollar su trabajo en las distintas aplicaciones (reubicación). En algunos casos, se ha tardado en proporcionar las



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

claves por parte del CAU más de un mes, situación que ya ha sido comunicada en varias ocasiones al Ministerio de Justicia.

Hay libros de registro manuales e informáticos.

La cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Upad es compartida con el Servicio Común de Ejecución, que realiza la mayoría de los movimientos. El saldo de la misma en la fecha 20 de marzo de 2023 asciende a 1.043.061,25 euros y 77.570 Dirhams. El número total de procedimientos con fondos es de 97 expedientes.

Acerca del modo habitual de proceder en la llevanza de la cuenta, la misma es revisada todos los días a fin de dar el destino correspondiente a los diferentes ingresos que se puedan haber producido tanto si se trata de principal, como recursos o cualquier otro tipo de ingreso, asimismo se revisan los traspasos y transferencias recibidas. Una vez finalizado un expediente en la Upad, se comprueba que exista o no dinero en la cuenta y en su caso se expide el correspondiente mandamiento de pago o se realiza la transferencia o traspaso oportuno en su caso. Existe una continua comunicación con los compañeros tanto del SCEJ civil como penal, y si existe alguna cantidad que deba traspasarse a dichos órganos se realiza a la mayor brevedad posible.

Se da cumplimiento a toda la normativa aplicable, tanto del Real Decreto 467/2006, como del Real Decreto 1608/2005 como del resto de la normativa relativa a la CDCJ, se adjudican al Estado tal como dispone el Art. 535 de la LE Criminal aquellas fianzas de los acusados que no acuden cuando son llamados. Se procede de forma regular a la devolución al interesado de los depósitos para recurrir en el caso de estimación total o parcial o en caso de su desestimación a su traspaso a la Cuenta 9900 destinataria de los recursos desestimados. También se ha ido procediendo al traspaso a la cuenta 5555 de las multas, a la 7777 en el caso de estupefacientes y a la 9999 en el supuesto de que se trate de fondos abandonados.

Los funcionarios de este órgano informan a las personas interesadas sobre los requisitos necesarios para hacer cualquier tipo de ingreso o transferencia. De forma habitual se suele requerir a las partes a fin de que aporten una cuenta bancaria y acrediten su titularidad para así proceder a la correspondiente transferencia a la misma y todo ello para reducir la expedición de mandamientos de pago.

Los boletines estadísticos y los datos recogidos en el Acta de la Inspección arrojan una pendencia de 12 rollos civiles y 21 rollos de recursos civiles, 3 sumarios, 4 procedimientos abreviados, 23 recursos penales, 48 ejecutorias en trámite y 1 exhorto pendiente de cumplimentar.

De todo lo anterior se puede concluir:

1. La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga soporta, en términos generales, una carga de trabajo razonable que en los últimos años no supera el módulo referencial de entrada de asuntos para las Secciones mixtas de Audiencias Provinciales, que gira en torno a 232-278 asuntos por Magistrado y año.

2. Del estudio detallado de las anteriores cifras de la presente inspección resulta que en su doble vertiente civil y penal la situación del órgano jurisdiccional inspeccionado se puede considerar correcta y satisfactoria.

Desde un punto de vista cualitativo, se observa un correcto trabajo y control por parte de los



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

órganos rectores de la oficina judicial, lo que aconseja continuar en la línea de seguimiento y revisión periódica de los asuntos.

3. Se aprecia un buen control en la oficina a la hora de localizar los procedimientos que se requieren para su examen, que son entregados con rapidez y conocimiento del estado procesal en que se encuentran.

Las causas con preso están controladas y se señalan dentro de plazos razonables. Buen control sobre sumarios y procedimientos abreviados con especial cuidado en los que se han dictado órdenes de busca y captura o existen presos preventivos. Los partes de adelanto de los sumarios se recuerdan a los Juzgados de Instrucción correspondientes.

Las resoluciones dictadas por los Magistrados están correctamente fundamentadas y resuelven cada uno de los puntos o extremos de debate.

4. Se detectan relaciones correctas entre los integrantes de la oficina. Buen clima laboral, entendimiento y distribución del trabajo.

5. Por la Letrada de la Admón. de Justicia se adoptarán las medidas para la informatización de los libros registros y se seguirá actuando en orden a la actualización y control de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones, tal y como, correctamente, se hace en la actualidad.

6. Respecto al cumplimiento de lo establecido en el apartado 6.9 de la Instrucción 2/2003, de 26 de febrero, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, sobre Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al Servicio de la Administración de Justicia, se verifica que es posible comprobar fácilmente el estado en que se encuentra cada asunto. Se puede tener también acceso al estado de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones.

Particípese el presente acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario Coordinador Provincial y al órgano afectado, para su conocimiento y efectos procedentes.

2.10- VISITA DE INSPECCIÓN Nº 00000010/2023, realizada a la SECCIÓN Nº 1 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE JAÉN por el Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla el día 15/03/2023, sirviendo el órgano judicial como Presidente Don Rafael Morales Ortega, y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, y por unanimidad, acuerda APROBAR LA VISITA DE INSPECCIÓN GIRADA.

La última visita de Inspección fue realizada por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla con fecha 17 de febrero de 2017, sirviendo el órgano judicial como Presidenta Doña Elena Arias-Salgado Robsy.

La plantilla la integran cinco Magistrados encabezados por el Presidente, un Letrado de la Administración de Justicia, dos funcionarias del Cuerpo de Gestión Procesal, seis funcionarios/as del Cuerpo de Tramitación Procesal y dos funcionarios/as del Cuerpo de Auxilio Judicial. Por Real Decreto 954/2022, de 15 de noviembre, ha sido creada una nueva plaza de magistrado, si bien su entrada en funcionamiento y operatividad práctica no se verá reflejada hasta la siguiente anualidad.

Presidente D. Rafael Morales Ortega (posesión 25/01/2005 y como Presidente el 27/02/2018).



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

Magistrados/as D. Antonio Carrascosa González (posesión 10/12/19), D^a Mónica Carviá Ponsaillé (posesión 18/06/20), D^a Nuria Osuna Cimiano (posesión 24/08/21), D. Juan Carlos Merenciano Aguirre (posesión febrero 2023). Asimismo cuenta con el Magistrado de refuerzo D. Blas Regidor Martínez (JAT) desde el 15/12/22.

Letrado: D. Ángel Luis Luque Navarro (posesión 22/01/2019). Gestoras Procesales: D^a (posesión 10/11/10), D^a (posesión 05/10/2020).

Tramitadoras procesales: D^a (posesión 26/11/2007), D^a (posesión 10/10/2009), D^a (posesión 22/02/20), D^e (posesión 19/03/22), D^a (posesión 11/05/22), D^a (posesión 27/02/23). Auxilio judicial: D. (posesión 27/10/2011), D^a (posesión 26/02/20).

La plantilla de funcionarios se considera ajustada por el momento a la carga de trabajo de la Sección.

La oficina judicial está dividida en dos negociados distintos, una de números pares y otra de impares. Los asuntos previamente registrados se reparten de forma equitativa en los dos negociados compuesto cada uno de ellos por la mitad de la plantilla y éste sistema permite por una parte una mejor distribución del trabajo y por otra la localización rápida de los expedientes y del funcionario encargado.

En los casos de vacante, permiso, licencias u otras, el resto de la plantilla asume el trabajo del funcionario que se encuentre en dicha situación.

El letrado de la administración de justicia lleva al frente de este órgano desde el 22 de enero del año 2019 y ha realizado una correcta labor, con capacidad organizativa y preparación profesional y jurídica, solventando con eficacia la cobertura del servicio, designando especialmente al que corresponda en transcripción de minutas o resoluciones para la firma y notificación aunque no se encuentre el funcionario que lleve el asunto .

El ambiente laboral, tanto entre los funcionarios como con el equipo rector, LAJ y Magistrados, es bueno y se puede considerar que la actividad desplegada es diligente, con una labor de continuo impulso de los asuntos y actualización del trabajo.

El LAJ controla los procedimientos registrados en este órgano judicial; además, se efectúan puntualmente todas las anotaciones y controles, realiza igualmente minutas de todo tipo, incluidas notas de preparación de recursos de casación, que requieren de una evidente preparación jurídica. A nivel de expediente digital, realiza, e forma minuciosa y detallada, la labor de comprobación de los procedimientos que llegan al órgano judicial.

En general las instalaciones de esta Sección son bastante aceptables. Únicamente el espacio destinado para las funcionarias resulta algo estrecho. Los Magistrados disponen de despacho independiente, así como el LAJ.

Al estar la Sección en la planta superior, la iluminación natural es más que suficiente. Igualmente la iluminación artificial (remodelada hace unos dos años) es correcta, así como la calefacción y refrigeración. El mobiliario está en buen estado, así como los armarios archivadores de puertas correderas de estupenda funcionalidad e instalados hace un año. La Sala de Vista es única,



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

siendo compartida con las dos Secciones Penales conforme a un cuadrante de disponibilidad establecido anualmente.

La informatización es completa, disponiendo tanto los magistrados, como letrado y funcionarias de doble pantalla de ordenador, y número suficiente de impresoras de gran capacidad, tres fotocopadoras, fax, y destructora de documentos. La Sala de Vistas cuenta con sistema de grabación de vistas y para videoconferencias.

Respecto a la utilización y acceso a la aplicaciones telemáticas del Punto Neutro Judicial, las realiza exclusivamente el Letrado, no estando autorizada ni delegada ninguna funcionaria. Igualmente la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales y la publicación edictal telemática en el BOE es llevada de manera exclusiva por el Letrado.

La Instrucción 2/2003 es cumplida por todos los integrantes de esta Sección, así como las Instrucciones del Secretario General de la Administración de Justicia números 4/2009 y 5/2010.

Se da cumplimiento del Reglamento de Homogeneización del CGPJ 2/2010, fundamentalmente en cuanto a la transferencia y registro de procedimientos.

El Servicio Común de Registro y Reparto existente en esta Sección, realiza sus funciones de manera rigurosa, conforme al programa informático implantado, realizando todo lo relativo al registro de asuntos en el sistema procesal de gestión, tanto para esta Sección Civil, como para las dos Secciones Penales de esta Audiencia, de manera que quedan integrados en el sistema procesal fidedignamente todos los asuntos que se reciben.

En cuanto al cumplimiento de lo establecido en el apartado 6.9 de la Instrucción 2/2003, de 26 de febrero, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, sobre Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al Servicio de la Administración de Justicia, se aprecia que es posible comprobar fácilmente el estado en que se encuentra cada asunto en base a las posibilidades que ofrece el Sistema Adriano. Se puede tener también acceso al estado de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones. Los asuntos se reciben con los intervinientes y profesionales que los asisten o representan ya registrados por la Oficina de Registro y Reparto, por lo que para proceder a su aceptación utilizan la Aplicación de Itinerarios "Nautius".

El total de asuntos registrados en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Jaén por la Aplicación informática Adriano es hasta el 17 de febrero de 31.830. El número de asuntos registrados en la citada Aplicación desde comienzos del año 2022 es de 2.817 asuntos. Respecto a los acontecimientos o trámites realizados a través de la Aplicación informática el total se eleva a 389.113 acontecimientos, de los cuales 42.825 corresponden a acontecimientos registrados desde el inicio del año 2021 hasta la fecha, donde el desglose por jurisdicciones es de 42.228 civiles, 556 mercantiles y 41 penales. En relación con la elaboración de las resoluciones judiciales integradas en la Aplicación informática de gestión procesal, figuran registradas un total de 26.819 resoluciones judiciales, de las cuales 13.325 son sentencias civiles, 766 mercantiles y 3.975 penales, 4.605 son autos definitivos civiles, 83 mercantiles y 3.441 penales y 593 son decretos definitivos civiles y 31 mercantiles. Respecto al volumen de resoluciones judiciales registradas desde comienzos de 2022 hasta la fecha, figuran un total de 1.529 sentencias civiles y 15 penales, 493 autos definitivos civiles, 8 mercantiles y 2 penales y 151 decretos definitivos civiles y 1 penal. El reflejo de la situación de los



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

procedimientos de forma que se encuentre constantemente actualizada es de 2.078 actualizaciones manuales de fases y estados de las que 136 corresponden desde comienzos de 2022 hasta la fecha. Hay 5.324 procedimientos pendientes y 4.294 procedimientos inactivos en los que no se ha realizado ningún acontecimiento o trámite en Adriano en los seis meses anteriores a la fecha de la consulta.

En lo relativo al entorno telemático e implantación del expediente digital, como se ha dicho, el letrado vela por la tramitación digital de todos los procedimientos y sigue las pautas establecidas al efecto en el entorno digital con cumplimiento de las instrucciones dictadas por el Secretario General de la Administración de justicia y este Secretario de gobierno.

El personal cumple el Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al Servicio de la Administración de Justicia, usando adecuadamente los sistemas y programas informáticos, incorporándose todas las resoluciones judiciales en el Programa Adriano. También se procede a la notificación de las resoluciones dictadas a través del sistema informático LEXNET y la descarga de escritos presentados por las partes al programa Adriano y su posterior dación de cuenta o para dictar las resoluciones que correspondan.

La supervisión de la incorporación de datos, así como el mantenimiento de actualización de las fases y estados procesales, se realiza correctamente por el Sr. letrado, dando las órdenes e instrucciones precisas a los funcionarios judiciales. Por otro lado, el control en el impulso y la presentación de los escritos la realiza personalmente el letrado a diario, de forma correcta.

No obstante lo expuesto, no podemos ignorar que este órgano recibe procedimientos de otros órganos al tratarse de la segunda instancia, lo que le sirve, por un lado, para poder corregir en determinados supuestos deficiencias procedentes de esos expedientes, con la devolución a los órganos correspondientes para la subsanación, y en otros aspectos trabajar para la mejora de estos expedientes en el propio órgano.

Los órganos unipersonales itineran todos los asuntos por Nautius y se puede comprobar que la mayoría de los Juzgados de primera instancia tramitan íntegramente y de forma completa el expediente digital; sin embargo, si bien la mayoría remiten los procedimientos a través del expediente digital y debidamente consolidados para su conformación como expediente digital a todos los efectos legales, en algunos supuestos concretos se detecta que el procedimiento fue remitido en soporte digital CD, originándose dificultades al magistrado a la hora de su visualización, por lo que se sugiere que, si detecta que existe algún órgano que no sigue las pautas establecidas en el envío y seguimiento del expediente digital, conforme a lo establecido en el documento de buenas prácticas en el uso del expediente digital en Andalucía, lo pongan en comunicación del Secretario Coordinador al objeto de que se realice las indicaciones y la inspección correspondiente.

Aún así, se observa que no existen diligencias en el expediente digital que aparecen con la denominación de texto libre. En este aspecto ha existido un importante impulso y labor del letrado en insistir e impartir instrucciones necesarias a los funcionarios a fin de que se cuide la indexación y ordenación telemática de los procedimientos remitidos, especialmente cuando no se remiten en papel.

En cualquier caso, los magistrados refieren un aceptable nivel de satisfacción en la visualización de los expedientes digitales en el ámbito civil y se encuentran adaptados a su uso y



estudio.

Es importante reseñar que en este momento se está realizando en Jaén capital la implantación como proyecto piloto en el ámbito de la jurisdicción civil del nuevo sistema de gestión procesal@Adriano, que está originando serias incidencias en la remisión de los expedientes por parte de los Juzgados de primera instancia.

Únicamente se utilizan como “Libros manuales” el de Sentencias, el de Autos y el de Decretos, para facilitar la imposición del número que corresponda a cada resolución.

Totalmente actualizada, sin que se observe disfunción alguna. La cuenta depósitos y consignaciones en el día de hoy día de la inspección un saldo de 26.579,26 € cuyas últimas operaciones en los últimos cinco días, es de 17 ingresos por importe de 24.598,57, como operación pendiente una por importe de 2011,09 € teniendo un total de 178 cuentas activas de las cuales una se ha ejecutado, seis están operativas y abiertas un total de 171, comprobándose que han sido concluidas 1458 cuentas y canceladas 4099, por lo que se puede observar que esta cuenta de consignaciones tiene relativo movimiento, pero su llevanza es ágil y proporcionada a la carga de trabajo que este letrado ejerce en su oficina judicial, la misma se lleva de forma ágil e inmediata; igualmente aparece un aviso de que tiene cuentas de expedientes con saldo cero y antigüedad de más de un año, se trata de cuentas que no se pueden evidentemente cancelar por existir rollos de apelación, en los cuales puede producirse el ingreso de cantidades a cuenta de las posibles tasaciones de costas, que puedan acontecer en el futuro de ese procedimiento, por lo que no procede su cancelación manual.

Podemos concluir que se trata de una cuenta que se trabaja de forma constante y diaria, que tiene pocos ingresos, pero mucha actividad diaria y un seguimiento riguroso, por tanto, una cuenta bien conservada y trabajada por el letrado; observándose que prácticamente todos los asientos se tratan de recursos consignados pendientes de la resolución de los recursos de casación, para poder dar el destino correspondiente, lo que hace concluir, que la llevanza de la cuenta es excelente y por todo ello, felicitamos al letrado por su labor en esta materia.

Los boletines estadísticos y los datos recogidos en el Acta de la Inspección arrojan una pendencia de 1 procedimiento en primera instancia, 1.916 recursos civiles y 24 recursos en materia mercantil. Existen en la actualidad 15 escritos pendientes de proveer, todos ellos de fechas recientes.

De todo lo anterior se puede concluir:

1. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Jaén soporta, en términos generales, una importante carga de trabajo que, en los últimos años, ha superado ampliamente el criterio técnico, orientativo e indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial de 200 asuntos por Magistrado y año para las Secciones civiles de Audiencias Provinciales, lo que justifica mantener la actual medida de apoyo judicial, sin perjuicio de la nueva plaza creada en virtud del Real Decreto 954/2022, de 15 de noviembre, cuya operatividad práctica podrá valorarse a lo largo de 2023.

2. Del estudio detallado de las anteriores cifras de la presente inspección resulta que la situación del órgano jurisdiccional inspeccionado se puede considerar correcta se para un órgano de sus características y con la carga competencial que soporta, a la vista del número de asuntos pendientes de señalamiento o deliberación, así como el tiempo que transcurre entre el registro de



entrada y la fecha de deliberación y dictado de la correspondiente resolución.

Las características del órgano inspeccionado y la carga competencial que soporta dificulta con la actual plantilla reducir significativamente el volumen de pendencia y dar una respuesta en segunda instancia en plazos más cortos en algunos procedimientos, singularmente los ordinarios.

3. Se parte de una labor resolutive consistente en el dictado mínimo de cinco ponencias semanales por Magistrado. Como regla general, se asignan por semana a cada ponente dos procedimientos ordinarios, un juicio verbal, un asunto de familia, un procedimiento de condiciones generales de contratación bancaria y/o auto. Todo ello, sin computar los asuntos urgentes, cuestiones competencia, recursos de queja e inadmisiones de demandas, que se resuelven de manera rápida y cercana a su registro.

Tras su registro y asignación de ponente, los asuntos quedan pendientes de señalamiento para deliberación y votación cuando por turno corresponda. Posteriormente, con un transcurso temporal distante a la fecha de registro (por regla, a los seis meses), se dicta otra resolución acordando su señalamiento para día concreto.

Excepto asuntos de familia, urgentes, preferentes o de materias sensibles, sólo los señalamientos de procedimientos ordinarios se alargan temporalmente y su resolución gira en torno a los doce/quince meses siguientes a la fecha de entrada del procedimiento.

El último señalamiento está previsto para julio de este año, si bien la agenda está pendiente de rellenar con buen número de procedimientos de distinto tipo y clase de reparto, ya registrados.

4. Desde un punto de vista cualitativo, se observa un correcto trabajo y control por parte de los órganos rectores de la oficina judicial, lo que aconseja continuar en la línea de seguimiento de los asuntos, singularmente los de mayor antigüedad o que afecten a materias sensibles.

Las resoluciones dictadas por los Magistrados están correctamente fundamentadas y, en general, dictadas en plazo.

Como reflexión general, se considera necesario caminar hacia el mejor rendimiento de la Sección inspeccionada, siendo conscientes que el problema es el incremento de asuntos civiles en las últimas anualidades, difícil de reducir sensiblemente hasta el momento con la plantilla de magistrados titulares, que ha sido necesario reforzar con un JAT.

Se aconseja valorar la posible concurrencia de datos que permitan acumular la deliberación de procedimientos de similar complejidad y planteamiento jurídico (singularmente en materia de condiciones generales de contratación bancaria).

Asimismo, parece conveniente para mejor control y seguimiento temporal de los recursos pendientes de resolver, que se señale con mayor anticipación las fechas de deliberación y votación de los asuntos pendientes de tal trámite registrados en Secretaría, con su correspondiente notificación a las partes interesadas.

5. Se detectan relaciones correctas entre los integrantes de la oficina. Buen clima laboral, entendimiento y distribución del trabajo. Se aprecia un buen control en la oficina.

La oficina judicial funciona con eficiencia a pesar de la carga de trabajo existente, mérito imputable a todos los que forman parte de la misma y a quienes constituyen el equipo rector.

6. Debe mantenerse el esfuerzo en el tratamiento informático de los procedimientos para la



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

plena implantación del expediente digital, así como la plena anotación e identificación de los acontecimientos de cada asunto en el sistema de gestión procesal.

Asimismo, al amparo de lo establecido en el artículo 18 del ROCSJ, aprobado por RD 1608/2005, es conveniente que el Secretario Coordinador imparta las instrucciones oportunas para que todos los Juzgados, antes de remitir los asuntos a la Sección de la Audiencia Provincial, comprueben que las actuaciones están completas, así como el envío de las grabaciones audiovisuales, en su caso, junto a la necesidad de que los funcionarios cuiden la indexación y ordenación telemática de los procedimientos remitidos, vigilando por su cumplimiento los Letrados/as de cada Juzgado de origen.

7. El control y gestión de las cuentas-expedientes de consignaciones es correcto.

Particípese el presente acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario Coordinador Provincial y al órgano afectado, para su conocimiento y efectos procedentes.

En éste momento abandona la Sala el Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de Granada, incorporándose al Pleno la Sra. Presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, permaneciendo hasta su finalización .

2.11- VISITA DE INSPECCIÓN Nº 00000011/2023, realizada al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 2 DE JAÉN por el Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla el día 15/03/2023, sirviendo el órgano judicial la Magistrada Juez titular Doña Ana Álvarez Toro, y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, y por unanimidad, acuerda APROBAR LA VISITA DE INSPECCIÓN GIRADA.

La última visita de inspección fue realizada por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial en el año 2018.

La plantilla del órgano judicial la integran 2 Magistrados, 2 Letrados de la Administración de Justicia, 4 Gestores procesales, 6 Tramitadores procesales y 2 Funcionarios de Auxilio judicial.

Los magistrados que prestan actualmente servicios en este órgano son Doña Ana Álvarez Toro, como magistrada titular desde el 3/1/2023, y Don Miguel Cruz Raya, magistrado de adscripción temporal desde el 26/1/2022.

El Juzgado está servido por dos letrados de la administración de justicia: Don Juan Alberto San José Barranco, letrado titular desde el 6/5/2019, y Doña Eva María Pontiveros García, letrada en comisión de servicio para refuerzo desde el 2/1/2020.

Composición actual de la plantilla de funcionarios: Cuerpo de Gestores Procesales: D. Ezequiel Castro Jiménez (titular) Fecha posesión 03/03/2012, D^a.

(interina) posesión 20/06/2017, de licencia por enfermedad, D. (comisión de

servicios) Fecha posesión 13/05/2022, D^a. (refuerzo). Fecha posesión

12/11/2021. Cuerpo de Tramitación Procesal (existen dos vacantes): D.

(titular) Fecha posesión 26/11/2013, D^a.

(titular). Fecha

posesión 22/02/2019, D^a.

(titular) Fecha posesión 20/09/2021, D^a.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

(interina de refuerzo) Fecha posesión 20/06/2017. Cuerpo de Auxilio Judicial: D.

(interino) Fecha posesión 13/09/2022, D^a.

(interina de refuerzo) posesión 11/09/2017.

Durante el periodo en el que este Juzgado tuvo asumidas con exclusividad el conocimientos de los procedimientos relativos a cláusulas suelo, los funcionarios dedicados a tramitar exclusivamente estos procedimientos eran 3 Gestores y 6 Tramitadores Procesales, los cuales asistían al trabajo de los 3 Magistrados, de los cuales 2 de ellos se dedicaban exclusivamente al conocimiento de cláusulas suelo y el tercero (la Magistrada titular) conocía tanto de procedimientos de cláusulas suelo como de procedimientos anteriores a la fecha en la que este órgano judicial asumió la exclusividad y dejó de entrar en el reparto de asuntos ordinarios para recibir únicamente todos los procedimientos relativos a cláusulas suelo derivados de demandas interpuestas en el ámbito territorial de la totalidad de la provincia de Jaén. Los 3 funcionarios restantes (1 gestor y 2 tramitadores) asumieron la tramitación de la totalidad de los asuntos pendientes ordinarios y que quedaron a la fecha de quedar el Juzgado exento de reparto de asuntos que fueren de cláusulas suelo. Asimismo asistían a la tercera Magistrada (titular) indicada en el párrafo anterior, la cual conocía tanto de estos procedimientos como de los relativos a cláusulas suelo si bien éstos últimos en un número menor al de los que conocían los otros dos Magistrados de refuerzo.

Actualmente ha quedado desmantelada la sección dedicada a la gestión de los más de 3000 procedimientos de condiciones generales de contratación bancaria (3359 según la estadística judicial), pendientes de trámite, señalamiento y sentencia, existiendo sólo 2 funcionarios (1 Gestora Procesal y 1 Tramitadora) de los 4 inicialmente destinados a tales asuntos.

Las demandas son registradas diariamente y se trasladan posteriormente a los letrados de la Administración de Justicia para que las minuten. Los escritos se imprimen y sólo se examinan personalmente aquellos que son urgentes o reiterativos.

La organización del trabajo está distribuida por negociados, de suerte que para la tramitación de las cláusulas suelo, si bien inicialmente se asignaron cuatro funcionarios, como un gestor y tres tramitadores, con ocasión del Juzgado bis, estos funcionarios conocen la tramitación de estos procedimientos, hasta la firmeza de la sentencia, pasando el conocimiento y tramitación posterior de los mismos en toda su fase de ejecución como tasaciones de costas, impugnaciones de las mismas, liquidación de intereses y ejecuciones, a su reparto al resto de la plantilla, pero actualmente de los cuatro funcionarios, sólo quedan dos.

El resto de los procedimientos, junto con la fase de ejecución de los procedimientos de cláusulas suelo antes reseñados, se está llevando por tres gestores y cuatro tramitadores procesales, si bien una gestora se encuentra de baja médica y una tramitadora cesó recientemente el día 10 de marzo por haber obtenido plaza por concurso, por lo que en la actualidad se dispone de cinco funcionarios en este negociado, con dos gestores y tres tramitadores.

La dación de cuenta a los magistrados se lleva a cabo por parte de los funcionarios, siendo de forma presencial.

Las aplicaciones telemáticas son utilizadas por el personal con normalidad. En términos generales, los procedimientos en la aplicación de gestión procesal Adriano se encuentra actualizados



en fase y estado. La plantilla es colaboradora con el uso de las nuevas tecnologías, así que disponen de las correspondientes claves de acceso del PNJ y de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los actos de comunicación a Procuradores se realizan a través de Lexnet. También se realiza el envío de exhortos telemáticos a través de Adriano y PNJ, según sean fuera o no de Andalucía, y se incorporan los escritos desde Lexnet al sistema de gestión procesal Adriano.

El ambiente laboral con los funcionarios es bueno, si bien en los últimos meses ha habido un cambio de personal, concretamente 3 Gestores y 3 Tramitadores. Existe buena disposición para el trabajo. Cinco funcionarios de la plantilla realizan teletrabajo una vez por semana, distribuyéndose para no coincidir.

Se intenta que la relación entre los magistrados y los letrados sea fluida y eficiente, si bien se detectan serios problemas de comunicación con el letrado señor San José, tanto a nivel de los dos jueces como de la letrada de refuerzo, que es necesario reconducir y mejorar en el futuro, lo que así se ha trasladado al LAJ titular, quien debe modificar sus pautas de actuación. Igualmente se han detectado quejas por parte de profesionales en la atención al público por parte de algunos funcionarios del Juzgado que debe ser corregida en el futuro.

El estado de las instalaciones es correcto. Se traslada que faltan muebles auxiliares para colocar los expedientes sobre los que se está trabajando en cada momento o período; tales muebles fueron solicitados a la Junta de Andalucía quien no atendió la petición.

En cuanto a la sala de vistas, dispone de una de uso exclusivo de dimensiones adecuadas y con sistema de grabación. También se dispone de otro sistema de grabación adicional instalado en el despacho de la Magistrada titular, el cual era utilizado por la titular anterior para la celebración de las audiencias previas en los juicios ordinarios, lo que permitía simultáneamente celebrar vistas al mismo tiempo en la Sala de Vistas y en el despacho de la Magistrada titular.

En cuanto a los medios técnicos e informáticos disponibles, cada funcionario dispone de un ordenador con dos pantallas; hay dos sistemas de grabación de vistas, uno en la Sala de Vistas y otro en el despacho de la Magistrada titular y, finalmente, un sistema de videoconferencia instalado en la Sala de Vistas.

No hay ninguna incidencia que destacar respecto de la utilización de las aplicaciones telemáticas para acceder a los servicios ofertados desde el PNJ.

Este Juzgado es piloto, junto con el resto de Juzgados de primera instancia y el de lo mercantil, en la implantación del sistema@Adriano, implantación que comenzó el día 23 de enero y ha supuesto serios inconvenientes y paralización diaria de la actividad procesal. Afortunadamente, se va retrasar la implantación hasta el día 5 de mayo.

La implantación del sistema ha venido a suponer que durante semanas las jornadas de trabajo de los funcionarios se hayan visto reducidas a la mitad por la actividad de los formadores en el nuevo sistema enviados por la Junta de Andalucía; además, son continuos los errores e incidencias de los que hay que dar parte, pues tales incidencias tienen prohibido comunicarlas los formadores, deben hacerlas los funcionarios. Es un problema más añadido y que, sin duda, retrasará aun más si cabe la pendencia de este órgano judicial.

El Juzgado examinado tramita de forma completa el expediente digital.



En todos los procedimientos examinados consta los acontecimientos debidamente descritos y catalogados, salvo excepciones muy puntuales en que se puede comprobar una resolución de “texto libre”, referidas siempre a diligencias de unión o de constancia.

El orden cronológico de los mismos es correcto, salvo en algunos procedimientos en que se ha comprobado que la unión de los despachos recibidos se realiza con posterioridad a la resolución de la que trae causa.

Todas las resoluciones están firmadas digitalmente y están integradas en el expediente. En todos los procedimientos examinados la fase y estado es la correcta y la documentación que se recibe, que no llega por Lexnet, como por ejemplo diligencias de comunicación practicadas por el Servicio Común, informes, comparecencia de un perito, el apoderamiento apud acta y otros documentos originales se catalogan y se incorporan al expediente.

El sistema de gestión procesal sí guarda relación con la realidad del Juzgado.

No se graban los juicios con marcas y, por ello, se han dado las instrucciones oportunas para la grabación de las vistas con marcas, lo que facilita la labor en caso de revisión de los autos o recursos.

En conclusión, en este Juzgado existe un elevado grado de consolidación del expediente digital, que ha permitido una homogeneización de las actuaciones y un correcto reflejo del sistema de gestión procesal con la realidad del Juzgado. Se han asumido buenas prácticas en la tramitación digital de los expedientes, salvo la necesidad de realizar las marcas en las grabaciones de vistas y juicios.

El total de asuntos registrados en la aplicación informática Adriano es hasta el 20 de marzo de 2023 de 42.369. El número de asuntos registrados en la citada aplicación desde comienzos del año 2022 hasta el 20 de marzo de 2023 es de 1.184 asuntos. Respecto a los acontecimientos o trámites realizados por los usuarios a través de la aplicación informática (descartando los generados por la aplicación de forma automática, los relativos a la recepción de escritos o informes, o de soporte a la funcionalidad de firma digital) el total se eleva a 801.508 acontecimientos civiles, de los cuales 4.615 corresponden a los acontecimientos registrados desde el inicio del año 2022 hasta la fecha de referencia. En relación con la elaboración de las resoluciones de fin integradas en la aplicación informática de gestión procesal, en ella figuran registradas un total de 22.029 resoluciones, de las cuales 9.180 son sentencias, 5.994 son autos definitivos y 6.855 son decretos definitivos. Respecto al volumen de resoluciones registradas desde comienzos de 2022 hasta la fecha de referencia, figuran un total de 2.245 sentencias, 730 autos definitivos civiles y 440 decretos definitivos. El reflejo de la situación de los procedimientos de forma que se encuentre constantemente utilizada (no se contabilizan las actuaciones automáticas del sistema) es hasta la fecha de 23.610 actualizaciones manuales de fases y estados, 39.152 civiles, de las cuales 4.615 corresponden al periodo de referencia. A partir de los datos grabados en la aplicación informática Adriano el detalle de procedimientos pendientes y de procedimientos inactivos a la fecha de elaboración del informe es de 13.753 procedimientos pendientes y 11.856 procedimientos inactivos.

Todos los libros son informáticos.

La Cuenta de Depósitos y Consignaciones está abierta en la entidad Banco de Santander con



el número 2055 la correspondiente al Juzgado de primera instancia número dos tiene un saldo de 3.592.409,57 €, y con número 5291 perteneciente al Juzgado de primera instancia dos bis el saldo es de 226.660,78 €.

Vamos a realizar su examen distinguiendo la labor en ambas cuentas.

A) Respecto a la primera cuenta del Juzgado de primera instancia número 2, con número 2055, posee ingresos en un número de 80 por importe de 95.173,25 € y pendientes de cobro 420 mandamientos por importe de 645.145,99 €, lo que indica una cantidad ascendente a 1.198.575,60 € pendientes de cobro si le añadimos los que están pendientes de confirmar en un importe de 553.429,61 €, 505 mandamientos que han sido realizados por los funcionarios y que están pendientes de esa confirmación por el LAJ, lo que nos da una idea de que se ha realizado una labor de depuración de la cuenta en momentos previos a esta inspección, lo cual tiene una clara y doble lectura, el LAJ titular ha realizado su labor en la depuración de la cuenta, pero revela que ha existido anteriormente una clara dejación de sus funciones al respecto; no parece descabellado concluir que, sin duda motivado por la inspección anunciada y que ahora se realiza, se ha prestado a esta labor, largamente demorada, sobre la que tantas quejas se exteriorizaban por los profesionales y ciudadanos afectados.

Existen activas un total de 3441, cuentas, abiertas 1867, operativas 787, e igual número de ejecutadas habiendo sido concluidas entre 1902 cuentas canceladas 8141 y tiene cuentas expedientes con saldo cero y antigüedad de más de un año.

Podemos concluir que es una cuenta con muchos ingresos mensuales superiores a la media de este tipo de órganos; se aprecia igualmente que hay una gran cantidad, en concreto 420 operaciones pendientes de entrega y 505 pendientes de confirmación, y tiene demasiadas cuentas en estado de activas en total de 1441, por lo que esta cuenta necesita una mayor dedicación y trabajo para la eliminación de cantidades y expedientes y continuar en la labor de realización de expedición de mandamientos de pago que ha de realizarse de manera constante.

Los letrados nos indican que examinan casi a diario las cuentas, siendo la labor de la Letrada de refuerzo muy constante y positiva desde hace bastante tiempo, y se aprecia que realiza los mandamientos, comprobando la tramitación procesal pero reconociendo que esta labor puede ser más rápida y eficaz en el futuro, de hecho tienen un seguimiento establecido por esta Secretaría de gobierno para la eliminación de cantidades, el cual se va a mantener por el momento hasta la completa regularización de esta cuenta.

B) en relación a la cuenta del juzgado de primera instancia número dos bis de Jaén con número 5291, posee un saldo de 266.660,78 € y una cantidad de ingresos escasa en concreto 30, por importe de 52.241,83 euros y un número de transferencias emitidas por 16 por importe de 1217 € y 31 mandamiento devolución por importe de 41.388, esto unido a que están pendientes de cobro un total de 97 mandamiento por importe de 126.646,36 € nos da a entender que es una cuenta que está controlada y en proceso de disminución, a lo que ha de añadirse que tiene activas 291 cuentas, abiertas 121, operativas 82 cuentas, y una conclusión de 1708 cuentas habiendo sido canceladas 865, todo ello, nos indica que esta cuenta está en vías de eliminación y que los parámetros en menor grado que la anterior, son los mismos, se ha realizado una reciente labor, de modo paralelo en una y otra cuenta.



Los funcionarios están habilitados en modo “funcionario”. Ellos llevan a cabo los embargos telemáticos de cuentas, así como la preparación de las subastas electrónicas a través de esta herramienta, que posteriormente los letrados de la Administración de Justicia validan.

En relación con el seguimiento y la recomendaciones que recibió en su día sobre la obligación de revisar y actualizar determinadas cuentas de expedientes que se encontraban activas con saldo y sin movimiento desde los últimos cinco años, concretamente fueron depurando de forma progresiva muchos asientos dando un buen resultado en la actualidad pero hacen recomendable mantener el seguimiento para observar su evolución al menos por seis meses más.

Los boletines estadísticos y los datos recogidos en el Acta de la Inspección arrojan una pendencia de 2.940 procedimientos en fase de tramitación, 1 asunto de jurisdicción voluntaria y 735 procedimientos en fase de ejecución.

De todo lo anterior se puede concluir:

1. El Juzgado inspeccionado soporta una carga de trabajo elevada, que supera el criterio técnico, orientativo e indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial, de 1.200 asuntos como carga de trabajo anual en este tipo de Juzgados, lo que justifica mantener la actual medida de apoyo judicial, máxime ante el nivel de pendencia existente por la sobrecarga de asuntos de años precedentes.

2. Sin perjuicio de reconocer el esfuerzo y laboriosidad desplegada, y conscientes de sus características y carga competencial durante el período de especialización en condiciones generales de contratación bancaria, el estudio detallado de las anteriores cifras de la presente inspección revela que la situación del órgano jurisdiccional inspeccionado no se puede considerar correcta ni, por tanto, normalizada, valorando el número de asuntos pendientes de resolver, así como el tiempo que transcurre entre el registro de entrada y la fecha posible de señalamiento.

3. Desde un punto de vista cualitativo, se detectan retrasos y bastantes paralizaciones en muchos procedimientos, lo que obliga al equipo rector a insistir en la línea de seguimiento y revisión periódica de los asuntos, aparte de la responsabilidad propia de cada funcionario en la revisión de los procedimientos asignados, máxime los asuntos de mayor antigüedad, materializando las diligencias pendientes en cada procedimiento con mayor cercanía temporal.

Se hace necesario realizar revisiones periódicas de los procedimientos, llevar un control de los plazos y evitar traslados innecesarios que dilatan la tramitación. Por tanto, los LAJ's deben adoptar las medidas necesarias para realizar un control más efectivo del trabajo, tanto el que se realiza presencialmente como por medio de teletrabajo, dar las pautas organizativas precisas, que conlleven una tramitación más ágil, evitando dilaciones innecesarias que han sido detectadas en innumerables procedimientos.

Con respecto a la incoación de demandas debe continuar el seguimiento instaurado, ya que se han quedado paralizadas las incoaciones en el mes de noviembre del año 2022.

Hay que proceder a señalar los asuntos ordinarios pendientes del año 2018 que aún restan por fijar fecha de señalamiento.

Del examen de los procedimientos se comprueba que existe un alto porcentaje que requieren



subsanación de defectos procesales con carácter previo a la admisión de la demanda, o se hace necesario verificar apoderamiento, apud acta, lo que produce dilaciones más allá de los tres meses que retrasan el procedimiento y puede evitarse.

También se hace preocupante el análisis de procedimientos del denominado juzgado bis, existiendo asuntos con paralizaciones superiores al año en diligencias de trámite.

Igualmente se detecta retraso en el listado de resoluciones de los LAJ's, en especial en tasaciones de costas, impugnaciones, decretos resolviendo recursos, dilaciones en torno a los 4/5 meses; igualmente existen retrasos en la admisión a trámite de las demandas y en las notificaciones de resoluciones, por lo que tiene un seguimiento por el retraso muy generalizado en la tramitación de los escritos.

Por todo lo expuesto, se aconseja: a) mantener el seguimiento establecido sobre la provisión de los escritos, identificando los realizados por cada uno de los negociados del órgano judicial, como se venía haciendo hasta ahora, b) continuar con el seguimiento establecido para la incoación de demandas, c) repaso general y puesta al día de todos los procedimientos que aparecen en los listados aportados a la inspección, dándoles el trámite e impulso que corresponda, a la vista de las paralizaciones observadas, con mayor o menor intensidad según afecte a número par, que están en peor estado, o impar.

5. Se detectan, en general, relaciones correctas entre los integrantes de la oficina.

La plantilla es demasiado ajustada a la carga de trabajo, y parece poco razonable que dos funcionarios se dediquen en exclusiva a la tramitación de los procedimientos de condiciones generales de contratación bancaria, por lo que se hace necesario valorar la opción de aumentar el número de funcionarios en esta materia, tanto organizando los negociados como solicitando un funcionario de apoyo.

Como se ha reseñado en el apartado I.A), es necesario que la relación entre los magistrados y los LAJ's sea fluida y eficiente que se establezcan criterios únicos en la tramitación procesal, ya que se detectan serios problemas individualizados en el Sr. Barranco, que es necesario reconducir y mejorar en el futuro, lo que así se ha trasladado a dicho LAJ titular, quien debe modificar sus pautas de actuación.

Igualmente se han detectado quejas por parte de profesionales en la atención al público por parte de algunos funcionarios del Juzgado que debe ser corregido.

6. Debe mantenerse el esfuerzo en el tratamiento informático de los procedimientos, siendo imprescindible la plena anotación e identificación de los acontecimientos de cada asunto en el sistema de gestión procesal, así como velar que se proceda a la grabación de las marcas en las grabaciones de vistas y juicios, dando instrucciones precisas al funcionario de auxilio judicial.

En este sentido, es conveniente que los Letrados/as del Juzgado vigilen su cumplimiento e impartan las instrucciones oportunas para que, en caso de recurso, antes de remitir los asuntos a la Sección de la Audiencia Provincial comprueben que las actuaciones están completas, así como el envío de las grabaciones audiovisuales, junto a la necesidad de que los funcionarios cuiden la indexación y ordenación telemática de los procedimientos remitidos.

El control y gestión de las cuentas-expedientes de consignaciones exige mantener un trabajo



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

constante de actualización conforme a lo expuesto en el apartado I.D). Se aconseja mantener el seguimiento de las mismas, al menos durante seis meses más, para asegurarse el movimiento y liquidación de las cantidades en el mismo nivel que en este último mes.

Particípese el presente acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario Coordinador Provincial y al órgano afectado, para su conocimiento y efectos procedentes.

2.12- VISITA DE INSPECCIÓN Nº 00000012/2023 realizada al JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 1 DE JAÉN por el Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de JAÉN el día 30/03/2023, sirviendo el órgano judicial el Magistrado Juez Don Fernando Moral Rísquez, y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, y por unanimidad, acuerda APROBAR LA VISITA DE INSPECCIÓN GIRADA.

La composición de la plantilla actual del órgano judicial es la siguiente: Magistrado Juez, Letrada de la Administración de Justicia, tres funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, cuatro funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y funcionario de Auxilio Judicial. La Letrada manifiesta que la plantilla es estable, está pendiente que se le cubra una plaza de Tramitación. Todos los funcionarios son titulares salvo un Tramitador interino, el titular se jubiló, por lo tanto ha habido un cese y toma posesión. La plantilla se considera correcta, solo necesita cubrirse la plaza vacante. El ambiente laboral y relación de la Letrada de la Administración de Justicia con los funcionarios es buena. Estos le trasladan y le comentan todos los problemas e incidencias. Igualmente las relaciones MAGISTRADO JUEZ - LETRADA Judicial son excelentes. Se comentan entre ambos los problemas e igualmente proponen a los funcionarios las instrucciones procedentes que son bien acatadas por aquellos.

No entra en Sala la Letrada. Los escritos se presentan telemáticamente a través de la aplicación Adriano, quedando incorporados a cada procedimiento, excepto los presentados sin representación procesal que son presentados ante el Servicio Común, si bien al no estar conectado con Adriano no quedan incorporados directamente al procedimiento. El reparto de atestados, denuncias y partes médicos y escritos de trámite se realizan telemáticamente a través de Lexnet atestados. Si bien en algunas ocasiones se presentan en papel porque manifiestan que el sistema Lexnet no funciona. Los escritos con Abogado y Procurador, los informes del IML quedan incorporados al procedimiento. Los escritos son controlados por la Sra. Letrada, distribuidos para su reparto en la oficina.

El edificio se ubica en la calle Avenida Ejército Español, nº 7 de Jaén, cuenta con dos plantas, en la primera planta baja está el Juzgado Instrucción 1, planta primera el Juzgado Introducción nº 3 con una sala de vistas compartida ubicada en la planta baja. Igualmente las dependencias carecen de una salida de emergencias alternativa al acceso al edificio. Existe arco seguridad controlado por la Guardia Civil a la entrada. No existe sistema de alarma instalado ni sistema contra incendios más allá de los extintores. La sala de vista fue dotada de mamparas y además se hace un uso habitual del sistema CISCO WEBEX que limita gran número de videoconferencias y permite una mejor tramitación de estas actuaciones sin necesidad de implicar a otro órgano judicial.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

Los funcionarios de esta oficina disponen todos ellos de equipo informático individual, además de dos impresoras y fotocopidora multifunción, videoconferencia y equipo de grabación en la sala de vistas. No consta incumplimiento del Código de Conducta (Instrucción 2/03), y respetando por las mismas las Instrucciones 4/09 y 5/10 del Secretario General de la Administración de Justicia. Igualmente en el registro de asuntos se da cumplimiento al Reglamento de Homogeneización del CGPJ 2/10. Se cumplen las Instrucciones del Secretario General de la Administración de Justicia números 4/2009 y 5/2010, así como el Reglamento de Homogeneización del CGPJ 2/2010, fundamentalmente en cuanto a la transferencia y registro de procedimientos. Se respeta la normativa sobre presentación telemática de escritos y su integración en el sistema procesal, pues dadas las plataformas existentes son escasos los escritos que se reciben en papel y que responden a la respuesta a Oficios remitidos y que son digitalizados e incorporados al propio expediente. El cumplimiento de la normativa sobre comunicaciones vía Lexnet a profesionales y recepción por dicho aplicativo de todos los escritos iniciadores y de trámite es óptimo.

La tramitación de exhortos telemáticos es llevada a cabo tanto a través del Punto Neutro Judicial (comunicaciones seguras), como a través del sistema de gestión procesal de Adriano en el caso de remisión dentro de Andalucía. El uso del sistema de conexión Cisco-Weber ha permitido la eliminación de gran número de auxilios judiciales para la intervención a través de videoconferencia de testigos, partes y peritos, con lo que se hace un uso adecuado y eficiente de los sistemas de comunicación telemáticos.

No se tramita en papel cero, pero se incorpora todo al sistema procesal, es necesario tramitar a corto plazo en papel cero y no continuar en papel. Todo ello sin perjuicio de que algunas partes Juez, Fiscal, necesite imprimir todo o parte expediente al evacuar algún trámite o traslado.

En la Secretaría de este Juzgado solo se mantiene manualmente el libro de presos. El resto de libros se lleva informatizado. El libro de requisitorias se lleva de un juzgado a otro en función de la guardia.

El número de cuenta que tiene asignado este Juzgado de Instrucción 1 de Jaén es la número 2053 presenta un saldo 147,175,91 euros, presenta expedientes, totalmente activos 34, creadas 8, abiertas 151, cuentas abiertas 30, ejecutadas 1, concluidas 274, canceladas 4757. Operaciones pendientes cobro 0, transferencias pendiente de cargo 0. No existe mandamientos cancelados por falta de pago porque la Letrada no hace mandamientos sino transferencias a cuentas. Se comprueba que la Letrada mueve la cuenta y realiza mandamiento de pagos, sin embargo aunque pocos, algunos asientos es preciso su revisión, por ser ingresos erróneos, cantidades pendientes de transferir al órgano de enjuiciamiento, fianzas, haciéndole saber en este acto proceda a darle destino legal, manifestando que lo hará de inmediato.

Los boletines estadísticos y los datos recogidos en el Acta de la Inspección arrojan una pendencia de 158 diligencias previas, 52 procedimientos abreviados, 88 delitos leves, 1 delito leve inmediato y 67 ejecutorias. Hay 18 asuntos pendientes de incoar. En cuanto a la pendencia de asuntos penales, presenta unas cifras, normales, en total 366, destacando la buena respuesta del titular del órgano en esta materia.

Existen al momento de la Inspección dos causas, con tres presos en total.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

El Juzgado ofrece niveles de buen rendimiento y funcionamiento. Los cometidos de registro e incoación a tenor de los procedimientos examinados se realizan en términos uniformes generales de plazos, normalmente en la semana de entrada, aunque pueden ser mejores dependiendo del tipo de procedimiento y del funcionario encargado de tramitación, el proveído de escritos se realiza en fechas muy próximas a su entrada, salvo excepciones, no constan escritos pendientes de proveer.

Se observa como consecuencia de la inspección que se han actualizado los procedimientos, siendo la última resolución muy reciente. Los señalamientos no van más allá de 2 meses, lo que demuestra la celeridad del órgano en señalar la vista. El tiempo empleado por la Sra. Juez en dictar Sentencia o Auto es bastante razonable. Y en cuanto a los Decretos o Diligencias de Ordenación del Letrado de la A.J., se dictan en plazos razonables.

Presenta el órgano una cifra normal de asuntos penales para este tipo de órganos, algo inferior al modulo establecido por el CGPJ para este tipo de órganos. Los cuadros estadísticos presentan cifras que revelan un impulso procesal y control periódico de los distintos expedientes bastante adecuado, así como una muy buena capacidad instructora y resolutive del Magistrado Juez. Como resultado de lo expuesto resalta la inexistencia de expedientes antiguos. Se observa una buena y ágil tramitación de las causas penales, con incoación directa de cada tipo de procedimiento. Dicha incoación es inmediata –menos de una semana- y en el Auto correspondiente se suelen acordar de principio todas las diligencias posibles a practicar a juicio del instructor, cumplimentándose en tiempos razonables, lo que sin duda contribuye en gran medida a su pronta terminación, salvando los imponderables del normal retraso provocado por la cumplimentación de diligencias o informes externos –exhortos, oficios, periciales, IML, Instituto de Toxicología, etc.-, que no obstante son recordados con una periodicidad adecuada. Se abren las pertinentes piezas separadas, aconsejándose también se haga respecto a la de responsabilidad civil. El tiempo de tramitación de los Procedimientos Abreviados es razonablemente corto, presentándose los escritos de calificación o solicitud de diligencias por el Mº Fiscal en plazo. Solo se prolonga la fase intermedia en los supuestos de necesidad de exhortos.

No se acuerda seguimiento alguno.

Se constata que el Juzgado genera un ingreso de asuntos en los últimos años algo por debajo del modulo del CGPJ. No obstante, la pendencia es muy aceptable y se puede considerar que el funcionamiento del Juzgado es óptimo, debiendo destacar la labor que realiza el Magistrado-Juez titular, resaltando su eficacia y capacidad resolutive, implicación y compromiso profesional que es extensible al resto de la plantilla.

Particípese el presente acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario Coordinador Provincial y al órgano afectado, para su conocimiento y efectos procedentes.

2.13- VISITA DE INSPECCIÓN Nº 0000012/2023 realizada al JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2 DE JAÉN por el lltmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de JAÉN el día 20/03/2023, el órgano judicial el Magistrado Juez titular Don Emilio García-Rueda Quesada, y la



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, y por unanimidad, acuerda APROBAR LA VISITA DE INSPECCIÓN GIRADA.

La plantilla la integran el Magistrado Juez, el Letrado de la Administración de Justicia, tres funcionarios de Gestión Procesal, cuatro de Tramitación Procesal y un Auxilio Judicial. Todos los funcionarios son titulares, dos Tramitadores interinos, han cesado en ese periodo y el anterior Magistrado Juez titular Don Antonio Valdivia. Actualmente se encuentran todos los puestos cubiertos. Cada negociado se distribuye por números de forma equitativa, en caso de baja y ausencia se reparte lo más urgente entre los demás, hasta la reincorporación según las necesidades del servicio. Los tres Gestores, se reparten las diligencias previas, exhortos, procedimientos abreviados y en menor volumen por números de asuntos sumarios y jurados. Los tres Tramitadores tramitan delitos leves, ejecutorias y registro y apoyo al Gestor Procesal. El funcionario de Auxilio Judicial se encarga del correo, Decanato, Fiscalia, SCNE sistema de grabación. Se trata de una plantilla estable y bien conjuntada, ha habido cuatro nuevas incorporaciones desde 2.019 a 2.021, llevando desempeñando sus funciones en el Juzgado los otros cuatro componentes de la plantilla entre 13 y 32 años, la misma está bien dimensionada, lo que se refleja en la normal marcha del Juzgado y una razonable pendencia de asuntos, en relación con el número de ingreso de los mismos.

La sala de vistas de uso exclusivo, las instalaciones de oficina correctas. Existen graves deficiencias para el Juzgado de guardia y funciones de violencia de genero. No hay calabozos para detenidos, se tienen que custodiar esposados en la sala de vistas. Cuando el asunto es de violencia de genero para evitar la comunicación con el agresor, hay que esconder a la victima cerca de los aseos del Juzgado y esperar a que salga por otra puerta. No hay sala para victimas de VSM. No existe sistema de alarma instalado, ni sistema contra incendios más allá de los extintores. Dado el aforo reducido del Juzgado y la falta de espacios de espera, gran parte de los particulares y profesionales tienen que esperar en la calle cuando se señalan actuaciones procesales.

El órgano judicial dispone de todos los medios informáticos, sistema de grabación (sala de vistas y despacho del Juez), videoconferencia, firma digital, Lexnet. Se realiza la utilización distintas aplicaciones telemáticas a los servicios ofertados desde el PNJ, todos los procedimientos están incorporados a expediente digital con firma electrónica. Los funcionarios de esta oficina disponen todos ellos de equipo informático individual, además de dos impresoras y fotocopidora multifunción, videoconferencia y equipo de grabación en la sala de vistas. Todos los funcionarios tienen clave de acceso a las aplicaciones del Punto Neutro Judicial y al sistema de grabación.

No consta incumplimiento del Código de Conducta (Instrucción 2/03), respetando las Instrucciones 4/09 y 5/10 del Secretario General de la Administración de Justicia. Igualmente en el registro de asuntos se da cumplimiento al Reglamento de Homogeneización del CGPJ 2/10. Se cumplen las Instrucciones del Secretario General de la Administración de Justicia números 4/2009 y 5/2010, así como el Reglamento de Homogeneización del CGPJ 2/2010, fundamentalmente en cuanto a la transferencia y registro de procedimientos. Se respeta la normativa sobre presentación telemática de escritos y su integración el sistema procesal, pues dadas las plataformas existentes son escasos los escritos que se reciben en papel y que responden a la respuesta a Oficios remitidos y que son digitalizados e incorporados al propio expediente. El cumplimiento de la normativa sobre



comunicaciones vía Lexnet a profesionales y recepción por dicho aplicativo de todos los escritos iniciadores y de trámite es óptimo. La tramitación de exhortos telemáticos es llevada a cabo tanto a través del Punto Neutro Judicial (comunicaciones seguras), como a través del sistema de gestión procesal de Adriano en el caso de remisión dentro de Andalucía.

No se tramita en papel cero, pero se incorpora todo al sistema procesal, es necesario tramitar a corto plazo en papel cero y no continuar en papel. Todo ello sin perjuicio de que algunas partes Juez, Fiscal, necesite imprimir todo o parte expediente al evacuar algún trámite o traslado.

En la Secretaría de este Juzgado los libros que se llevan son los referentes a resoluciones judiciales y decretos son obtenidos a través del sistema gestión procesal. En cuanto a los resoluciones judiciales, la última anotación se hizo el día 19/01/23, siendo la ultima pagina la 97. En cuanto a los Decretos la ultima anotación se hizo el dia 15/03/23, siendo la última página 40.

Respecto a los libros manuales solo se llevan libros de presos, ultima anotación 14/03/2023, folio 30 y el libro de requisitorias, este va pasando de un órgano a otro, no se puede indicar el ultimo apunte, puesto que está en poder del juzgado que se encuentra de guardia.

El número de cuenta que tiene asignado este Juzgado de Instrucción es la 2040. La cantidad de saldo al cierre de datos asciende a 63.914,91 euros, existiendo 142 expedientes vivos. Existen 2 mandamientos de devolución y órdenes de transferencia que no han sido cargados en cuenta, porque el Letrado no realiza mandamientos de devolución sino transferencias a cuentas. No obstante se observa que aunque el Letrado mueve la cuenta, sin embargo es recomendable que proceda a la revisión de aquellos expedientes que llevan tiempo activos sin movimiento, dándole el destino legal que proceda, a cuyo fin debe acordarse un seguimiento, indicándole los que debe repasar.

Los boletines estadísticos y los datos recogidos en el Acta de la Inspección arrojan una pendencia de 201 diligencias previas, 1 procedimiento por jurado, 2 sumarios, 73 procedimientos abreviados 53 delitos leves y 58 ejecutorias.

Los cometidos de registro e incoación a tenor de los procedimientos examinados se realizan en términos uniformes generales de plazos, aunque pueden ser mejores dependiendo del tipo de procedimiento y del funcionario encargado de tramitación, el proveído de escritos se realiza en fechas muy próximas a su entrada, existiendo a la fecha del cierre de datos sólo 12 escritos de trámite y 1 de ejecución pendientes de proveer. Se observa como consecuencia de la inspección que se han actualizado los procedimientos, siendo la última resolución muy reciente. Los señalamientos no van más allá de 1 mes, lo que demuestra la celeridad del órgano en señalar la vista. El tiempo empleado por el Sr. Magistrado-Juez en dictar Sentencia o Auto es muy razonable. Y en cuanto a los Decretos o Diligencias de Ordenación del Letrado de la A.J., se dictan en plazos razonables.

Presenta el órgano una cifra normal de ingreso de asuntos para este tipo de órganos, algo inferior al modulo establecido por el CGPJ. algo inferior al modulo establecido por el CGPJ. periódico de los distintos expedientes bastante adecuado, así como una muy buena capacidad instructora y resolutive del Magistrado Juez. Como resultado de lo expuesto resalta la inexistencia de expedientes antiguos. Se observa una buena y ágil tramitación de las causas penales, con incoación directa de cada tipo de procedimiento. Dicha incoación es inmediata –menos de una semana- y en el Auto correspondiente se suelen acordar de principio todas las diligencias posibles a practicar a juicio del instructor,



cumplimentándose en tiempos razonables, lo que sin duda contribuye en gran medida a su pronta terminación, salvando los imponderables del normal retraso provocado por la cumplimentación de diligencias o informes externos –exhortos, oficios, periciales, IML, Instituto de Toxicología, etc.-, que no obstante son recordados con una periodicidad adecuada. Se abren las pertinentes piezas separadas, aconsejándose también se haga respecto a la de responsabilidad civil. El tiempo de tramitación de los Procedimientos Abreviados es razonablemente corto, presentándose los escritos de calificación o solicitud de diligencias por el Ministerio Fiscal en plazo. Solo se prolonga la fase intermedia en los supuestos de necesidad de exhortos.

Se constata que el Juzgado genera un ingreso de asuntos en los últimos años algo por debajo del modulo del CGPJ. No obstante, la pendencia es muy aceptable y se puede considerar que el funcionamiento del Juzgado es óptimo, debiendo destacar la labor que realiza el Magistrado-Juez titular, resaltando su eficacia y capacidad resolutive, implicación y compromiso profesional que es extensible al resto de la plantilla.

Se acuerda SEGUIMIENTO de la Cuenta de Consignaciones respecto de aquellas cuentas expedientes que se le ha indicado al Letrado, concediéndose el plazo de seis meses para su actualización, debiendo de remitir mensualmente informe de aquellos que hubiere realizado hasta su total revisión y puesta al día.

Particípese el presente acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario Coordinador Provincial y al órgano afectado, para su conocimiento y efectos procedentes. Incócese el correspondiente expediente de SEGUIMIENTO.

2.14- VISITA DE INSPECCIÓN Nº 00000015/2023 realizada al JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 5 DE CÓRDOBA por el Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de CÓRDOBA el día 30/03/2023, sirviendo el órgano judicial el Magistrado Juez titular Don Pablo Vargas Cabrera, y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, y por unanimidad, acuerda APROBAR LA VISITA DE INSPECCIÓN GIRADA.

Este órgano judicial ha sido objeto de la última visita de inspección por la Unidad Inspectora 12 del Consejo General del Poder Judicial, el día 21 de junio de 2006. No ha estado sometido a seguimiento. La última inspección ordinaria realizada por delegación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía fue el 7 de Octubre de 2015.

La plantilla del Juzgado está compuesta por 1 Magistrado-Juez, 1 Letrado de la Administración de Justicia, 2 funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, 4 funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, así como 2 funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.

En los últimos tres años no ha habido periodo de tiempo en que haya permanecido la oficina judicial sin cubrir toda su plantilla. Si bien, según se informa, el funcionario del Cuerpo de Gestión, Don Alfonso Serrano Mateo, anteriormente a su jubilación en fecha de 27/02 del presente año, disfrutó de dos meses de vacaciones correspondientes al año 2022 y 2023, así como de los días de asuntos particulares que le correspondían, acudiendo a trabajar sólo los días en que este juzgado se encontraba prestando servicio de guardia. Por tanto, durante casi tres meses el negociado que llevaba el referido funcionario se ha visto afectado produciéndose un retraso considerable.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

El Juzgado se estructura en dos secciones, con una carga igualitaria de trabajo, entre las que se distribuye la totalidad del personal del órgano, contando cada una con: un Gestor, dos Tramitadores y un funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial.

Las instalaciones del Juzgado están ubicadas en la sede de la Ciudad de la Justicia, que sirve también de sede a todos los juzgados del partido judicial de Córdoba. El edificio es nuevo inaugurándose en octubre de 2017. El Juzgado de Instrucción nº 5 se encuentra en el modulo A, segunda planta, compartiendo instalaciones con el Juzgado de Instrucción nº 6. Cada uno de estos juzgados dispone de seis dependencias distribuidas de la siguiente manera; despacho del Magistrado, despacho de la Letrada A.J., en otra de las dependencias dos gestores, en otras dos se comparten por dos Tramitadores y en una sexta los dos funcionarios de Auxilio. El mobiliario es nuevo y se encuentra en perfecto estado de conservación, si bien resultan insuficientes los armarios archivadores. El mobiliario destinado a archivo de expedientes es insuficiente. Se halla ubicado en las propias dependencias del juzgado en un pasillo que se encuentra en medio de los Juzgados de Instrucción nº 5 y nº 6 y consiste en dos armarios para cada juzgado. El archivo de expedientes anteriores al año 2022 se encuentra en el sótano del edificio. Por otro lado el Juzgado tiene asignado la Sala de Vistas nº 1, situada en la planta baja del edificio y que es compartida con otros juzgados. El juzgado celebraba vistas los jueves, y si en alguna ocasión se acordaba un señalamiento extraordinario se remitía, con la debida antelación, oficio al Decanato solicitando sala. La sala está dotada de sistema de grabación y de videoconferencia utilizándose los medios audiovisuales para la grabación de los juicios y de otras actuaciones penales. Así mismo dispone de biombo. Para celebrar los delitos leves inmediatos tiene asignada la sala 8, ubicada en la planta baja del edificio, disponiendo de sistema de grabación, de videoconferencia y biombo.

Prácticamente todas las salas de vistas cuentan con sistema de videoconferencia para las declaraciones que se practican en juicios orales de personas que se encuentran en otra ciudad. En la planta 2ª del modulo A del edificio hay dos salas de videoconferencia para la práctica de declaraciones y diligencias interesadas en procedimientos de auxilio nacional.

El edificio cuenta con seguridad privada fuera del horario de atención al público, escáner, arco de seguridad y sistema de video-vigilancia. La Guardia Civil controla la apertura y cierre de puertas así como las personas que entran y salen del edificio en las horas que permanece abierto y también durante la guardia manteniéndose en todo momento al ser la guardia de 24 horas. El edificio es nuevo por lo que dispone de salidas de emergencia y no existen barreras arquitectónicas.

Existe un servicio común de notificaciones y embargos, si bien, conforme a las normas aprobadas sobre su funcionamiento, los juzgados de instrucción únicamente pueden realizar a través del mismo las notificaciones y diligencias que hayan de practicarse en el Centro Penitenciario de Córdoba y entregadas antes de las 12 de la mañana. El resto de diligencias se realizan por los propios funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial del juzgado de instrucción, teniendo asignado un día para ello, en el cual disponen de un taxi, en caso de ser necesario. Respecto de la notificación a los procuradores y abogados se realiza a través del programa LEXNET. La función de registro y reparto corresponde a la oficina del Decanato una vez que el juzgado que presta servicio de guardia ha recibido y registrado todos los asuntos, remitiendo todos aquellos que conforme a las normas de



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

reparto, no le corresponden directamente.

Existe también un Servicio Común de Piezas de Convicción, si bien, no recoge ni joyas ni documentación. Hay un Servicio de Orientación Jurídica dependiente del colegio de abogados de Córdoba situado en la planta baja del edificio. También existe un Servicio de Atención a las Víctimas de Delitos (SAVA), que se encuentra en la primera planta de la Ciudad de la Justicia, disponiendo de abogados, psicólogos y asistentes sociales. No hay un Equipo Psicotécnico adscrito al juzgado. Existe un equipo en el SAVA y una psicóloga en el IMELCO. En cuanto al Servicio de intérpretes y traductores (OFILINGUA) y el de peritos judiciales (TAXO), se trata de empresas contratadas por la Junta de Andalucía que prestan sus servicios a las necesidades del juzgado, previa petición.

La dotación de la Oficina Judicial comprende ocho ordenadores, disponiendo toda la plantilla de uno con doble pantalla, y seis impresoras (cuatro en red para la Oficina y otras dos individuales, una para el Magistrado y otra para la Letrada de la Administración de Justicia. Asimismo tienen a su disposición un ordenador portátil. El grado de actualización de fases y estados de los procedimientos en la aplicación de gestión procesal en general es elevado; periódicamente se revisa la fase y estado de los procedimientos para así facilitar su control y poder realizar la estadística trimestral. La fiabilidad de los datos ofrecidos por la aplicación de gestión procesal sobre el número de asuntos pendientes y posibilidad de utilización, al menos como soporte de ayuda de la misma en la confección de alardes y estadística, se considera adecuada.

Los libros de registro que se refieren a los asuntos que se llevan en la Oficina Judicial y a los diferentes procedimientos, se indica que se obtienen informáticamente, pero no se imprimen regularmente, considerando el órgano que no tienen mucha utilidad y suponen un gran gasto de papel.

La Cuenta de Depósitos y Consignaciones está abierta en Banco Santander con el número 1449. El saldo, a la fecha del día de la visita, treinta de marzo del presente año, presenta un saldo de 12,702,86 euros. El importe de las operaciones pendientes de cobro son 4, por la suma total de 1.069,82 euros. La gestión de los movimientos se realiza con normalidad, y son razonables los tiempos de demora entre el ingreso en la cuenta y su entrega a quien corresponda, teniendo en cuenta las vicisitudes de las Diligencias, las ejecutorias y otros procedimientos en los que dichos ingresos se producen.

El órgano soporta un nivel de ingreso de asuntos que se halla justo dentro de los módulos referenciales que el Consejo General del Poder Judicial tiene establecidos con carácter orientativo para este tipo de órganos, que como es sabido se encuentra fijado en 3.300 asuntos, siendo el caso que el juzgado ha tenido un ingreso de media anual, según última Memoria de Actividades y Funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla de 3.335 asuntos penales.

En cualquier caso el Juzgado mantiene una pendencia aceptable. Y así se ha de entender del número de Diligencias Previas en tramitación (376), Sumarios (4) Procedimientos Abreviados (62); Delitos Leves (51); Delitos Leves Inmediatos (21); y Ejecutorias (88). En relación con los escritos pendientes de proveer se observa igualmente cierto retraso, existiendo alguno de 13 de Octubre de 2022 aún no proveído. Por lo que se refiere a los señalamientos, los mismos no pasan del mes de



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

mayo del presente año, estando, pues, en plazos asumibles.

Hechas las anteriores puntualizaciones, teniendo en cuenta el nivel de ingreso de asuntos al que antes se ha hecho referencia, la tasa de pendencia y las lagunas en el impulso procesal detectadas, puede afirmarse que el Juzgado inspeccionado presenta en general un funcionamiento aceptable.

Finalmente decir que el expediente digital aún no está establecido y generalizado como debiera en los órganos del ámbito penal de Córdoba y Provincia. Por tanto, se tramita en papel sin hallarse digitalizado. Por ello es necesario impulsar desde los Juzgados de Instrucción la digitalización de los expedientes dado que desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se están remitiendo los atestados y escritos iniciadores por el sistema Lexnet.

En base a lo anteriormente expuesto se entiende que no es necesario adoptar ninguna medida de seguimiento.

Particípese el presente acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario Coordinador Provincial y al órgano afectado, para su conocimiento y efectos procedentes.

2.15- VISITA DE INSPECCIÓN Nº 00000014/2023 realizada al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 2 DE MOGUER por el Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de HUELVA el día 18/11/2022, sirviendo el órgano judicial el Sr. Juez sustituto Don Santiago Javier Granado Pachón, y la Sala de Gobierno, reunida en Pleno, oído el Ponente, y por unanimidad, acuerda APROBAR LA VISITA DE INSPECCIÓN GIRADA.

La plantilla la integran junto con el Juez y el Letrado de la Administración de Justicia, dos funcionarios de Gestión Procesal, seis de Tramitación Procesal y uno de Auxilio Judicial. Recaltar que de los funcionarios integrantes de la plantilla solo hay una titular. El Juzgado tiene nombrado desde enero de 2020 una Tramitadora de refuerzo que se encarga de los Delitos Leves y las Ejecutorias derivadas de los mismos. También ha dispuesto de los Planes de auto refuerzos concedidos por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en dos periodos, de Septiembre a Diciembre de 2021 y de Septiembre al 30 de Noviembre de 2022. Los mismos han consistido en la realización de tres horas extraordinarias, en jornada de tarde, durante tres días a la semana, por un Gestor, un Tramitador y un Auxilio. Respecto al equipo rector, el Juez es sustituto y ha tomado posesión el 13 del pasado mes de septiembre, tras la marcha, en concurso de traslado de la anterior Juez titular. El Letrado de la Administración de Justicia es también Director del Servicio Común de Notificaciones y Embargos del partido desde el 1 de marzo de 2022.

El Juzgado tiene competencia en materia de Registro Civil.

Por lo que respecta a la sección civil, esta cuenta con cuatro funcionarios, dos Gestores y dos Tramitadores. Dos de ellos se encargan de los Procedimientos Monitorios y las ejecuciones, y los otros dos de los demás procesos contenciosos de la L.E.C. y de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Los dos grupos se reparten los asuntos por números pares o impares.

En la sección penal hay tres funcionarios, todos del Cuerpo de Tramitación. La Tramitadora de refuerzo se encarga en exclusiva de los Delitos leves y ejecutorias. Los otros dos se reparten el resto de asuntos penales por números pares o impares.

Al tener el órgano competencia en Registro Civil, ejerce las funciones que son propias de la oficina



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

del Registro Civil y el funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal se encarga de los expedientes de divorcio de mutuo acuerdo y de guarda y custodia de hijos no matrimoniales consensuados.

Las guardias las realizan todos los funcionarios, tanto de la sección civil como de la penal y rotan por semanas. El órgano judicial dispone de una escasa plantilla. De hecho, dispone de una funcionaria de refuerzo desde enero de 2020. No ha habido ningún Expediente disciplinario en los dos últimos años. No hay problemas de absentismo ni de cumplimiento del horario. Los funcionarios fichan a través de la aplicación Hermes, controlada por la Delegación Territorial de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía.

Hay que hacer hincapié no sólo en las necesidades de plantilla, sino, fundamentalmente, en la rápida cobertura de las situaciones de baja por enfermedad o cualquier otro tipo de vacante.

El Palacio de Justicia de Moguer se encuentra en la C/ San Francisco, 28 de dicha localidad, edificio de dos plantas construido en 1992, y modificado posteriormente después del 2003, cuando se creó el Servicio Común de Notificaciones y Embargos. El Juzgado nº 2 de Moguer se encuentra en la planta baja del edificio. Las secciones civil y penal son dependencias de tamaño mediano, no hay espacio delante de las mesas para poner sillas para atender a los ciudadanos, sobre todo en civil. El edificio sede de los Juzgados y del Servicio Común es un inmueble amplio, pero mal aprovechado, hay poco espacio útil. Destacar que, aun siendo de nueva planta, presenta deficiencias como humedades, grietas y las dependencias del patio se inundan cuando hay fuertes lluvias. Igualmente, la instalación eléctrica es deficiente, produciendo interrupciones del suministro de forma frecuente como consecuencia de la sobrecarga de la red. Es también imprescindible un espacio mayor para archivos. La planta superior tiene dos salas de vistas, ambas con sistema Áurea para la grabación y reproducción de imagen y sonido, así como para la práctica de videoconferencias.

El Juez y el Letrado de la Administración de Justicia disponen en sus despachos de ordenador con doble pantalla y la correspondiente impresora. Se les ha facilitado por la Delegación ordenador portátil con ISL para conectarse en remoto. Hay también ordenador en las dos Salas de Audiencias, dotados de sistema de grabación del sonido y de la imagen, integrado en el sistema Áurea. El mismo sirve también para la realización de videoconferencias. Hay un ordenador por cada puesto de trabajo, con doble pantalla instalada recientemente. Hay siete impresoras en el Juzgado.

En el grado de implantación del expediente digital el órgano va avanzando a buen ritmo. En cuanto al acceso y utilización de las aplicaciones que ofrece el Punto Neutro Judicial, todos los funcionarios tienen acceso a todas y cada una de ellas, habiendo recibido todas instrucciones a fin de garantizar el uso adecuado de los medios técnicos e informáticos que tanto el Ministerio de Justicia como las Comunidades Autónomas con competencias en materia de justicia ponen a nuestra disposición, evitando la utilización incorrecta o inadecuada de dichos medios.

Se cumple, en el Servicio Común del partido judicial, el Reglamento 2/2010 de homogeneización de actuaciones de los servicios comunes procesales, en el que se establecen las líneas generales y procedimientos de funcionamiento de los servicios comunes, a fin de conseguir la finalidad de este reglamento.

Los exhortos los remiten de manera telemática a través del Punto Neutro Judicial o de Nautius, según se trate de órganos de fuera o de la Comunidad Autónoma Andaluza.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

Se describe en el sistema de gestión procesal el acontecimiento realizado. El grado de actualización de fases y estados es bueno. Se integran las resoluciones finales a través del sistema de gestión procesal.

Los libros de registro se llevan informáticamente. Sólo se llevan en soporte papel el libro de ceses y el de tomas de posesión. No se lleva libro físico de presos, pero debido al escaso número de causas con preso en este Juzgado, los funcionarios controlan directamente, bajo supervisión directa del Juez y LAJ, el estado de dichas causas.

La Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales está abierta en la entidad Banco de Santander y es la número 1937. A fecha 30 de septiembre pasado, el saldo era de 1.562.262,56 €. El día de la visita, 18-11-2022, el saldo ascendía a 1.553.425,23 €. Hay 552 cuentas activas. □□□□□

En materia civil no hay ningún asunto pendiente de registrar. Sí hay 115 asuntos contenciosos pendientes de incoar. Se trata de asuntos recibidos en septiembre del año en curso. La media de entrada de asuntos civiles es de 555,5 en jurisdicción contenciosa. A ello hay que añadir 82,5 asuntos anuales en materia de familia y 23 en jurisdicción voluntaria. La carga de trabajo se ha incrementado desde la anterior visita de Inspección en 2019. La asunción de este incremento solo sería posible con la creación de un tercer Juzgado en el partido judicial de Moguer.

Los asuntos contenciosos pendientes son 701. En materia de familia hay 93 asuntos pendientes. Hay 3 asuntos sin incoar, de septiembre de 2022. En ejecuciones, hay 23 sin registrar y 46 pendientes de incoar. La pendencia es de 1.128 asuntos. Recuérdese la dificultad de archivo de estos expedientes y el hecho de que el mayor retraso en el proveído de escritos sea en ejecución. Retraso en el proveído de escritos, toda vez que hay 1.493 en esta situación. De ellos, 1.105 son en ejecución habiendo transcurrido más de dos meses desde su recepción. En trámite, además de ser un número reducido, son de poca antigüedad.

Deficitario impulso en los procedimientos civiles.

En materia penal la entrada media anual es de 1.210 asuntos. Pendientes de incoar hay 42. Tiene 210 Diligencias Previas pendientes y 50 Procedimientos Abreviados en tal estado. Casi todos han sido repasados con motivo del alarde elaborado por el cese de la Juez titular D.^a María de los Ángeles Lucena Cepedillo.

Los Procedimientos por Delitos Leves así como las Ejecutorias, se incoan y despachan correctamente. Los Procedimientos por Delitos Leves pendientes son 58.

Se trata de unos números muy satisfactorios en pendencia. No obstante, el órgano tramita las Diligencias Previas 470/2017 incoadas por el incendio sufrido en el paraje La Peñuela, término municipal de Moguer, con más de 400 perjudicados. Aun cuando en el informe elaborado por el órgano se consigna que desde el 20-05-2022 está remitido a Fiscalía, aún no se ha dictado el Auto de transformación en Procedimiento Abreviado. La instrucción penal sí está terminada, el problema son las personaciones y la cuantificación de las indemnizaciones a los perjudicados que son más de cuatrocientos cincuenta. Nada más abrir el expediente en el sistema de gestión procesal es bastante lento, dado el volumen de información almacenado.

En conclusión, se considera que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Moguer presenta, en materia civil, retraso en el proveído de escritos derivados de ejecuciones.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

Encontrándose, en el resto de los parámetros, normalizado.

Para evitar ese retraso se considera necesario imponer al órgano un SEGUIMIENTO sobre la tramitación de escritos presentados en ejecución.

En materia penal, el órgano se encuentra dentro de los parámetros normales para los juzgados mixtos.

En definitiva se debe felicitar a la plantilla, con su equipo rector al frente, por la mejora del órgano desde la fecha de la última visita de inspección girada en 2019.

Particípese el presente acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario Coordinador Provincial y al órgano afectado, para su conocimiento y efectos procedentes. Incóese el correspondiente expediente de SEGUIMIENTO.

3.- ASUNTOS VARIOS

3.1- MEMORIA ANUAL de actividades y Funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, correspondiente al año 2022.

MEMORIA ANUAL de Actividades y Funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, correspondiente al año 2022.

La Sala de Gobierno, tras la exposición del Presidente sobre el texto completo remitido con anterioridad, que recogía los distintos apartados de la Memoria anual del año 2022, debatió ampliamente al respecto, tomando también conocimiento de la referencia del Presidente a unas propuestas de rectificación memoria remitidas via email, con fecha 21 pasado, por Lara Inmaculada Blanco Coronil, con el texto literal siguiente: “A continuación, remito las Propuestas de Rectificación de la Memoria Anual 2022 que efectúan miembros de Sala de Gobierno y Decanos PARA inclusión en el Orden del Día para el Pleno convocado para el próximo 25 de abril de 2023”. En archivos adjuntos, se incluye el Encabezamiento y distintos Informes de las provincias referenciadas. En concreto, el Encabezamiento, escrito sin firma alguna ni identificación de los interesados, refleja literalmente: “PROPUESTA DE RECTIFICACIÓN DE LA MEMORIA JUDICIAL 2022 EN RELACIÓN A LAS NECESIDADES REALES DE CREACIÓN DE NUEVAS PLAZAS JUDICIALES EN ANDALUCÍA. Examinada la Memoria Judicial de 2022 en relación a la propuesta de creación de nuevas plazas judiciales en Andalucía, a continuación se plantea la rectificación de la misma por parte de los miembros electos perteneciente a la Asociación Profesional de la Magistratura, Decanos y varios Presidentes de Audiencias Provinciales. Las mencionadas rectificaciones se basan en necesidades reales teniendo en cuenta la carga que en la actualidad asumen tanto los órganos colegiados (Audiencias Provinciales y TSJ), como órganos unipersonales de nuestra CCAA. Del mismo modo, las propuestas se entienden ajustadas a los módulos aprobados por el Consejo General del Poder Judicial. Se adjuntan como Anexos, los Informes elaborados por miembros de la Sala de Gobierno, siguiendo el siguiente orden: 1. Granada, 2. Málaga, 3. Almería, 4. Jaén, 5. Sevilla, 6. Córdoba, 7. Cádiz”. Salvo los anexos relativos a Málaga, Sevilla y Jaén, que vienen identificados



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

los proponentes y, en su caso, los firmantes (sólo Jaén), el resto de anexos vienen sin firma alguna ni identificación de los proponentes.

En el turno de intervenciones, tomaron inicialmente la palabra varios miembros electos de la Sala de Gobierno, D. José María Páez, D. Esteban Brito, D. Juan José Parra Calderón, Doña María Luisa Zamora Segovia, Doña Francisca Martínez Molina, Don Alberto Manuel del Águila, D. Miguel Angel Pareja Vallejo, Doña Rocío Marina, quienes realizaron manifestaciones centradas en las necesidades de nuevas plazas judiciales, entendiendo que el apartado III.1 de la memoria era insuficiente y no abarcaba en su totalidad las necesidades reales del territorio.

El Presidente, en su contestación, lamenta primeramente que el email de propuestas de rectificación antes recogido se remita el último día para alegaciones de la Memoria; y comenta, sobre todo, la incorrecta forma de proceder por la falta de identificación y firma del encabezamiento y muchos anexos, por lo que no se pueden tomar en consideración aquellos escritos que carecen de identificación y firma de interesados o proponentes, salvo los anexos relativos a los Decanos de Málaga y Sevilla, que vienen identificados al final por tales proponentes, aunque sin firma, así como los referidos a los Decanos de Córdoba y Granada, cuyo contenido puede entenderse ratificado con sus alegaciones in voce y referencias a ellos en este Pleno.

Por otro lado, se transmite por el Presidente que alguna propuesta de nuevas plazas ya ha sido recogida (Jaén y Málaga), que habían formulado hace días sus respectivos Presidentes APs. En cambio, en cuanto al aumento de más plazas a las recogidas en el Apartado III.1 de la Memoria, el Presidente manifiesta que ha tratado de ser lo más objetivo, expansivo y razonable en las propuestas (petición de crear 69 unidades judiciales nuevas para este año 2023), así como que dicho apartado no puede desligarse de las reflexiones individualizadas que se hacen en el Apartado II de la Memoria al hablar de los diferentes tribunales y juzgados, donde aparecen mayores peticiones y necesidades de modo más globalizado, por lo que el Apartado III.1 debe entenderse como petición de plazas judiciales prioritarias y urgentes, a complementar con el resto de peticiones que sugiere una simple lectura de todo el Apartado II. No puede hablarse, pues, de que el apartado de nuevas plazas judiciales sea descorazonador ni irrelevante, puesto que es claramente implementalista con respecto a la Memoria de años anteriores y, además, no se puede tratar de forma excluyente y desconectada al conjunto de las peticiones y sugerencias de mayores necesidades que refleja el Apartado II.

Además, manifiesta el Presidente que, para acoger en su integridad las peticiones que alegan los integrantes electos, sería imprescindible volverse a documentar sobre múltiples aspectos de diversas jurisdicciones y, además, contar previamente con nuevos informes de los Presidentes de Salas y Audiencias, ya que algunos anexos (singularmente, el Decano de Málaga) no se limitan a órganos unipersonales sino que incorporan también peticiones numerosas de unidades en órganos colegiados. Y, al respecto, este documento de memoria anual debe estar remitido al CGPJ antes del 28 del presente.

Se producen, a continuación, nuevas intervenciones del Presidente y distintos integrantes de la Sala de Gobierno, tanto miembros electos como natos, entre estos últimos D. Francisco Sánchez Zamorano, Doña Lourdes García, D. Rafael Morales, y Doña María Luisa Alejandre.

Asimismo, se debate en este contexto sobre el punto del último Pleno del mes de diciembre del



pasado año relativo a las comisiones provinciales encargadas de desarrollar el estudio sobre necesidades de creación de órganos jurisdiccionales, para que los mismos sirvan de base para los trabajos de la Comisión Mixta con la Consejería de Justicia. Al respecto el Presidente recuerda diversas consideraciones expuestas en su momento, en el sentido de que el Pleno acordó la creación de dichas Comisiones, si bien como mecanismo de trabajo y auxilio a nivel provincial sobre necesidades de creación de órganos judiciales, así como que el acuerdo de diciembre se refería a desarrollar y fijar en próxima reunión de la Comisión la composición de las mismas y reglas de funcionamiento, por lo que estaba pendiente de iniciativas al respecto por quienes interesaron ese punto del orden del día del Pleno de diciembre.

Tras nuevas intervenciones del Presidente y distintos integrantes de la Sala de Gobierno, se apunta mayoritariamente la posibilidad de que sean transcritas y unidas literalmente a la presente acta alegaciones escritas remitidas al efecto como fórmula de acoger y asumir favorablemente el contenido de la Memoria 2022, así como acoger la propuesta del Presidente de rectificar parcialmente y ampliar el apartado III.2 de la Memoria, relativo a nuevas plazas de jueces y magistrados, en el sentido de añadir un nuevo párrafo con una posible redacción y consideración última al respecto, a saber que "el aumento de planta judicial que se detalla en dicho apartado se considera imprescindible y prioritario acometer cuanto antes, si bien no cierra totalmente las necesidades reales de unidades judiciales en el territorio andaluz, pues debe integrarse con las conclusiones individualizadas del apartado II, donde por órganos y jurisdicciones se informa y detalla la necesidad, incluso, de una mayor ampliación de planta judicial en algunos partidos judiciales y jurisdicciones".

Tras nuevas intervenciones, seguidamente se sometió a votación en bloque la Memoria Anual del año 2022, siendo aprobada por la mayoría de los asistentes, con el único voto contrario de D. José María Páez, que insiste en su planteamiento y entiende que deben acogerse mayores peticiones numéricas de plazas y que, de no ser así, no podría votar favorablemente la referida Memoria, por lo que anuncia voto particular sobre este único apartado III.1 de la Memoria, que se adjunta a la presente acta.

Se acuerda y aprueba igualmente que se incorporen como anexo a la memoria anual 2022, como parte integrante de este acta y de la propia memoria aprobada, alegaciones remitidas por escrito antes reseñadas.

De igual forma, y a iniciativa de Doña Francisca Martínez, se acuerda que en la próxima Comisión del mes de mayo se introduzca como punto del día la constitución de las referidas comisiones provinciales para desarrollar el acuerdo aprobado en su día, cuya ejecución no fue instada por ninguno de los miembros de esta Sala, ni la composición de las mismas y reglas de funcionamiento, de lo que toma nota este Secretario de Gobierno.

La Sala acuerda, finalmente, ELEVAR LA MEMORIA ANUAL aprobada, con certificación del presente Acuerdo, al Consejo General del Poder Judicial, conforme a lo dispuesto en el art. 152.1 9º de la Ley Orgánica 6/1.985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con el art. 4 i) del Reglamento nº 1/2000, de 26 de julio, de los Órganos de Gobierno de Tribunales.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

Y no habiendo otros asuntos que tratar, se da por terminada la sesión a las 14 horas y 15 minutos, de lo que da fe el Ilmo. Sr. Secretario de Gobierno, con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente.

VOTO PARTICULAR A LA APROBACIÓN DE LA MEMORIA DEL TSJA 2022 que formula José María Páez Martínez-Virel Magistrado Juez Decano de Málaga

En el día de la fecha ha sido aprobada por el Pleno de la Sala de Gobierno del TSJA la Memoria anual de actividades del TSJA correspondiente al año 2022 con el voto en contra del que suscribe que formula voto particular con base en los siguientes fundamentos y dentro del mas absoluto respeto al sentido del voto del resto de los miembros de la Sala, así :

Nada que objetar al contenido general de la Memoria. Se trata un documento que contiene un exhaustivo análisis basado en datos estadísticos oficiales. Solo cabe felicitar a la Presidencia por el trabajo realizado. La discrepancia se refiere únicamente a la petición de plazas que se estiman necesarias para completar la planta judicial en Andalucía y para ello, una vez que se tuvo conocimiento del borrador de dicha Memoria se remitió escrito al Presidente del siguiente tenor literal : “se remite el presente informe para que se tenga en cuenta a la hora de determinar el número de plazas necesarias en el partido judicial de Málaga para ofrecer a la ciudadanía una justicia de calidad. El Decreto de creación de plazas para el año 2022 solo dispuso la creación de un juzgado de primera Instancia en esta anualidad que tiene prevista su entrada en funcionamiento en septiembre de 2023 por lo que aún no se ha hecho efectivo. Por todo ello y visto que se pedían 29 plazas en órganos unipersonales y solo se ha creado 1 se mantienen los mismos argumentos y peticiones y el número se fija en 28. A este ritmo tardaremos 28 años en alcanzar la planta judicial necesaria. La memoria anual de actividades debe contener una propuesta de creación de nuevas plazas judiciales para la próxima anualidad sin olvidar el diseño de la planta realmente necesaria. Así, como ya se dijo en las alegaciones realizadas a la anterior Memoria, partimos de los datos ofrecidos por el PNJ y de nuestros propios datos así como de las peticiones realizadas en años anteriores y las creaciones de nuevos juzgados en las diferentes anualidades pasadas. La petición de nuevas plazas judiciales y la creación de las mismas debe ser valorada como la referencia clave para la solución de los problemas de la Justicia en toda España. Tomar en consideración otros parámetros, que también pueden ser útiles, como la mejora de la gestión en general a las que se refieren las leyes de eficiencia que están en trámite, provocará que se proyecte una imagen que no se corresponde fielmente con la realidad de la justicia en Andalucía en general y de Málaga en particular y, especialmente, de sus necesidades. De la lectura de los datos que deben constituir la base de la Memoria se evidencia que se precisan verdaderos cambios estructurales en la mayoría de los partidos judiciales incluidos los órganos colegiados.

*Se debe insistir en que frente a los que sostienen que el **incrementalismo** de plazas judiciales no es la solución a los problemas de la justicia andaluza y nacional seguramente para justificar la falta de inversiones, debemos mantenernos firmes en nuestra petición de equiparar el número de jueces españoles y andaluces a la media europea, que se sitúa prácticamente en el doble de los existentes en nuestra comunidad. Todas las mejoras en gestión y optimización de recursos que se ofrecen como*



la solución alternativa son bienvenidas, sin embargo, la resolución final de los asuntos corresponde a los jueces y con este número tan escaso no se puede dar una respuesta satisfactoria en tiempo a la demanda de la ciudadanía. Éstas mejoras pueden agilizar los trámites judiciales hasta que haya que resolver, pero es aquí donde no se puede ir más allá y la única solución es la creación de las plazas necesarias. A nuestro juicio, la memoria del TSJ debe contener las **necesidades reales** de plazas judiciales para que la justicia funcione de manera adecuada. Son varios los parámetros que se deben tener en cuenta. Aunque el más significativo sea el número de asuntos de entrada por juzgado, resulta también imprescindible tomar en consideración la pendencia del órgano y la carga de trabajo que se considera razonable para resolver los asuntos con un mínimo de atención y calidad, sin olvidar nuestra ya vieja reivindicación de **la afectación que pueden tener estas cargas excesivas sobre la salud laboral**. Por todo ello solicitamos un cambio radical en la planificación de la Planta Judicial a medio y largo plazo. Se debe establecer una visión a medio o largo plazo que sea compatible con las nuevas reformas que llegarán como los tribunales de instancia. No podemos pretender ciertamente que todas las necesidades se vean cubiertas en una sola anualidad o incluso en dos o tres pero si sería conveniente tener claro hacia donde se camina para poder hacer una planificación seria que no precise continuas rectificaciones. Téngase en cuenta que todo ello repercute en múltiples aspectos como la planificación de infraestructuras y edificios que deben ser planificados a largo plazo y que en ocasiones se quedan pequeños el mismo día de su inauguración.

A título de ejemplo, sin perjuicio de que se haga lo mismo en el resto de de provincias de Andalucía en el partido judicial de Málaga podemos realizar las siguientes observaciones :

1. Se propone el despliegue de las Salas civil y penal del propio tribunal en las provincias de Málaga tal y como ocurre con las Salas de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo. No debemos esperar a que dicho tribunal esté colapsado para iniciar estos trámites. Debe ser constituida con al menos 3 plazas. Nada se ha hecho al respecto.

2. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ con Sede en Málaga tiene una carga de trabajo de 595 asuntos por magistrado cuando el criterio orientativo la sitúa en 300 asuntos. Pese a referirse a este dato en la memoria de 2021 y a la necesidad de incremento de la planta judicial se solicita únicamente una plaza cuando según el criterio orientativo serían necesarias al menos otras 6. Y todo ello sin tener en cuenta los 10.102 asuntos que según la estadística siguen pendientes. La creación de plazas no supondría un aumento real del gasto pues la Sala tiene comisiones de servicio con y sin relevación de funciones.

3 La Sala de lo Social del TSJ con sede en Málaga cuenta con 377 asuntos por magistrado cuando la carga adecuada son 310. Se proponen al menos 2 plazas par completar la planta en el futuro.

4. Las secciones penales de la Audiencia Provincial soportan una carga por magistrado de 373,05 asuntos por lo que al menos sería necesarias 5 plazas más. Las secciones civiles cuentan también con una elevadísima carga media por magistrado de 341 asuntos lo que supone al menos 2 por sección, total 6 .

5. Los Juzgados de Primera Instancia son, sin duda, los que se encuentran en peor situación. Es por ello que con ocasión de la última visita del servicio de inspección realizada a estos juzgados en Málaga se elaboró un informe en el que se solicitaba la creación de siete juzgados de primera



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

instancia. Creemos que debe mantenerse esta solicitud del propio servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial. Entiendo que esta petición viene determinada por pura consideración al Servicio de Inspección del Consejo.

6. Los Juzgados de Instrucción de Málaga con 76.052 ingresos para 14 órganos lo que supone una media de más de 5.432 asuntos por juzgado cuando lo conveniente se sitúa en 3300, precisan también de la creación de más plazas. Para alcanzar dicho número óptimo serían necesarias 6 plazas.

7. Los Juzgados de Violencia sobre la mujer superan también el criterio orientativo de 1600 asuntos como carga de trabajo pese a ello Málaga únicamente cuenta con tres juzgados de este tipo lo que impide que realicen guardias, para lo que se precisaría la creación de un nuevo juzgado. La situación actual repercute de manera muy negativa en la atención a las víctimas de este tipo de delitos pues cuando son presentados los presuntos autores en los juzgados de guardia de Málaga en horario de tarde, las víctimas se ven obligadas a comparecer en ese momento y también al día siguiente cuando el asunto ha sido remitido a los juzgados especializados. Entendemos que es fundamental la creación de un nuevo Juzgado de Violencia sobre la mujer no sólo porque se superen el número de asuntos de entrada que son recomendables, sino porque la adecuada atención a las víctimas de estos delitos y el éxito de esta jurisdicción así lo exigen. Y todo ello sin perjuicio de que posteriormente se valore la posibilidad de comarcalizar o no estos juzgados atendiendo a criterios adecuados de proporcionalidad de asuntos y proximidad geográfica real. En este caso estaríamos de acuerdo en comarcalizar con Torremolinos, lo que beneficiaría a las víctimas al contar con un juzgado de guardia de violencia con jornada prolongada y aliviaría la carga tanto de los Juzgados de Instrucción de Torremolinos como los de Málaga.

8. Los Juzgados de lo Mercantil vienen funcionando en Málaga en la actualidad como un tribunal de instancia de hecho a la espera de la regulación que está por venir. Tras la última creación producida este año de un juzgado las cifras siguen siendo abrumadoras por lo que se deberán crear dos plazas más de magistrados que se integrarían en la estructura del Tribunal de Instancia Mercantil

9. Los Juzgados de lo Penal deben completarse con otras 4 plazas para hacer frente a la avalancha de casos que entra cada año y que sitúa la media por juzgado excluidas las ejecutorias en cifras superiores a lo recomendable que son 400. No debe olvidarse que la tardanza en crear juzgados de este tipo ha llevado a que en la actualidad contemos con 14,950 asuntos pendientes de enjuiciamiento, siendo el partido con más pendencia en Andalucía seguido de Sevilla con 10,442

10. Los órganos unipersonales de la jurisdicción Contenciosa arrastran las consecuencias de una deficiente planificación desde su creación pues, aunque los asuntos de entrada se han ido adecuando a los criterios orientativos es lo cierto que los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Málaga cuentan con una pendencia al finalizar el año de 6,308 asuntos por lo que solicitamos la creación de dos plazas más de magistrados.

11. La situación de crisis provocada por la pandemia e igualmente una deficiente planificación de la planta judicial, ha situado a los Juzgados de lo Social en un momento muy delicado. A lo que también ha contribuido la supresión de los planes de refuerzo. El volumen de entrada se sitúa 238 asuntos por encima de los 800 recomendables, por lo que es inevitable una drástica ampliación de la



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

plantilla que estimamos al menos en 5 juzgados mas, teniendo además en cuenta que existen 17,996 asuntos pendientes de juicio.

22 plazas en órganos colegiados y 27 órganos unipersonales”

En el anterior informe que es simplemente un ejemplo y que además es, básicamente, una reiteración de informes emitidos en otras anualidades, se pide únicamente que las Memoria recoja no solo unas necesidades mínimas sino las necesidades reales, mas aún cuando hemos tenido conocimiento de que pese a que el Consejo General del Poder Judicial había solicitado la creación de cerca de 300 plazas en la última Comisión mixta, el Ministerio de Justicia ya tenía decidido crear únicamente 70, de las cuales solo 14 corresponderán a la CCAA de Andalucía.

En el último informe, hecho público el pasado 5 de octubre, de la **Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ)** se señala que el número de magistrados por 100,000 habitantes en España es de 11,24 frente a los 17,60 de media en Europa. La equiparación de Andalucía con Europa en este aspecto supondría la creación de mas de 500 plazas teniendo en cuenta que en nuestra Comunidad se superan los 1.000 jueces titulares. Finalmente, este voto particular pretende llamar la atención sobre la situación de los jueces y magistrados en Andalucía y en toda España, salvo algunas excepciones. Solo hay que analizar los datos estadísticos en los que se basa la Memoria que pese a reflejarlos y comentarlos no utiliza sus propios criterios para realizar la petición de plazas inclinándose por una petición basada en criterios territoriales y posibilistas y no criterios objetivos y técnicos, lo que justifica mi oposición a la misma.

José María Páez Martínez-Virel

Juez Decano de Málaga

ANEXOS

SITUACIÓN DE LOS JUZGADOS DE GRANADA CAPITAL SEGÚN DATOS DEL BORRADOR DE LA MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA. AÑO 2022

JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA

Ingresos: 32.040

Organos: 15/16

Ingresos por órgano 2.069/1.940

Módulo orientativo del CGPJ.....1.200 asuntos anuales

Módulo de entrada órgano.....161,6%

61,6 x 15/16 = 924 / 985

Necesidades de Juzgados9,2 / 9,8 Juzgados

JUZGADOS INCAPACIDADES

Ingresos: 1.605



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

Módulo orientativo del CGPJ.....704 asuntos anuales
Módulo de entrada órgano.....227 %
Necesidades de Juzgados1,2 Juzgados

JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA (FAMILIA)

Ingresos: 3.856
Organos: 3
Ingresos por órgano: 1.285
Módulo orientativo del CGPJ.....1.323 asuntos anuales
Módulo de entrada órgano.....97 %
Necesidades de Juzgados0

JUZGADOS INSTRUCCIÓN

Ingresos: 34.466
Organos: 9
Ingresos por órgano: 4.163
Módulo orientativo del CGPJ.....3.300 asuntos anuales

Módulo de entrada órgano.....126 %
 $26 \times 9 = 234$
Necesidades de Juzgados2,3 Juzgados

JUZGADOS VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

Ingresos: 3.595
Organos: 2
Ingresos por órgano: 1.789
Módulo orientativo del CGPJ.....1.600 asuntos anuales
Módulo de entrada órgano.....111,8%,8%
 $11,8 \times 2 = 23,6$
Necesidades de Juzgados0,27 Juzgados

JUZGADOS MERCANTIL

Ingresos: 1.401
Organos: 2
Ingresos por órgano: 700
Módulo orientativo del CGPJ.....435 asuntos anuales

Módulo de entrada órgano.....160 %
 $60 \times 2 = 120$
Necesidades de Juzgados1,2 Juzgados



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

JUZGADOS DE LO PENAL

Ingresos: 3.096

Organos: 6

Ingresos por órgano: 516

Módulo orientativo del CGPJ.....400 asuntos anuales

Módulo de entrada órgano.....129 %

$29 \times 6 = 174,6$

Necesidades de Juzgados1,7 Juzgados

JUZGADOS CONTENCIOSO--ADMINISTRATIVOSADMINISTRATIVOS

Ingresos: 3.158

Organos: 5

Ingresos por órgano: 632

Módulo orientativo del CGPJ.....570 asuntos anuales

Módulo de entrada órgano.....110,8 %

$29 \times 6 = 174,6$

Necesidades de Juzgados0,5 Juzgados

JUZGADOS DE LO SOCIAL

Ingresos: 8.148

Organos: 8

Ingresos por órgano: 1.023

Módulo orientativo del CGPJ.....800 asuntos anuales

Módulo de entrada órgano.....127,8 %

$27,8 \times 8 = 222,4$

Necesidades de Juzgados2,2 Juzgados

JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIANCIA PENITENCIARIA

Ingresos: 3.478

Organos: 1

Ingresos por órgano: 3.478

Módulo orientativo del CGPJ.....5.240 asuntos anuales

Módulo de entrada órgano.....66,3 %

Necesidades de Juzgados0

JUZGADOS DE MENORES



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

Ingresos: 995

Organos: 2

Ingresos por órgano: 497

Módulo orientativo del CGPJ.....875 asuntos anuales

Módulo de entrada órgano.....56,8 %

$27,8 \times 8 = 222,4$

Necesidades de Juzgados0

Propuesta de D. Rafael Morales Ortega, Doña Francisca Martínez Molina y D. Miguel Sánchez Gasca , miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, en relación a las necesidades reales de creación de nuevas plazas judiciales en la provincia de Jaén , proponiendo rectificación de la Memoria Judicial 2022 en los siguientes términos:

A) En relación con el aumento de número de Magistrados en Órganos Colegiados en las Secciones Civiles, no se ha incluido ninguna plaza de Magistrado en la Sección civil de la Audiencia provincial. A pesar de la creación de una plaza en dicha sección (de reciente funcionamiento) la media de ingresos por magistrado (6) es de 404 , cuando partiendo del criterio técnico, orientativo e indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial, es de 200 asuntos por Magistrado y año para las Secciones civiles de Audiencias Provinciales, esa cifra es superada, y si bien justificó la creación de una nueva plaza cuya operatividad práctica no se verá reflejada hasta la siguiente anualidad, se evidencia que serían necesarias 4 plazas de Magistrados más, ya que los ingresos que se registran anualmente van superando con creces los 200 asuntos indicados llegando en 2022 a registrarse 2424 asuntos;

No obstante conviene mantener medida de apoyo judicial mediante JAT; y comisión de servicio sin relevación de funciones

B) Respecto a los Juzgados de Primera Instancia de Jaén, la creación del Juzgado num 4 (exclusivo y no excluyente en Familia) ha descargado en parte al Juzgado de Familia, pero no consigue minorar la carga de trabajo del resto de Juzgados de Primera Instancia (excluido Mercantil) e incluso incorporándose a reparto de asuntos el que había sido Juzgado especial en Condiciones generales de contratación; los asuntos registrados en 2022 alcanzaron la cifra de 9504 (excluido Mercantil), a los que habrá de añadirse los asuntos que se registren de condiciones generales de contratación, con lo cual se evidencia la necesidad de creación de un nuevo Juzgado de Primera Instancia, cuando el criterio orientativo por órgano es de 1200 asuntos.

C) En los Juzgados de lo Social es llamativo que no se haya sugerido la creación de un nuevo Juzgado atendiendo al aumento de asuntos registrados cada año llegando en 2022 a una media de asuntos por órgano de 1104 , y siendo el indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial, de 800 asuntos por órgano y año, esa cifra es superada años tras año generando una pendencia en los últimos años que ha obligado se haya nombrado refuerzo por Comision de Servicios o por JAT que no logra minorar la misma ante el aumento de asuntos, por lo que pone en manifiesto tal necesidad; indicando que estando en la misma o parecida situación, se ha fijado en



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

Memoria la creación de nuevos Juzgados de lo Social en otros partidos judiciales y no en éste. Siendo necesario que se mantenga en todo caso la medida de refuerzo en estos Juzgados por JAT D) Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de la provincia: Partiendo del criterio orientativo referencial de 680 asuntos civiles y 1000 asuntos penales, resulta necesario crear nuevas plazas en la provincia de Jaén.

A la vista de las nuevas plazas judiciales propuestas en la Memoria, teniendo en cuenta que se aconseja nueva plaza en Berja (Almería) con dos Juzgados actualmente y con un número de ingresos por órganos de asuntos civiles de 1125 y de 987 en asuntos penales y nueva plaza en Vera (Almería), con cuatro Juzgados en la actualidad y con un número de ingresos por órganos de asuntos civiles de 961 y de 788 penales, se ha de indicar que existen Juzgados Mixtos en Jaén que se encuentran en similar situación con una media de asuntos civiles superior a los 680 por año y si se tiene en cuenta que la desaparición de los Juzgados especiales de condiciones generales de contratación supondrá un aumento paulatino de asuntos civiles. Linares, 5 Juzgados actualmente con una media de ingresos de 973 asuntos civiles y 976 asuntos penales; Andújar, 3 Juzgados con una media de ingresos de 1015 asuntos civiles y 940 asuntos penales, Úbeda, 3 Juzgados, 946 civiles y 964 penales y La Carolina, 2 Juzgados con media de ingresos de 1028 asuntos civiles y 932 asuntos penales.

E) Juzgados de lo Penal. En Jaén existe un desequilibrio en la carga de trabajo de estos Juzgados soportando más carga el Juzgado de lo Penal exclusivo en materia de violencia sobre la mujer, que no excluyente de otras materias; por lo que se hace necesario para evitar este desequilibrio que dicho Juzgado tenga competencia en materia de violencia sobre la mujer con carácter exclusivo y excluyente.

La memoria del TSJ debe contener las necesidades reales de plazas judiciales para que la justicia funcione de manera adecuada y dada la carga de trabajo soportada por cada Magistrado o Juzgado se consideran necesarias en la provincia de Jaén:

1.-Órgano Colegiado: Sección civil de la Audiencia Provincial: 4 plazas.

2.- Órganos Unipersonales: Juzgados de Primera Instancia Jaén: 1 plaza

Juzgados de lo Social: 1 plaza

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción: 4 plazas:
Linares, La Carolina, Andújar, y Úbeda.

Así se propone y solicita su inclusión en la Memoria 2022 para la provincia de Jaén

En Jaén a 19 de abril de 2023

Fdo. Rafael Morales Ortega

Fdo Doña Francisca Martínez Molina



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

EN RELACIÓN CON LOS JUZGADOS DE SEVILLA, SE EMITE EL SIGUIENTE INFORME SOBRE NECESIDADES DE PLANTA DEL PARTIDO JUDICIAL.

La actual planta de los juzgados de Sevilla es la siguiente:

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA	30 (6 DE ELLOS DE FAMILIA)
JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN	20
JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER	4
JUZGADOS DE LO PENAL	16
JUZGADOS DE LO SOCIAL	14
JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMVO	13
JUZGADOS DE MENORES	3
JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA	2
JUZGADOS DE LO MERCANTIL	3
REGISTRO CIVIL	1

El 1 de septiembre de 2020 entraron en funcionamiento los Juzgados nº 30 de Primera Instancia (Familia), nº 16 de lo Penal y nº 12 de lo Social.

El 31 de enero de 2022 entró en funcionamiento el Juzgado de lo Social nº 13.

El presente año entran en funcionamiento los Juzgados de Primera Instancia nº 31 y de lo Mercantil nº 4.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 14 se transformó en el Juzgado nº 14 de lo Social y los asuntos del orden contencioso serán asumidos por un magistrado/a e régimen de comisión de servicio sin relevación de funciones.

La base del informe lo constituye el Modelo de la Medición de la Carga de Trabajo de Juzgados y Tribunales, aprobado definitivamente el 19-09-13 por el CGPJ, para determinar el módulo de entrada anual de asuntos por cada órgano unipersonal o carga máxima de trabajo; elemento que indica de manera aproximada el tiempo razonable de trabajo en cómputo anual para un Magistrado con destino en los Juzgados. Y se tiene igualmente en cuenta el Estudio sobre la situación de los órganos judiciales elaborado por la Sección de Organización y Gestión con fecha 31 de diciembre 2010. Así como el Acuerdo entre el CGPJ y el MJ para la determinación del sistema de medición de la carga de



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

trabajo de los órganos judiciales de 20 de diciembre de 2018 (BOE 29 de diciembre de 2018).

Los trece JATs destinados en la provincia han asumido funciones de sustitución y refuerzo en los Juzgados de Sevilla capital. Su número es claramente insuficiente a la vista de que es preciso mantener y/o establecer medidas de refuerzo y sustitución en Juzgados de diverso orden y comisiones de servicio en las Secciones del orden penal de la Audiencia Provincial y Salas de lo Contencioso Administrativo y Social de Sevilla. Así como en atención a las bajas temporales, por diversas causas motivadas por licencias de enfermedad, maternidad y paternidad ,etc.

La planta de Jats debe aumentar en tres más.

a) Juzgados de Instrucción

Los Juzgados de Instrucción de Sevilla , con una planta inamovible desde el año 1992, conocieron en el año 2022 de una entrada de 61.924 asuntos(media por órgano de 3096). Más una media por órgano de 91 exhortos. La entrada de asuntos, conforme a la estadística del PNJ, alcanzó la cifra de 71.618, con un promedio por órgano de 3.580,90 cuando el módulo teórico es ee 3.300. Dada la tramitación de las macrocausas o complejas es necesaria la creación de dos Juzgados nuevos y mantener , en su caso, los refuerzos existentes .

b) Juzgados de Violencia sobre la Mujer y de Menores

El año 2007 entró en funcionamiento el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 4; y con este número de Juzgados, considero por el momento adecuada la ratio con el número de asuntos ingresados, sin perjuicio de que haya de estarse a lo que acaezca en años sucesivos . Respecto de los Juzgados de Menores dada la entrada de asuntos registrada no se considera necesaria por este año la creación de alguno.

c) Juzgados de lo Penal

Cada uno de los 16 Juzgados de lo Penal de Sevilla conocieron de media durante el periodo analizado de 459 asuntos penales para enjuiciamiento. En 2014 se supera el módulo en más 58%, en 2015 en más el 25%, en 2016 en más el 28%, en 2017 en más un 43% , en 2018 en un 32,8% , en 2019 en un 24,28%, en 2020 se llega a la cifra de 390 asuntos de entrada , como consecuencia del Covid-19, en el 2021 en un 29,25% y en 2022 en un 15%: media de incremento en los últimos cinco años de un más 29 %).Además de este dato, hay que tener en cuenta las reformas operadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevén que los Juzgados de Instrucción puedan remitir sentencias dictadas por ellos para su ejecución por los de lo Penal. Como consecuencia los Juzgados de lo Penal de Sevilla han conocido de 3.818 ejecutorias nuevas con dicha procedencia, además de las que cada Juzgado incoe derivadas de sus propias sentencias .A lo que debe añadirse un total de 1.849 exhortos. Así pues, deberían crearse al menos 2Juzgados . A su vez, es preciso



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

incrementar la plantilla de funcionarios y, en todo caso, establecer un refuerzo de estos con la finalidad de normalizar el trámite a la vista del exceso de señalamientos y ejecutorias incoadas.

d) Juzgados de 1ª Instancia.

En cuanto a los Juzgados de Primera Instancia no especializados (23), en atención a que se han repartido 57.956 asuntos y que el módulo de entrada se estima que no debe sobrepasar los 1200 asuntos, cada uno de dichos Juzgados de Sevilla (23, por la competencia exclusiva y excluyente del nº 29 en materia de cláusulas abusivas) conocerá de unos 2.520 asuntos, por lo que se supera el módulo en un 109 % (desde 2014 se superan los módulos de entrada en un más 132,5%, 132,5%, 119 % un 114% en 2017 , un 61,6 % en 2018 , un 72% en 2019 , un 60,25% en 2020, y un 92% en 2021). Lo que por razones de prudencia, convendría crear 7 Juzgados más o plazas judiciales. Siendo preciso contar con un número suficiente de JATs.

Ha de hacerse constar que a dicha cifra debería sumarse los 10.325 asuntos de entrada hasta 2018 referidos a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, asumida la competencia por el órgano Bis de enjuiciamiento adscrito al Juzgado nº 10 y que a partir del 30 de junio de 2018 fue asumida la competencia de dicha materia por el Juzgado nº 29, de nueva creación con competencia exclusiva y excluyente. A lo que procede sumar los 5.337 referidos a esta clase de entrada en 2019 , los 3.285 en 2020, los 3.287 en 2021 y los 1.916 en 2022 .

Esto supuso un 861,5% más de asuntos de esta materia en las primeras cifras y con la entrada en el año 2019 de un 445% más de asuntos y del 273% en 2020 y igual cifra porcentual en 2021, así como un 119% en el 2022, por lo que deberían crearse un total de , al menos, tres plazas judiciales más.

El total de creación de plazas en este orden jurisdiccional debe ascender a diez juzgados más.

En todo momento ha de garantizarse la prestación del servicio por magistrados /jueces en el órgano Bis mencionado hasta la finalización de la entrada indicada , con inclusión de los trámites de recurso así como las entrada de ejecuciones.

Respecto de los Juzgados de Familia, que asumieron las competencias en materia de internamientos involuntarios y prestación de apoyos, les correspondería conocer de un máximo de 1.323 asuntos. Se han repartido a cada uno de estos Juzgados una media de 1914 asuntos, lo que supone una desviación del módulo en un 44,6%-los módulos desde el año 2014 y sucesivos se incrementaron en más 69,9%, 70%, 73% , 81% , 56%, 61% en 2019 , un 12,6% en 2020 y un 7 % en 2021-, a lo que se añaden las actuaciones requeridas por la entrada en vigor de la Ley 8/2021 con la revisión de todos los procedimientos de incapacidad, lo que exige la creación de un Juzgado más.



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

e) Juzgados de lo Contencioso-Administrativo

La estadística, correspondiente a los asuntos repartidos entre los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, durante el año 2022, arroja un total de 5.184 asuntos a repartir entre 14 Juzgados, lo que supone que la carga de trabajo por cada juzgado es de 371 asuntos. El módulo de entrada de asuntos para los Juzgados de lo Contencioso se fija en un máximo de 570 asuntos.

f) Juzgados de lo Social

Se han repartido entre los 13 Juzgados de lo Social de Sevilla un total de 18.451 asuntos, por tanto ha correspondido a cada Juzgado de lo Social una media de 1.419 , lo que supone una variación sobre el módulo de entrada (800) del 77,37%-desde 2014 el incremento en los módulos de entrada ha supuesto un más del 64,75%, un 50,62%, el 55% , del 49% , en 2018 del 61,25% , en 2019 del 80% , en 2020 del 53,75% y en 2021 de un 89,5-;y para equilibrar la situación sería necesaria la creación de 5nuevos Juzgados de lo Social, una vez creado y puesto en funcionamiento el juzgado nº 13. En esta jurisdicción se precisa mantener el refuerzo , tanto el realizado por dos magistrados JATs como por dos jueces sustitutos externos, así como por la oficina de refuerzo, así como en concepto de autorrefuerzo por los titulares de los distintos juzgados.

g) Juzgados de Vigilancia Penitenciaria

Con la creación del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 11 de Andalucía, con sede en Sevilla, se vino a paliar la situación de sobrecarga que afectaba al único órgano de esta clase que ha existido en este Partido Judicial. Con independencia de lo resuelto en el referido Acuerdo de medición de la carga de trabajo las Magistradas titulares de dichos órganos han estimado que la carga de trabajo debe medirse por el número de internos , con un máximo de mil.

h) Juzgado de lo Mercantil

El módulo de entrada de asuntos para estos Juzgados está fijado en 435 asuntos. El número de asuntos quehan entrado en los mismos ascendió a 3.418. Esta situación determina que cada órgano conozca de un161% de asuntos más, porcentaje que se vienen repitiendo anualmente desde la última crisis económica (un 92% más de asuntos en 2018 , un 141% en 2019 , un 90 % en 2020, y un 115% en 2021) y la necesaria creación de dos Juzgadosy el mantenimiento de las medidas de refuerzo vigentes.

Sevilla, a 17 de abril de 2023

EL MAGISTRADO JUEZ DECANO

Francisco José Guerrero Suárez



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

En relación con el apartado II.4.8 JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO de la MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA AÑO 2022, en mi calidad de Magistrado Juez Decano de los Juzgados de Córdoba y miembro electo de esta Sala de Gobierno no puedo compartir la propuesta de que “se considera conveniente proceder a la transformación del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Córdoba por el Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Córdoba, lo que permitiría contar con un segundo órgano judicial para especializar en familia, capacidades e internamientos” y ello por las siguientes razones:

-Bien es cierto que este Magistrado Juez Decano viene demandando en todos su informes anuales (siendo el último el de fecha 12 de enero de 2023 que remití al Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, en relación a las necesidades personales y materiales más urgentes referidas al Partido Judicial de Córdoba para la elaboración por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla de la Memoria Anual de Actividades y Funcionamiento de los órganos jurisdiccionales del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía) la creación en el partido judicial de Córdoba de Juzgados de Primera Instancia y así , en el último de ellos,

"-Solicitamos la creación de cinco nuevos Juzgados de Primera Instancia, pues como hemos venido exponiendo en los años anteriores, no se ha producido disminución del número de asuntos ingresados, que superan, prácticamente en un 70% los módulos de entrada. Pues han entrado aproximadamente 2.035 asuntos por Órgano, siendo el módulo de entrada de 1.200 asuntos.

Ya, en su día, en la propia Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se reconocía la necesidad de creación de nuevos órganos.

En los informes emitidos en años anteriores, ya decíamos: "la realidad es que, pese al esfuerzo y laboriosidad de los Jueces de Primera Instancia, la situación no mejora y tiende a hacerse más grave ya que el resultado de esta sobrecarga es que la pendencia continúe aumentando". Pero la situación se ha visto agravada con la modificación de competencias, de las últimas reformas de la LEC, que viene a residenciar en los Juzgados de Primera Instancia más competencias, con aumento de la complejidad y el número de asuntos ingresados.

A lo anterior debemos a añadir la revisión que están realizando de todos los procesos de incapacidad tramitados en su día, a la vista de las modificaciones llevadas a cabo por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Pero si queremos solucionar el problema es necesaria la creación de cinco nuevos Órganos."

-Pero lo anterior no debe perseguirse transformando órganos de otras jurisdicciones



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

en Juzgados de Primera Instancia, pues la transformación tan sólo es “fuente de disgustos y malestar”. Además con la misma diligencia que se pide la transformación se debería pedir la creación de nuevos órganos cuando el módulo de entrada supera los módulos legalmente establecidos.

- Asimismo, destacamos la preocupante tendencia que se observa en esta provincia Córdoba de intentar paliar las deficiencias de algunas jurisdicciones a coste cero, con la conversión de órganos de otras jurisdicciones, en este caso además la que fiscaliza la actuación de la Administración, en lugar de invertir en la creación de nuevos órganos.

-Por otra parte consideramos que con órganos saturados muy por encima del módulo no podemos dar una respuesta de calidad a la demanda de Justicia de los ciudadanos y en un plazo razonable. Con esta medida de transformación del Juzgado de lo Contencioso número 5 de Córdoba en Juzgado de Primera Instancia, los Juzgados de Primera Instancia de Córdoba tan sólo paliarán su situación, pero no se resolverá el problema de dicha Jurisdicción debido a la carga de trabajo que soporta, mientras que la Jurisdicción Contencioso Administrativa se verá resentida al repartir entre un Juzgado menos, lo que sin duda podría influir en dar una respuesta de calidad a la demanda de justicia de los ciudadanos y en un plazo razonable.

Por todo ello, solicitamos que se reponga la propuesta de que “se considera conveniente proceder a la transformación del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Córdoba por el Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Córdoba, lo que permitiría contar con un segundo órgano judicial para especializar en familia, capacidades e internamientos” por la siguiente: “solicitar la creación del Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Córdoba, lo que permitiría contar con un segundo órgano judicial para especializar en familia, capacidades e internamientos, así como de, al menos, un juzgados más de primera instancia.”

EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

Fdo.: Lorenzo del Rio Fernández

Fdo.- Pedro Jesús Campoy López